

LE
MONDE
diplomatique
Aún Creemos en los Sueños



Nuevo libro DIGITAL
\$2.500

**La violencia
y la lucha social**

PDF en venta en
www.editorialauncreemos.cl

Pandemia Covid-19 Nada será igual

Dossier Coronavirus:

por Libio Pérez, Álvaro Ramis, Rodrigo Mundaca, Ibán de Rementería, Rafael Urriola, David Debrott, Dante Castillo, Mario Torres, Renaud Lambert, Pierre Rimbert, Frédéric Lordon, Alain Garrigou, André Grimaldi, Frédéric Pierru, Théo Bourgeron, Michael Marmot y Denis Duclos

Chile y el camino a una Nueva Constitución

por Pamela Figueroa

Brasil: Petrobras en manos de Bolsonaro

EEUU: Vidas más valiosas que otras

Marruecos en un callejón sin salida

El derecho al trabajo en Bielorrusia

Lazos singulares entre Alemania e Israel

La liberación de Buchenwald

Rojo profundo, el porqué de la rosa



Edgardo Neira, Miedo al miedo (Tierra de color sobre cartón), 2020
(Pinacoteca Universidad de Concepción)

¡Libertad a los presos políticos de la revuelta social!



LE MONDE diplomatique

Equipo

Difusión

EDICIÓN CHILENA

Director:
Víctor Hugo de la Fuente

Editor General:
Libio Pérez Zúñiga

Iconografía:
Dominique Monteau

Diseño y diagramación:
Cristián Escobar

Administración:
Lidia Saavedra
Ruth Flores
Freddy Araneda
Consultora en administración
y finanzas: Allende y Montes
Asociados Ltda

Colaboradores:
Margarita Iglesias
Federica Matta
Ricardo Parvex
Álvaro Ramis
Gonzalo Rovira
Luis Sepúlveda

Le Monde Diplomatique
Edición chilena
es una publicación mensual de la
Editorial "Aún Creemos
en los Sueños"

Dirección: San Antonio 434
local 14 - Santiago Chile

Teléfono: 22 608 35 24

E-mail:
edicion.chile@lemondediplomatique.cl

Página web:
www.lemondediplomatique.cl

Impresión:
Gráfica Andes LTDA.

De este número
se imprimieron 8.000
ejemplares

Distribución:
Quioscos: Meta
Librerías: LOM Ediciones

EDICIÓN CONO SUR

Director:
José Natanson

Redacción:
Carlos Alfieri
Creusa Muñoz
Luciana Garvarino
Nuria Sol Vega
Pablo Stancanelli

Le Monde Diplomatique (Francia)

Fundador:
Hubert Beuve-Méry
Presidente del Directorio
y Director de la redacción:
Serge Halimi
Jefe de redacción: Benoît Bréville
Jefes de redacción adjuntos:
Martine Bulard y Renaud Lambert
Encargada de desarrollo y ediciones
internacionales:
Anne-Cécile Robert

1-3 rue Stephen-Pichon,
75013 París Francia
Tél.: (331) 53 94 96 21
Fax: (331) 53 94 96 26
E-mail:
secretariat@monde-diplomatique.fr
Internet: www.monde-diplomatique.fr

Ediciones internacionales de
Le Monde Diplomatique

ALBANIA Y KOSOVO. Mensual,
editado por Bota Diplomatike, Eduard
Lir, Nr 50, Ap.10, 10000 Prishtina,
Kosovo. 500 ejemplares
(Friedrich

ALEMANIA. Die Tageszeitung.
(Friedrichstraße 21, 10969 Berlín);
80.000 ejemplares, supl. mensual.
www.monde-diplomatique.de

BRASIL. Palavra Livre (Rua Araújo
124, São Paulo); 30.000 ejemplares,
mensual.

BULGARIA. Les Amis du Monde
diplomatique. (Rakovski 78, 1.000
Sofía); 6.000 ejemplares, suplemento
de Duma.

CHILE. Editorial "Aún Creemos en los
Sueños" (San Antonio 434, Local 14,
Santiago); mensual, 8.000 ejemplares.
www.lemondediplomatique.cl

COLOMBIA. Tebeo Comunicaciones
S.A. (Avenida 19, N° 4-20, Bogotá);
6.000 ejemplares, mensual.

COREA DEL SUR. Sociedad Le
Monde Corea. (Seúl); 5.000
ejemplares, mensual.

ESLOVENIA. Novinarski Klub.
(Tavcarjeva 15, Lubljana, Eslovenia);
1.000 ej., mensual.

ESPAÑA. Ediciones Cybermonde SL.
(Aparisi i Guijarro N° 5, 2º, 46003,
Valencia); 30.000 ejemplares,
mensual.

GRECIA. Avgi. (Agiou Konstantinou
12, 10431 Atenas); 10.000
ejemplares, suplemento semanal,
www.monde-diplomatique.gr

HUNGRÍA. Edición electrónica
difundida por Közép-Európai
Fejlesztési Egyesület, Múzeum u. 7.
Kossuth Klub, Budapest).
www.magyardiplo.hu

INDIA. Hard News. (Gautam Nagar
110049, Nueva Delhi); 40.000
ejemplares, suplemento mensual
en inglés.

IRÁN. Sedaye Adalat. (60/6 rue
Sarve, Ave Vali Asr, Teherán); 5.000
ejemplares, suplemento mensual.

IRLANDA. Village. (44 Westland
Row, Dublin 2); suplemento semanal
en inglés.

ITALIA. Il Manifesto. (via Angelo
Bargoni 8, 00153 Rome); 49.000
ejemplares, suplemento mensual.

LUXEMBURGO. Tageblatt. (44, rue
du Canal, 4050 Esch-sur Alzette);
30.000 ejemplares, suplemento
mensual en alemán.

**GRAN BRETAÑA Y MUNDO
ANGLOFONO.** Edición mensual, 5.000
ejemplares
https://mondediplo.com.

MUNDO ÁRABE. La versión árabe es
editada por la Sociedad Nouvelles
Presses disponible por suscripción
(www.editionarabediplo.com);
publicada en varios diarios de Medio
Oriente, el Golfo y el Magreb.

NORUEGA. Diplo AS. Distribuido
en Noruega, Suecia, Finlandia y
Dinamarca por la Sociedad (Le Monde
diplomatique Norge AS, Postboks 33
Grefsen, 0409 Oslo); Mensual 25.000
ejemplares www.lmd.no

POLONIA. Livres et presse.
(Rue twarda, 60, Varsovia); 10.000
ejemplares, mensual.

PORTUGAL. Cooperativa Outro
Modo, Rua Febo Moniz, n° 13, R/C,
1150-152 Lisboa; 4.000 ejemplares,
mensual.

RUSIA. Asociación Le Monde
diplomatique rusa. Kakhovka
9-1-176, 113303, Moscú;
ru.mondediplo.com.

SERBIA. Mensual, l'hebdomadaire
Nedeljnik. 20.000 ejemplares.
www.nedeljnik.rs

SUIZA. El semanario
WochenZeitung. (Hardturmstrasse
66, Postfach 8031, Zurich); 20.000
ej., suplemento mensual.

TURQUÍA. Suplemento mensual del
diario Cumhuriyet. Empresa Yeni
Cün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık
Anonim Şirketi, oficina principal
Prof Nurettin Öktem Sok. No: 2 Şişli,
Estambul. 50.000 ejemplares.

VENEZUELA. (Cuarta av. Res Unión.
Torre B. Local E y F, Caracas),
5.000 ejemplares.

EN INTERNET
Chino: http://cn.mondediplo.com
Esperanto: http://eo.MondeDiplo.com
Inglés: http://MondeDiplo.com
Japonés: www.diplo.jp

Le Monde diplomatique se difunde
en 22 idiomas en sus 31 ediciones
internacionales
https://www.monde-diplomatique.fr/
diplo/int/

Editorial "Aún Creemos en los Sueños"

La Editorial "Aún Creemos en los Sueños" publica
la Edición chilena de Le Monde Diplomatique
Director: Víctor Hugo de la Fuente

San Antonio 434 - local 14 - Santiago - Chile
Tel.: (56) 22 608 35 24
E-mail: edicion.chile@lemondediplomatique.cl
www.lemondediplomatique.cl
www.editorialauncreemos.cl

La librería *Le Monde Diplomatique*
ha cerrado hasta nuevo aviso.
Adquiera las ediciones digitales en PDF
del periódico y los libros.
Más económicas, envío inmediato por mail.
Compre en:
www.editorialauncreemos.cl

**Le Monde Diplomatique se suma a las demandas de libertad
inmediata para los presos políticos de la revuelta social.**
Alrededor de 2.500 hombres y mujeres se encuentran encarcelados, la
mayoría en prisión preventiva, situación que se agrava con la alerta sanitaria
por el Covid-19. Se impone su libertad o el arresto domiciliario, como
señalan numerosos abogados.

Calendario de fiestas nacionales 1 al 31 de abril

3 Guinea	Fiesta Nacional	27 Israel	Fiesta Nacional
4 Senegal	Independencia	Sierra Leona	Independencia
17 Siria	Fiesta Nacional	Sudáfrica	Fiesta Nacional
18 Zimbabue	Independencia	Togo	Independencia
26 Tanzania	Fiesta Nacional	30 Países Bajos	Fiesta Nacional



UdeSantiago
Radio

SOMOS TU RADIO UNIVERSITARIA

99.5 FM - WWW.RADIOUSACH.CL

Una emisora con real sentido público
y compromiso con la ciudadanía que
promueve el debate de los grandes
temas país y divulga la ciencia, la
cultura y las artes.

Te invitamos a visitar nuestra nueva
señal online Escena Viva.

¡MARCA LA DIFERENCIA.
ESTUDIA FRANCÉS!

[/Institutfrances.cl](https://www.facebook.com/institutofranchile)
[@institutfran](https://twitter.com/institutfran)
www.institutofranchile.cl
cursos@institutofranchile.cl
 (+56) 2 3 221 0910

INSTITUT
FRANÇAIS
Chile

El mundo después de la crisis por el coronavirus

Ya mismo

por Serge Halimi*

Una vez que esta tragedia haya quedado atrás, ¿todo volverá a ser como antes? Cada una de las crisis de los últimos treinta años alimentó la esperanza irracional de una toma de conciencia, un regreso a la razón, un freno. En el imaginario aparecía primero el confinamiento y luego la transformación de una dinámica sociopolítica de la que, al fin, todos habrían podido ver las limitaciones y peligros (1). Se suponía que la estampida bursátil de 1987 iba a contener la oleada de privatizaciones, y que las crisis financieras de 1997 y de 2007-2008 iban a hacer trastabillar la globalización feliz. Eso no sucedió.

A su vez, los atentados del 11 de septiembre suscitaron reflexiones críticas sobre el hubris estadounidense, así como interrogantes afligidos del tipo “¿Por qué nos odian?”. Eso tampoco duró. Lo cierto es que, incluso cuando el movimiento de ideas toma la dirección correcta, nunca es suficiente para detener las máquinas infernales; siempre se necesita la participación de seres humanos. Y cuando eso sucede, más vale no depender de los gobernantes responsables de la catástrofe, incluso si esos pirómanos se ponen melindrosos, hacen los sacrificios necesarios y pretenden haber cambiado (véase el artículo de Renaud Lambert y Pierre Rimbert p. 11). En particular, cuando su propia vida –al igual que la nuestra– está en peligro.

La mayoría de los franceses no conocimos de manera directa ni la guerra, ni golpes militares, ni toques de queda. Ahora bien, a fines de marzo, cerca de tres mil millones de habitantes estaban en cuarentena, muchos de ellos en condiciones extremadamente difíciles –no son escritores que se dedican a observar las camelias en flor en sus casas de campo–. Pase lo que pase en las próximas semanas, la crisis del coronavirus habrá constituido la primera angustia global de nuestras vidas: eso no se olvida. Los responsables políticos están obligados a tomarlo en cuenta, al menos en parte.

Por lo tanto, la Unión Europea acaba de anunciar la “suspensión general” de sus normas presupuestarias, el presidente francés Emmanuel Macron aplazó una reforma jubilatoria que habría castigado al personal hospitalario y el Congreso de Estados Unidos votó a favor de enviar un cheque a la mayoría de los estadounidenses. Sin embargo, hace poco más de diez años, los liberales ya habían aceptado un aumento espectacular de la deuda, un estímulo presupuestario, la nacionalización de los bancos y el restablecimiento parcial del control de los capitales para salvar su sistema en riesgo. Luego, la austeridad les permitió recuperar lo que habían cedido en ese sálvese quien pueda planetario. Incluso les permitió realizar algunos “avances”: los asalariados trabajan más, más tiempo y en condiciones más precarias; por su parte, los “inversionistas” y los rentistas pagan menos impuestos. Fueron los griegos quienes pagaron el precio más alto de este rescate cuando, en sus hospitales públicos, que estaban en una situación de peligro financiero y con medicamentos en falta, empezaron a verse enfermedades que creían desaparecidas.

Así, lo que en un principio permite pensar en un inesperado cambio de dirección podría desembocar en una “estrategia de shock”. En 2001, una hora después del ataque contra el World Trade Center, la consejera de un ministro británico le envió un



Kaelazo, Manocompromiso (collage), 2011

correo a altos funcionarios de su ministerio: “Es un día ideal para hacer resurgir e implementar con disimulo todas las medidas que tenemos que tomar”. La consejera no necesariamente estaba pensando en las restricciones continuas a las libertades públicas bajo el pretexto de combatir el terrorismo, y menos aún en la guerra de Irak y los innumerables desastres que esa decisión angloestadounidense iba a provocar. Dos décadas más tarde, no hay que ser poeta ni profeta para imaginar la “estrategia de shock” que se delinea.

¿Triunfo del capitalismo digital?

Toda nuestra socialización corre el riesgo de verse transformada por la digitalización acelerada de nuestras sociedades, corolario del “quedate en casa” y el “distanciamiento”. La urgencia sanitaria volverá aún más imperiosa –o absolutamente caduca– la pregunta acerca de si se puede seguir viviendo sin internet (2). Hoy, todos deben llevar consigo un documento de identidad y no faltará mucho para que un teléfono celular no solo sea una herramienta útil, sino una exigencia con fines de control. Además, como las monedas y los billetes constituyen una fuente potencial de contaminación, las tarjetas de crédito y débito, nuevos garantes de la salud pública, permitirán que cada compra sea identificada, registrada y archivada. “Crédito social” a la china o “capitalismo de vigilancia”: la regresión histórica del derecho inalienable a no dejar huella del propio paso cuando no se transgredió ninguna ley se está instalando en nuestras mentes y nuestras vidas sin toparse con

otra reacción más que una estupefacción de adolescente inmaduro. Tomar un tren sin dar a conocer su estado civil, usar su cuenta bancaria en línea sin entregar su número de celular y pasear sin ser filmado se había vuelto imposible ya antes del coronavirus. Con la crisis sanitaria, se franqueó un nuevo paso. En París, hay drones que vigilan las zonas de difícil acceso; en Corea del Sur, sensores que alertan a las autoridades cuando la temperatura de un habitante presenta un peligro para la población; en Polonia, los habitantes deben elegir entre instalar una aplicación de verificación de la cuarentena en su celular o visitas imprevistas de la policía a su domicilio (3). En tiempos de catástrofe, este tipo de dispositivos de vigilancia recibe el apoyo popular; no obstante, siempre sobreviven a las condiciones que los vieron nacer.

Una sociedad sin contacto

Asimismo, las transformaciones económicas que se perfilan también consolidan un universo en el que las libertades se restringen. Para evitar cualquier tipo de contaminación, millones de comercios, cafés, cines y librerías cerraron en todo el mundo. Estos no disponen de servicios de entrega a domicilio ni tienen la posibilidad de vender contenidos virtuales. Tras la crisis, ¿cuántos van a volver a abrir?, ¿en qué condiciones? Por el contrario, los negocios sonríen a los gigantes de la distribución como Amazon, que se prepara para crear cientos de miles de empleos de choferes y operarios de almacén, o Walmart, que anuncia la contratación de ciento cincuenta mil “socios”. Ahora bien,

¿quién conoce mejor que ellos nuestros gustos y preferencias? En este sentido, la crisis del coronavirus podría constituir un ensayo general que anticipa la disolución de los últimos focos de resistencia al capitalismo digital y al advenimiento de una sociedad sin contacto (4).

A menos que... A menos que voces, gestos, partidos, pueblos y Estados alteren ese libreto escrito de antemano. Es común escuchar: “La política no me interesa”. Hasta el día en que cada uno entiende que son elecciones políticas las que obligaron a los médicos a tener que elegir entre qué enfermos van a intentar salvar y cuáles tienen que sacrificar. Estamos en ese día. Y esto es aún más claro en los países de Europa Central, los Balcanes o África, que desde hace años ven cómo su personal sanitario emigra hacia tierras menos amenazadas o empleos mejor remunerados. Esas elecciones tampoco estaban dictadas por las leyes de la naturaleza. Es probable que hoy más gente lo entienda. La cuarentena también es un momento en el que cada uno se toma un tiempo y reflexiona...

Con la intención de actuar. Ya mismo. Es que, contrariamente a lo que sugirió el presidente francés, ya no se trata de “cuestionar el modelo de desarrollo vigente en nuestro mundo”. Sabemos cuál es la respuesta: hay que cambiarlo. Ya mismo. Y como “dejar nuestra protección en manos de otros es una locura”, dejemos de someternos a dependencias estratégicas para preservar un “mercado libre y no distorsionado”. Aunque Macron anunció “decisiones de ruptura”, nunca va a tomar las que realmente se necesitan. No solo la suspensión provisoria, sino la denuncia definitiva de los tratados europeos y los acuerdos de libre comercio que sacrificaron las soberanías nacionales y erigieron a la competencia como valor absoluto. Ya mismo. Hoy, todos saben cuál es el costo de confiar a cadenas de abastecimiento que se extienden a lo largo y ancho del mundo y que operan sin stock el suministro de los millones de mascarillas y productos farmacéuticos que un país en riesgo necesita para proteger la vida de sus enfermos, de su personal hospitalario, de quienes hacen las entregas a domicilio y quienes atienden las cajas de los supermercados. Igualmente, todos saben cuál es el costo para el planeta de las deforestaciones, las deslocalizaciones, la acumulación de residuos y la movilidad permanente (cada año, París recibe 38 millones de turistas, es decir, más de diecisiete veces su población, y se enorgullece de ello).

El proteccionismo, la ecología, la justicia social y la salud son solidarios entre sí. Se trata de elementos clave para una coalición política anticapitalista lo bastante fuerte como para exigir, ya mismo, un programa de ruptura. ■

1. Véase Serge Halimi, “Le naufrage des dogmes libéraux” y Frédéric Lordon, “Cuando Wall Street se hizo socialista”, respectivamente, *Le Monde diplomatique*, octubre de 1998, y *Le Monde diplomatique*, edición chilena, octubre de 2008.

2. Véase Julien Brygo, “¿Se puede vivir aún sin internet?”, *Le Monde diplomatique* en español, agosto de 2019, <https://mondiplo.com/se-puede-vivir-aun-sin-internet>.

3. Véase Samuel Kahn, “Les Polonais en quarantaine doivent se prendre en selfie pour prouver qu’ils sont chez eux”, *Le Figaro*, 24 de marzo de 2020.

4. Craig Timberg, Drew Harwell, Laura Reiley y Abha Bhattarai, “The new coronavirus economy: A gigantic experiment reshaping how we work and live”, *The Washington Post*, 22 de marzo de 2020.

*Director de *Le Monde Diplomatique*.

Chile en una encrucijada

Tiempos de crisis

por Libio Pérez*

Aunque la pandemia del Covid19 recién registró en Chile su primer caso a inicios de marzo, en pocas semanas desnudó las fragilidades del país que desde octubre asistió a una crisis social y política, a la que ahora se suma la sanitaria y la económica, en un contexto global de recesión, ad portas de una crisis humanitaria mundial y la persistencia de la originada por el cambio climático.

Es un hecho, un dato de la realidad, que los problemas estructurales de desigualdades y demandas insatisfechas que motivaron el estallido social de octubre, no han sido resueltos. La crisis sanitaria, más bien los ha vuelto a exponer en toda su magnitud.

Algo similar sucede con la crisis de representatividad política, la crisis de legitimidad, la carencia de solidez de algunas instituciones, como la Constitución, que tampoco sirven para hacer frente a momentos vitales. Es demasiado pronto para evaluar las estrategias y medidas adoptadas por el gobierno para la urgencia de la pandemia, pero hay señales.

La casi nula intervención de los mercados por parte del Estado se apoya en las limitaciones constitucionales, pero también en el peso ideológico que tienen las autoridades de gobierno a la hora de sopesar los costos económicos que supone cada medida urgente destinada -y muchas veces demandadas por la población- a mitigar la crisis.

El gobierno tenía desde octubre y por largos meses un margen de maniobra política muy acotado, casi sin iniciativa y escaso control de la agenda pública. Un largo proceso de agrietamiento de la propia alianza de gobierno comenzó a socavar la base política de La Moneda, fenómeno que no ha decantado del todo.

En distintos momentos, como en la negociación para el pacto constitucional del 15 de noviembre, el gobierno cedió poder, como al Congreso, para buscar una salida política a la crisis. La presión no solo venía de las masivas movi-



Marco Godoy, Heterarquía: Ven, seremos (instalación), 2020 (Exposición en Galería virtual P. Ready)

lizaciones callejeras en todo el país, una cuota importante de fuerzas la pusieron los alcaldes que anunciaron y realizaron un inédito plebiscito constitucional a nivel comunal.

Recién en marzo, cuando se hace evidente que el Covid19 ya estaba en Chile, el gobierno pudo retomar la iniciativa política y el control de la agenda, no sin un alto protagonismo que presionaba hacia medidas urgentes por parte de los alcaldes, organizaciones sociales y gremios como el Colegio Médico.

La oportunidad de colocarse a la cabeza de la lucha contra la pandemia, sin embargo, el gobierno la pone en juego. Sucedió así con un dictamen de la Dirección del Trabajo que puso en evidencia la lógica que opera en La Moneda: distribuir los costos de la crisis, incluso con aquellos más vulnerables.

El primer paquete de medidas económicas, aunque tiene un monto considerable en la suma total, no será suficiente

para hacer frente a la crisis, menos si los sectores sociales más desprotegidos (que incluye al casi 30 por ciento de trabajadores informales) no tienen con qué hacer frente a la interrupción de sus actividades diarias y sin dinero para subsistir (1).

El gobierno se resiste a otorgar formas de apoyo a la población de más largo plazo, como el congelamiento de los precios de los alimentos esenciales, la suspensión de pagos de servicios básicos o la entrega de bonos de subsistencia para, por lo menos, tres meses.

La alta resistencia de las autoridades de gobierno para decretar el cierre de regiones o comunas en las que es evidente el riesgo, solo se explica por su temor a los impactos económicos y a la pérdida del control. El cierre de siete comunas (entre ellas las más ricas de Chile) de la Región Metropolitana, durante la última semana de marzo, fue una forma de poner en ensayo el toque de queda, los controles callejeros, el uso

de las fuerzas (militares y policiales), las cadenas de abastecimiento, las plataformas digitales y otros recursos necesarios para mantener el control del orden público y el funcionamiento limitado de la población.

Con esa experiencia, como para no repetir un “TranSantiago”, el gobierno se apresta a enfrentar la realidad que se avecina: la expansión más agresiva de la pandemia y la presión de las comunidades que piden el cierre de sus territorios ante las amenazas de contagios masivos.

El próximo paquete de medidas económicas, que será inevitable ante la contracción de la economía, la caída de las exportaciones y la interrupción de las inversiones, entre otras, deberá apoyarse en la repatriación parcial de los ahorros fiscales, la aplicación de un impuesto a las grandes fortunas, así como en un plan de estatización de grandes empresas que amenazan con quebrar o cerrar operaciones y con dejar a miles de trabajadores cesantes.

La oportunidad y magnitud de las medidas para afrontar la emergencia es clave. La falta de ellas o las mal hechas generan focos de alta tensión social, como ha sucedido cuando la población -en el litoral central o en comunidades del sur- ha cerrado por su cuenta los accesos a sus poblados o ciudades.

Las formas de resolución de las crisis en curso tendrán distintos ritmos, dinámicas y plazos, la más urgente es la sanitaria, pero es evidente, se intuye, que el Chile que viene ya no será el mismo y el futuro se ve preñado de grandes y profundas transformaciones, que permitan garantizar una mejor y protegida vida para la población. ■

1. Ver <https://www.economistaamerica.cl/economia-eAm-chile/noticias/10391921/03/20/Empleo-informal-en-Chile-alcanza-al-296-en-trimestre-noviembreenero-.html>

*Editor general de la edición chilena de Le Monde Diplomatique

Cambiar el mundo y arreglar la vereda

por Tomás Moulian*

“Antes queríamos cambiar el mundo, ahora nos conformamos con arreglar la vereda”. Esta frase constituye un análisis crítico de la práctica política de las izquierdas, entre ellas -por supuesto- de las latinoamericanas. ¿Quién la formula?

El emisor de esta lapidaria sentencia es José Mujica, ex militante tupamaro, quien se vanagloria de no tener título universitario y haber llegado, pese a ello, a la presidencia del Uruguay, compitiendo por el Frente Amplio en el período de la post dictadura.

Fue durante trece años preso político, estando encerrado durante años en un cajón. Pese a ello, cuando fue liberado en 1985 salió predicando la paz y la reconciliación.

Es famoso por su vida austera: vive en una pequeña parcela, en el Montevideo rural, en las cercanías de la ruta nacional y siguió habitando el mismo lugar durante su presidencia.

Una de las principales medidas de su mandato fue la legalización del uso de la marihuana, lo cual le dio fama mundial.

El dicho de Mujica es interesante en sí mismo, pero lo es más aun en boca de un izquierdista, quien aconsejaba a Hugo Chávez sobre la mejor forma de construir al socialismo y quien se sentía, no obstante, más cercano a Lula.

Comentando la frase puede decirse que contraponen lo que no debería contraponerse. Lo óptimo sería cambiar el mundo y, simultáneamente, arreglar la vereda; o sea luchar por una vida mejor

y, al mismo tiempo, vivir la cotidianidad, realizando las tareas sencillas que afronta el hombre común.

Lo otro significa convertir la lucha por cambiar el mundo en una vida que aislaría al militante, separándolo de los demás. Algunos dirán esa distancia es necesaria porque quien lucha por cambiar el mundo se convierte en un “hombre nuevo”, como Ernesto Guevara, quien entregó la vida por la causa.

Pero, en realidad, es necesario buscar nuevas formas de entrega a la causa, que permitan que el militante la compagine con una vida familiar y con una cotidianidad integrada, cercana a la de los hombres que trabajan y que, sin embargo, también militan por un mundo mejor.

Lo otro es vivir la santidad, una vida heroica, las cuales implican una entrega religiosa. El sujeto se convierte en un mártir, en alguien, no solo distinto sino también opuesto, al hombre común.

En alguien que, por ser como es, no puede si no mirar desde la altura al individuo que trabaja, que tiene una familia.

Este héroe es un ser alejado de los otros, un juez crítico del individuo que vive lo cotidiano.

El nuevo hombre nuevo, al contrario, debe ser capaz de cambiar el mundo y también de arreglar la vereda. Uno que no juzga a los seres comunes y corrientes si no uno que los acompaña. ■

*Sociólogo

Chile luego de la crisis social y la pandemia

Bioética y biopolítica para un Chile postneoliberal

por Álvaro Ramis*

La pregunta clave es por el día después: ¿Qué tipo de sociedad nacerá luego de la pandemia del COVID-19? Es evidente que las consecuencias de largo plazo de este evento catastrófico global serán enormes, y de difícil pronóstico en toda su magnitud. De partida, sólo evidenciamos sus primeros síntomas: por ejemplo, la digitalización acelerada de la economía, la educación, la salud y los servicios. Pero el efecto más profundo es el fin de la globalización liberal, tal como la entendimos desde el 1990 hasta ahora. El regreso del Estado, no sólo como ente regulador, gendarme o protector, sino como actor activo en la esfera económica, financiera y productiva ya es palpable y evidente.

Salvo escasas voces ideologizadas, el empresariado mundial ha cambiado su tradicional discurso *laissez faire* por un llamado desesperado al Leviatán estatal para salir a su rescate y ayuda, aún al precio de un intervencionismo público inédito desde la irrupción de las políticas de Reagan y Thatcher. El Reino Unido, gobernada por los herederos políticos del thatcherismo, es un ejemplo evidente: se ha decidido que, si las empresas británicas no despiden a sus trabajadores y les mantienen en nómina, el gobierno les pagará el 80 por ciento de su salario hasta un máximo de 2.500 libras. Varios gobiernos europeos han anunciado nuevos seguros de desempleo, rentas básicas de subsistencia y han asumido el papel de avales de última instancia. Esta cuasi nacionalización de la economía durará el tiempo que dure la crisis. Pasada la tormenta volverán a los aires liberalizadores para reclamar las utilidades y las “libertades” económicas conculcadas. Pero es difícil que este regreso al orden anterior sea tan fácil e inmediato.

Ya desde la crisis financiera de 2008 las bases teóricas del neoliberalismo, como prescripción de un orden espontáneo autorregulado, quedaron dañadas de forma estructural e irremediable. La elección de Trump fue una consecuencia directa de ello, y colocó a los Estados Unidos al frente de un nuevo proyecto neo-mercantilista, donde el Estado asumió una función clave, como promotor y defensor de los capitales “nacionales”. Su política de guerra comercial con China ha sido el reflejo más directo de este nuevo ciclo. Sin embargo, este neo-mercantilismo a la Trump ha mantenido la misma línea de abandono social y laboral para la población. Ha sido una forma de fin del neoliberalismo que ha significado proteccionismo para las grandes corporaciones, pero desprotección total para la ciudadanía.

La cuarentena global del 2020, con sus predecibles efectos catastróficos mundiales, a nivel económico y social, tendrá consecuencias políticas profundas. Basta recordar que el fin de la Primera Guerra Mundial (y la epidemia de la gripe española de 1918) originó las primeras leyes de protección social masivas y permitió la feminización del trabajo. El derrumbe de la economía de 1929 permitió el ciclo keynesiano, y el fin de la Segunda Guerra Mundial generó el pacto de 1948, que se sintetizó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es prede-



Homenaje a Henri Richelet, Funambule

cible que el 2020 generará un nuevo orden político donde la protección social ante los riesgos globales tendrá mayor importancia que la preservación de las “libertades negativas” que han primado en las últimas décadas. Si en los últimos años la ausencia de coacción externa al individuo ha sido el dogma, es previsible que el nuevo orden privilegiará una idea de libertad como garantía de autorrealización colectiva, que obligue a subordinar las voluntades personales a un interés general mayor.

Mirada democrática

Desde una perspectiva socialista, este giro puede resonar positivo de forma a priori, pero también entraña riesgos elevados si no se conduce desde una mirada democrática y que tenga en cuenta las asimetrías y desigualdades de clase, raza, género y sostenibilidad ambiental. Sin este criterio de interseccionalidad, la realidad social y los límites políticos se delimitará bajo un modelo autoritario que identificará, una vez más, el “interés general” con el “interés de los poderosos”.

De alguna forma este nuevo orden político “autoritario-compasivo” ha avanzado en las últimas décadas, representado por el modelo chino, pero también está presente, con sus propias especificidades, en Singapur, Rusia, Turquía, Polonia o Hungría, por sólo dar algunos casos. Pierre Rosanvallon ha llamado a este tipo de regímenes políticos, como “iliberales” (1). El iliberalismo es, según este autor, “una cultura política que, por principio, descalifica la visión liberal”. Según el politólogo Matthijs Bogaards es “una situación de formalidad democrática en la que, sin embargo, se reduce o limita la independencia del poder judicial y los ciudadanos no disfrutan de la igualdad de trato ante la ley, ni protección adecuada frente al Estado o actores privados” (2). Es una nueva “fronterización de la vida” (3), en nombre del “interés nacional”, que se transfor-

ma en el nuevo criterio delimitador de las posibilidades de acción individual. Como ha observado el geógrafo David Harvey, en el actual contexto de crisis “las únicas políticas que funcionarán, tanto económica como políticamente, son mucho más socialistas que todo lo que Bernie Sanders pueda proponer y estos programas de rescate tendrán que iniciarse bajo los auspicios de Donald Trump, presumiblemente bajo la máscara del Making America Great Again” (4).

El Chile postcrisis

En Chile la crisis iniciada el 18 de octubre de 2019 ha supuesto el fin del espejismo creado con la consolidación del régimen postdictatorial. Los felices ‘90, como auguró Stiglitz, plantaron “la semilla de la destrucción”. Por eso el estallido social, encapsulado en su performatividad callejera por la cuarentena, sigue su curso bajo nuevas formas de ingobernabilidad y conflictividad aguda que se explican por la baja legitimidad de las autoridades y del marco constitucional vigente.

Este marco general explica la llamativa ruptura histórica del bloque de derecha chileno. Se trata ante todo de un quiebre ideológico-estratégico que aplica en el terreno nacional el giro iliberal que se da en la política global. Esta división, va más allá del eje Rechazo-Apruebo, que visibiliza la línea divisoria formal. Es una grieta tectónica entre una derecha nostálgica, anclada en el dogma thatcherista-pinochetista, y una derecha que capta el vuelco hacia las formas “autoritario-compasivas” propias de la derecha iliberal, que empieza a ganar terreno en el plano global.

La expresión más clara y consolidada de esta nueva derecha en Chile se puede encontrar en el Instituto de Estudios de la Sociedad, centro de estudios que permite identificar este giro de forma muy nítida. Su reciente publicación “Primera persona singular” (5), publicado en noviembre de 2019, constituye

un verdadero manifiesto en contra del individualismo, que se aleja de la conocida monserga “libertariana-anarcocapitalista” de los partidos de ese sector político. Esto augura un debate interesante y convergente de cara a la Convención Constituyente.

En el plano inmediato la propuesta de esta nueva derecha, centrada en reconstruir el concepto de “nación”, permite un debate cívico sustantivo con la izquierda. Sus ideas se pueden reflejar en la política que impulsan dirigentes como Mario Desbordes, Manuel José Ossandón, Germán Codina, y el “nuevo” Joaquín Lavín, amigo de todas las causas justas que encuentra en su camino. Sin embargo, es necesario advertir los nudos críticos que deberá enfrenar esta discusión en el momento en que se deba redactar la nueva Constitución:

1. “Principio de autonomía” versus “comunitarismo heterónomo”: Este punto de discrepancia se visibiliza en el rechazo que expresa el IES a los derechos sexuales y reproductivos, entendidos como una demanda individualista, bajo la noción lockinana de soberanía sobre el propio cuerpo. De la misma forma oponen un intenso esencialismo ius naturalista que choca totalmente con el pensamiento feminista, que prioriza el principio de autonomía como soberanía política de las mujeres sobre sí mismas.

2. “Individualismo moral” o “individualismo propietario”: La crítica al individualismo que denota el IES es una crítica a la ruptura comunitaria de los lazos societales, para lo cual proponen, parafraseando a Karl Polanyi, reincrustar moralmente la economía. La sospecha que surge desde la izquierda es por el “idealismo” de esa propuesta. Como criticaba Marx, esta derecha compasiva ve al pueblo desde el punto de vista de “la clase que más padece”, y no como una clase social que puede asumir poder, y desde la política imponer un cambio sistémico e institucional. No ven al pueblo como posible sujeto político. De fondo, el IES tiende a circunscribir su crítica al individualismo al plano pre-político, como déficit valórico o ético. No parecen advertir que la superación del individualismo no puede operar sin afectar la noción de propiedad privada que le es completamente inherente.

Estos dos puntos, en los que se plantean legítimas diferencias de políticas y valores, deberán marcar el campo de disputa fundamental en la Convención Constituyente, que delimite un nuevo consenso básico, que permita un pacto social, para la reconstrucción del Chile post estallido y post cuarentena. ■

1. Pierre Rosanvallon (2001) “Fondements et problèmes de l’“illibéralisme” français”, Académie des Sciences Morales et Politiques, Paris.

2. Matthijs Bogaards (2009) “How to classify hybrid regimes? Defective democracy and electoral authoritarianism”, en *Democratization*, 16:2, 399-423, DOI: 10.1080/13510340902777800

3. Sandro Mezzadra y Brett Nielsen (2017) “La frontera como método”, *Traficantes de sueños*, Madrid.

4. David Harvey (2020) “Anti-Capitalist Politics in the Time of COVID-19” en *Jacobin*, <https://jacobinmag.com/2020/03/david-harvey-coronavirus-political-economy-disruptions>

5. Daniel Mansuy, Pablo Ortúzar, Manfred Svensson, Josefina Araos, Santiago Ortúzar, Gabriela Caviedes, Catalina Siles, y Claudio Alvarado (2019) “Primera persona singular”, Instituto de Estudios de la Sociedad, Santiago.

*Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Impactos de la pandemia en Chile

Covid 19 en el epicentro de la violación del derecho humano al agua

por Rodrigo Mundaca*

El día 11 de Marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que el coronavirus causante de la enfermedad infecciosa COVID 19, era pandemia, es decir que su contagio era a nivel mundial, los contagiados crecen diariamente de forma exponencial, así como también el número de fallecidos, la humanidad se enfrenta a un virus feroz, que natural o artificialmente inducido, se focaliza principalmente en los adultos mayores, y en personas que padecen afecciones médicas como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o diabetes. A propósito del principal grupo de riesgo, como no recordar a Christine Lagarde, ex directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), a quien se le imputa la frase: "Los ancianos son un peligro para la economía, ya que viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global, tenemos que hacer algo, y ya" (1).

Al momento de escribir este texto, Chile tiene 2738 contagiados por Covid 19, 12 muertos, y seis comunas de la región Metropolitana y otras ciudades en regiones en cuarentena, y todo indica que estas cifras seguirán creciendo, en contraposición a lo declarado por el ministro de Salud (21/03/20), Jaime Mañalich, quien sostuvo "¿Qué pasa si el virus muta y se pone buena persona? (sic).

En materia de medidas de protección y prevención, el aislamiento social y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o usando un desinfectante a base de alcohol es a estas alturas una condición esencial para no aumentar los contagios.

En su acepción más amplia, del agua depende la vida de los vegetales, el funcionamiento de los ecosistemas, el desarrollo de las economías locales, y por cierto la vida, hoy amenazada de forma despiadada,

particularmente aquellas comunidades que se encuentran privadas de agua, producto del modelo de privatización y mercantilización de este bien natural, modelo que en Chile se expresa de forma asimétrica y brutal.

Tenemos según diversas fuentes nacionales, 147 comunas con decretos de escasez hídrica, 400 mil viviendas rurales sin acceso a agua potable, aproximadamente 1,5 millones de personas dependiendo de camiones aljibes para satisfacer su demanda de agua para conservar la vida.

A propósito de los camiones aljibes, el decreto número 41 del ministerio de Salud (08/11/2018), estableció un reglamento sobre las condiciones sanitarias para la provisión de agua potable mediante este tipo de camiones.

Negocio lucrativo

Cuando "vender agua potable" se ha transformado en un lucrativo negocio, como ocurre en la provincia de Petorca o en la provincia de San Felipe, ambas provincias pertenecientes a la región de Valparaíso, ¿Quién está fiscalizando este negocio? ¿Quién garantiza que el agua que se suministra en las comunidades azotadas por el despojo, cumple con los estándares de higiene e inocuidad requeridos? ¿Es posible que los aljibes se transformen en vectores con ruedas?

Y podemos seguir con las disquisiciones: ¿Es posible que hombres y mujeres que viven en territorios privados de agua, puedan lavarse las manos frecuentemente y con agua corriendo cuando dependen de los camiones aljibes? ¿Son suficientes 50 litros

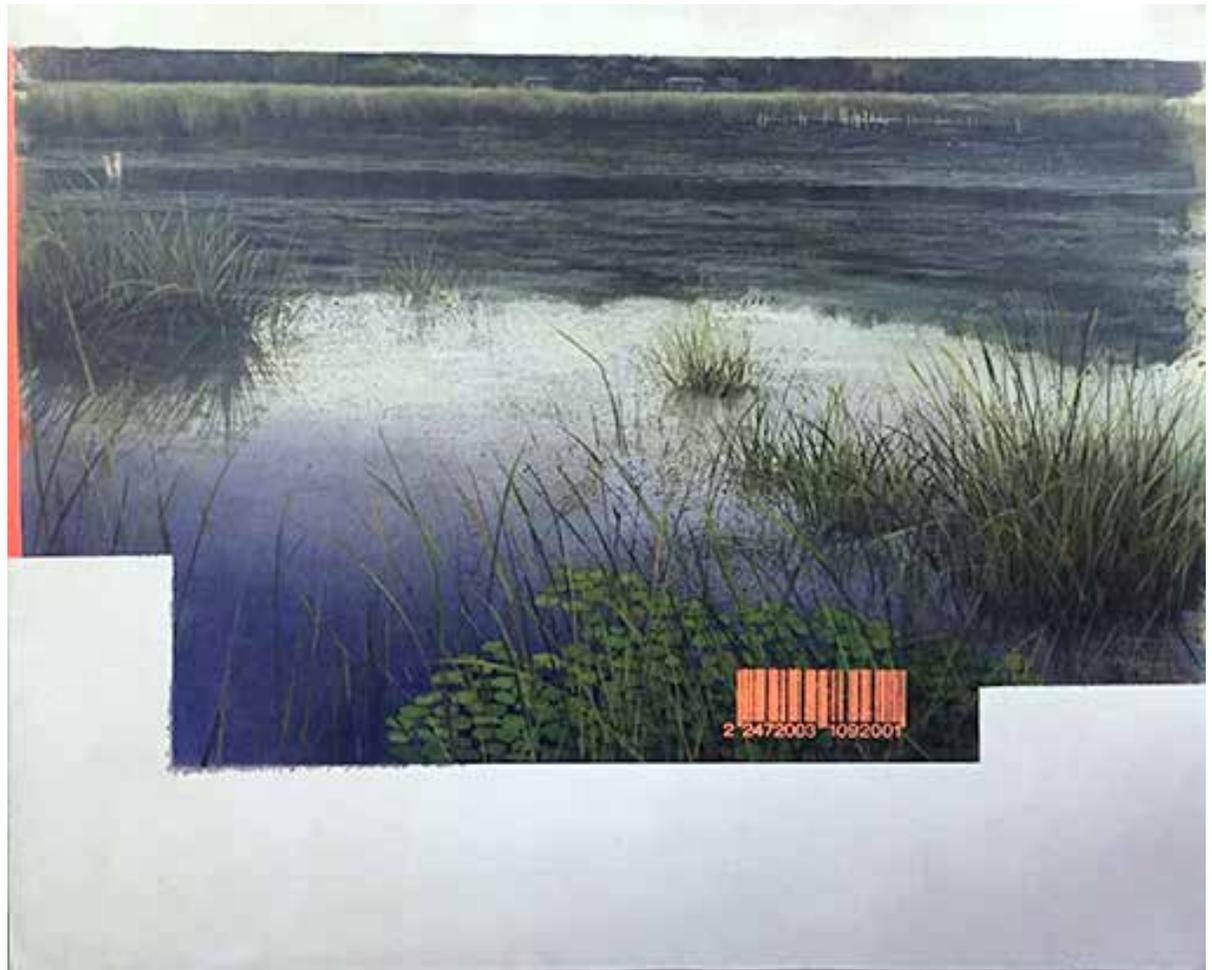
de agua por persona para higienizarse las manos frecuentemente y además lavar ropa para evitar posibles fuentes de contagio?

Con la pandemia desatada, la privatización de las aguas en Chile es simplemente criminal, no sólo porque viola un derecho humano esencial, si no porque además priva de este elemento a hombres y mujeres fragilizando y exponiendo sus vidas en detrimento o en favor de la industria extractiva.

Y el tema del agua permanece soslayado por el actual gobierno, funcionarios como el ministro de Agricultura, ufana mente sostienen que como la temporada de riego llega a su fin, los camiones aljibes van a contar con una mayor dotación de agua, o cuando se declara al sector agrícola como infraestructura crítica priorizando el agua para las funciones productivas de los fundos.

Gabinete hídrico

El gobierno de Piñera es un furibundo partidario del modelo privado de agua, sabemos que al interior de su gabinete existe un "gabinete hídrico", como también sabemos que al interior del Congreso existen parlamentarios como los senadores Coloma, García Huidobro, Ossandon y Castro, que siendo dueños de derechos de agua, intervienen en el debate público para con sus votos impedir que el agua sea un bien nacional de uso público. Hoy cuando disponer de agua para salvaguardar la vida es una condición esencial para combatir el COVID 19, los mencionados tienen una responsabilidad inequívoca, la historia los juzgará.



Hernán Gana, Sin título VI (óleo sobre tela)

Al concluir, y como sostiene Joel González, músico, docente y activista socio ambiental de la comuna de Limache, también mi amigo, "No olvidemos que la pandemia está instalada hace rato en Chile, la contagian las industrias extractivas, la minería química a cielo abierto, los monocultivos, las termoeléctricas, la quema de combustibles fósiles, los relaves, las refinerías, los que en rigor usurpan y lucran con el agua, las forestales, las salmoneras, la contaminación de los ríos y del océano, la diferencia es que sobre ellos no se aplica cuarentena, toque de queda, ni restricción alguna, no se moviliza ningún ministerio, no aparece en los medios todos los días, no se toman medidas urgentes para mitigar el daño y evitar que la pandemia siga extendiéndose a otras ciudades".

Pasará el coronavirus, muchos sobrevivirán resguardados en sus casas, pero otros miles seguirán bajo una pandemia con incierto desenlace, la debacle ambiental silenciada por los Estados, los medios, e ignorada por tantos otros que desde la comodidad de sus hogares, han mantenido total indiferencia y desinterés por detener el virus infeccioso del modelo de despojo, y que en el "lucrativo negocio del agua" tiene su expresión más despiadada. ■

1. https://elpais.com/economia/2012/04/11/actualidad/1334133453_457282.html

*Ingeniero Agrónomo.

Premio Internacional de Derechos Humanos de la ciudad de Nuremberg.

Premio Internacional de Derechos Humanos Danielle Mitterrand.

Chile después de la revuelta

Entre el estallido social y la peste

por Ibán de Rementería*

En pocos meses lo real nos ha estallado en la cara y en las manos. Por una parte, en lo político, en la gestión del poder, los ciudadanos deciden desobedecer a las autoridades, la nación deviene insurrecta, y; por otra, en la globalidad de nuestra realidad sanitaria aparece el corona virus (covid-19) uno de esos tantos virus de rápida mutación que causan las anuales, desagradables y benignas influencias, pero que de inmediato se muestra como la peste: altamente contagiosa, insidiosa y previsiblemente mortal para enfermos crónicos y personas de edad avanzada.

Chile, que desde el 18 de octubre del 2019 movilizó a cientos de miles de chilenos y chilenas hasta llegar a un millón y medio en una sola tarde, para rechazar el actual modelo político, económico y social, el 15 de noviembre del 2019, esa, la nación insurrecta fue controlada mediante la oferta de un plebiscito en el cual la población decidirá si quiere una nueva Constitución y por qué tipo de representación constituyente será elaborada, esa oferta fue hecha por casi la totalidad de los partidos políticos, pero sin la participación del movimiento social.

Las normas que rigen el funcionamiento de la constituyente la obligan a tomar decisiones por la mayoría calificada de los dos tercios de sus miembros, lo que en términos de poder, de imposición de la voluntad, es otorgarle el derecho a veto a un tercio minoritario de sus miembros, además, de mantener la intangibilidad de los tratados internacionales vigentes. La subordinación del poder constituyente a una minoría nacional y a los intereses externos, obviamente, merman la legitimidad de tal poder constituyente.

Lo que ha pasado aquí es que la teoría constitucional imperante en la academia y la experticia está reducida al miedo a las mayorías, el miedo constituyente a las mayorías es un miedo a la democracia. Pues, como dice Claudia Heiss:



Andrea Carreño, Interior con jaguar, 2019 (www.andreacarreno.com)

“Mientras se mantenga el respeto a los dos tercios, no tendremos una Constitución ni de extrema izquierda ni de extrema derecha”, a lo cual me permito agregar: sino que todo lo contrario. Pero, el “apruebo” a la elaboración de una nueva Constitución es la segura opción ganadora por una mayoría ostensible, lo que no está asegurado es la legitimidad de una nueva Carta donde la generalidad de la nación se sienta representada.

El virus

La peste se convierte en un asunto político nacional y global cuando la legitimidad del poder pasa por su capacidad de resolverla. El carácter insidioso de esta peste, se muestra con una apariencia benigna que oculta su suma gravedad, lo que genera la duda sobre la legitimidad y capacidad del poder nacional y global para resolverla, la incertidumbre así generada es tal que las bolsas y los precios de las materias primas se derrumban, mientras que los expertos agoreros anuncian esta crisis económica como aún más grave que la del 2008.

Veamos que ha pasado aquí, la solución propuesta a esta grave crisis sanitaria ha sido la cuarentena, la cual según la RAE es el: “Aislamiento preventivo al que se somete durante un período de tiempo, por razones sanitarias, a personas o animales”. En breve, esta crisis sanitaria con extensas cantidades de personas en cuarentena por todo el planeta que, entonces, ni producen ni compran bienes y servicios por períodos no discernibles de tiempo, genera una previsible crisis de demanda que impide que las empresas productivas y comerciales vendan sus inventarios, debi-

do a lo cual no pueden cumplir con sus compromisos financieros por los créditos que tomaron, lo que colapsa al sector financiero, con lo cual se completa así una crisis económica global, donde la economía se ha visto detenida por la cuarentena universal.

En esta, enunciada como la más grande crisis económica, política, social y cultural de la era de la globalización, la doctrina económica y política que aflora para confrontarla es aquella del “hay que”, con sus enunciados de: *hay que* salvar a las grandes empresas, también, claro está, a las pymes; *hay que* subsidiar los salarios, *hay que* prorrogar los pagos de los créditos, *hay que* prorrogar los pagos, disminuir y suprimir impuestos, y muchos otros *hay que*, en fin, el sujeto activo de todos los *hay que* es el Estado y sus beneficiarios son las empresas privadas, algunos aclaran que no sus dueños (Andrea Repetto).

Quién paga la crisis

De la misma manera que la movilización de la nación insurrecta abrió el espacio para la constituyente, la doctrina del “*hay que*” instala la oportunidad para que el Estado de Chile recupere su rol protagónico en la producción y redistribución de la riqueza nacional. Ha sido más o menos tradicional que las grandes crisis económicas privadas sean resueltas y solventadas con recursos públicos, así pasó aquí en Chile en la crisis de los “deudores no viables” en 1982 y a nivel global con la crisis de los *subprime* en 2008, lo que se conoce como la sarcástica doctrina según la cual mientras “las ganancias se privatizan las pérdidas se socializan”. Pues, esta puede ser una oportunidad para que el Estado vía el salvataje financiero

recupere las rentables empresas públicas que fueron privatizadas, entre ellas LAN/Latam, las sanitarias, las de pesca, etc. Si bien, el gobierno se ha propuesto un programa de recuperación económica ante la crisis que se inicia por un monto US\$ 11.700 millones, no se debe olvidar que las sobre ganancias -“rentas graciosas”-, más allá de las utilidades habituales, obtenidas por la grandes compañías mineras del cobre tuvieron un promedio anual de US\$ 12,100 millones durante los años 2005 a 2014, el 4,5% del PIB y el 24% del gasto público anual (1).

La crisis económica causada por la peste servirá de pretexto a la derecha y al gobierno para imponer la imposibilidad de financiar la realización de las reformas sociales que el estallido social ha logrado ir instalando junto con la constituyente en derechos sociales como la previsión social, la salud, la educación, los ingresos garantizados, la vivienda, etc.

El torpe manejo de la peste por el gobierno ha generalizado una cada vez más constante beligerancia de los alcaldes frente a las medidas sanitarias que adopta, en lo cual estos se muestran mucho más sensibles y receptivos a las demandas de sus vecinos que el gobierno y el Congreso. Bien nos ha recordado Constanza Michelson que: en la catástrofe se nos aparece lo real, lo que es, nuestra dependencia de los otros. ■

1. Sturla, G. y otros. Nuevas Estimaciones de la Riqueza Regalada a las grandes Empresas de la Minería Privada del Cobre: Chile 2005-2004. Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. 2016

*Docente e investigador.

Chile y la pandemia del coronavirus

El mejor sistema de salud del planeta Tierra hace agua

por Rafael Urriola U.*

El ministro de Salud de Chile, doctor Jaime Mañalich, insistió el pasado 25 de febrero: “Tenemos uno de los mejores sistemas de salud del planeta Tierra, eso es lo que yo he dicho”. Esta temeraria aseveración -incluso calificada de “arrogante” por especialistas de otros países- sería sometida a la prueba de la práctica en menos de un mes.

No cabe duda de que el sistema de salud de Chile está sometido a verificación en esta pandemia. No podrá argumentarse que la coyuntura del Covid-19 es un caso excepcional porque los sistemas de seguridad no se miden cuando flama la calma, sino cuando se les tensiona: bomberos, Conaf, Fuerzas Armadas, policías, salud, etc. mal podrían ser evaluados cuando nada ocurre. La salud es un sistema de seguridad esencial para los países y cuya eficiencia, finalmente, se mide por la capacidad de prevenir, obtener resultados sanitarios y enfrentar crisis epidémicas o pandémicas.

¿Podrá enfrentar Chile mejor que otros países la crisis provocada por el Covid-19? El presidente Sebastián Piñera ha insistido en que en Chile se tomaron precauciones mucho antes que en Italia, aunque no se sabe cuáles han sido esas acciones. Las cifras oficiales de las proyecciones de la incidencia del Covid-19 cambian día a día. Esto tiene particular importancia porque cambian las proyecciones de lo que el sistema deberá solventar.

Según consignaba radio *cooperativa.cl* el 19.3.2020, el gobierno trabaja con una hipótesis de propagación que plantea que, progresivamente, un millón ochocientas mil personas infectadas se irían confirmando a lo largo de 2020.

María Teresa Valenzuela, salubrista y epidemióloga que dirige el Consejo Asesor Covid-19 creado por el Ejecutivo, advierte que, el grueso de los infectados chilenos, cercano al 85 por ciento, padecería la enfermedad en forma ambulatoria y sin mayores complicaciones y que un 15 por ciento requeriría hospitalización, aunque la hospitalización en los adultos mayores de 60 años puede ir de un 15 a un 27 por ciento. Esto es diferente a lo que el propio ministro había declarado el día anterior. En efecto, el martes 17, Mañalich había declarado: “No hay motivo para tener pánico. Esta enfermedad afecta a pocas personas, la mayoría con síntomas leves”.

Camas insuficientes

Las cuentas no son halagüeñas. Con cálculos básicos se estima que Chile necesitará de 270.000 camas adicionales. En Chile hay 2,1 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes (en Italia 3,2) y se ubica en el penúltimo lugar de los países OCDE según las estadísticas oficiales de esa organización disponibles para 2017. La dotación total de camas en Chile es de 38.853 de las cuales 70% son administradas por el sector público, según datos del Observatorio Chileno de Salud Pública de la Universidad de Chile. Por lo demás, el uso normal de estas camas alcanza a cerca de 85% en promedio con

lo que solo quedarán disponibles unas 5.000 para enfrentar la pandemia. Con estas estadísticas, las voces prematuras de algunas autoridades afirmando que estamos preparados o que nos hemos preparado antes o mejor que Italia carecen de sentido. Para quienes se infecten, salvarse será un verdadero milagro. Solo el 5 por ciento podrá acceder a atención sanitaria adecuada y con los instrumentos que requiere la situación.

De hecho, Chile no solo no se ha preparado para situaciones como las que genera el Covid 19 sino que ha empeorado su capacidad para enfrentar estas circunstancias. En efecto, en la base de datos de la OCDE figura que el año 2000 el país disponía de 41.786 camas hospitalarias, es decir, se ha reducido en 7 por ciento la disponibilidad nacional, pese a que hay más población y las listas de espera por cirugías en el sector público alcanzaban a 250.968 en marzo de 2019 como indicaba el ORD C 202 N° 1972 enviado por la Subsecretaría de Redes a la Dipres en abril de 2019. Otro estudio (C. Rojas et al de 2015) concluye que en el sector público la reducción de camas es más pronunciada porque alcanza a 11,7 por ciento entre 2008 y 2014.

Una concepción privatizadora se ha empoderado de las autoridades sanitarias desde hace ya varios años. Luego de una recuperación de los indicadores de salud en la década de los 90, desde este siglo XXI el sector público de salud se ha deteriorado en cuanto a su capacidad de resolver las demandas sanitarias pese a que el 80 por ciento de la población sigue afiliada a Fonasa que, por lo demás, no solo cubre a los grupos pobres. En efecto, según la encuesta Casen de 2017, Fonasa atiende mayoritariamente a la población de los nueve primeros deciles de ingresos por lo que le corresponde una responsabilidad mayor.

El sistema se encuentra en crisis, tanto por el “esfuerzo” privatizador, como por una estrategia que deriva de una concepción según la cual la salud es un bien de mercado y no un derecho. En Italia, España y Francia los actuales presidentes han reconocido que este tipo de pandemias pueden enfrentarse mejor con un sistema público poderoso. Incluso EEUU ha puesto ingentes recursos para enfrentar los daños personales y económicos del virus.

Control del contagio

En Chile, el gasto fiscal para salud entre 2003 y 2018 ha aumentado en 10 por ciento anual; el gasto total en salud lo ha hecho en 7,3 por ciento (todas cifras reales, es decir, eliminado el efecto precios). Esto hace que desde el año pasado (2019) el país ha superado el promedio de la OCDE de gasto en salud en lo

que se refiere al Producto Interno Bruto, alcanzando 9,1 por ciento. Sin embargo, los resultados no parecen haber aumentado en una proporción similar. Más bien, existe una sensación que son los precios los que aumentan, pero no la cantidad o calidad de las prestaciones. Por ejemplo, estudios del Servicio Nacional del Consumidor registran diferencias de precios en los medicamentos de hasta siete veces. El precio del test del Covid19 en el sector privado varía entre 36.000 y 62.000 pesos según un artículo de Ciper del 20 de marzo (esto sin contar los costos de la consulta de urgencia), en cambio, es gratuito en el sector público.

Aun así, se discrimina, como relata J. Márquez Cervantes en twitter este 18.3.2020 quien pasó por un verdadero calvario para saber si su pareja estaba infectada. “No tuve respuesta en el call center público que estaba colapsado. Fuimos a una clínica privada (ella estaba cubierta por la gratuidad) pero yo pagué \$36.000 y pude saber antes que ella que estaba infectado y, en cambio, ella debió esperar 48 horas el resultado del examen. Ambos estuvimos más de siete horas en la sala de espera de la clínica privada pudiendo haber infectado a otros pacientes que estaban allí por otras dolencias”. El sistema público y privado no difieren finalmente tanto pero, obviamente, están lejos de ser modelos mundiales.

Si se quiere ser más eficiente que Italia como aseguran el presidente de la República y el ministro de Salud valdría la pena examinar más de cerca lo que se hizo en ese país. Las autoridades italianas intentan explicar las 3.405 muertes hasta el 19 de marzo por la mayor longevidad de su población, afirma la economista italiana Giuseppina Da Ros. Alrededor del 22% de la población italiana, es decir casi 14 millones de individuos, tiene más de 65 años de edad. Cabe notar que en Chile, según el INE, en 2020 hay 2.358.616 personas mayores de 65 años y que esto representa el 12 por ciento de la población. Se dijo en Italia -explica Da Ros- que el problema afectó especialmente a los mayores de 80 años que presentan mayores comorbilidades. En Chile son casi 550 mil personas que podrían estar en esta situación de riesgo extremo.

Sin embargo, dice la analista Da Ros, no todos consideran que la edad sea el factor determinante del alto número de muertes en el país pues tendría más bien que ver con la cantidad del control y tests que se están realizando. Según el profesor Cowling (epidemiólogo de la Universidad de Hong Kong), que compara la situación italiana con la de Corea del Sur, este último país habría adoptado medidas de prevención y control más estrictas y basadas en la realización de tests a más de 10 mil personas por día; por tanto, muchas de ellas que resultaron positivas presentaban síntomas leves y pudieron fácilmente ser atendidas a tiempo. Se evitó así que se transmitiera la infección a la comunidad y se saturaran los hospitales. Como se señaló, al precio de

\$36.000 en el sector privado chileno y sin que el sector público tome suficientes test no parece posible que se podrá evitar una catástrofe mayor. El presidente Piñera entrevistado por la periodista Soledad Onetto, en cambio, dijo que este examen debía hacerse solo cuando se tienen los síntomas lo cual restringe de manera importante la necesidad de prevención para enfrentar la pandemia.

Actuar con rapidez

La experiencia de Italia -continúa G. Da Ros- ha puesto en evidencia la necesidad de actuar con rapidez y en una etapa temprana, antes de que el número de casos llegue a niveles críticos y que se exija a los sistemas de salud mucho más de sus reales capacidades de respuesta. Los médicos han tenido que adoptar rutinas de “tiempos de guerra” y tomar decisiones difíciles sobre las prioridades en el cuidado intensivo de los enfermos.

En Chile, hasta este sábado 21 de marzo el ministro de Salud se oponía ferozmente a una cuarentena total, pese a que en numerosos países (Italia, Francia, España, Argentina y otros países de América) se ha adoptado tal medida. Más aún, alcaldes de las comunas “dormitorios” de la Región Metropolitana han apoyado e insistido en la necesidad de esta medida. Los alcaldes argumentan que las aglomeraciones que presenta el transporte público que lleva a los habitantes de esas comunas hacia los lugares frecuentes de trabajo asegura una velocidad de contagio exponencial si alguno de los pasajeros fuese portador del virus. El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, la comuna más poblada de Chile, pese a pertenecer a la coalición gobernante, discrepó públicamente con el ministro del Interior y el de Salud por no querer decretar la cuarentena total, que también es apoyada por el Colegio Médico de Chile.

El presidente Piñera indicó que Chile desde enero viene preparándose para enfrentar el Covid-19. En realidad, todas las medidas han sido tomadas con retraso lo que podría potenciar la expansión de la enfermedad y el número de muertos. Hasta este domingo 22 solo había un fallecido por esta causa, pero hay consenso en que esto puede aumentar exponencialmente porque si las propias autoridades no le otorgan a la pandemia el riesgo mortal que tiene, las personas, como en Italia, creerán que es problema de otros hasta que será demasiado tarde.

El gobierno parecía frotarse las manos cuando apareció el Covid-19 porque, gracias al llamado del Colegio Médico, se apaciguaron las protestas que ya duraban cinco meses, día tras día. Si la crisis de la pandemia se trata con negligencia, retardo, opacidad y colocando intereses económicos por sobre los de la población, quizás el resultado sea aún más grave para las autoridades que lo que logró el llamado “estallido social” de Chile. ■

*Economista U. de Chile, magister Economía Pública y Planificación U. de Paris X Francia, especialista en economía de la salud.

Las medidas “históricas” del gobierno de Piñera ante la crisis

Un plan que no da el ancho

por David Debrott Sánchez*

El paquete de medidas económicas anunciado por el gobierno el 19 de marzo, fue presentado como “inédito en la historia de Chile” y orientado a “proteger la salud, los ingresos y el trabajo de las familias chilenas”. Ambas cosas son dudosas y muestran que el gobierno no ha estado en condiciones de enfrentar la compleja crisis que atraviesa el país y las consecuencias que vendrán a corto plazo.

Según el gobierno, sería un paquete de medidas “histórico” por la magnitud de recursos “fiscales” comprometidos: unos US\$ 11.750 millones, algo así como \$9,4 billones. Sin embargo, al detallar las cifras por cada medida, es casi imposible llegar al monto anunciado: hay una evidente falta de claridad y de transparencia en el anuncio. Asimismo, se evidencia una manipulación de la información cuando se mezclan medidas que comprometen gasto “fiscal” efectivo con medidas que, por diferentes vías, difieren o derechamente reducen recaudación fiscal.

El uso del 2% constitucional para el sector Salud, en rigor, no puede ser interpretado como un aporte de nuevos recursos fiscales, ya que la Ley permite que dichos recursos sean financiados con reasignaciones desde otras partidas del Presupuesto

del sector público. En este sentido, es necesario exigir un compromiso explícito de recursos frescos, sin desatender otras necesidades ya comprometidas en otros sectores, especialmente del área social.

Las medidas tributarias, que en su conjunto ascienden a US\$ 5.590 millones (47,6% del total), corresponden en su mayor parte (US\$ 5.170 millones) a la postergación en el plazo de pago de tributos (crédito fiscal por PPM, IVA, Renta y Contribuciones) y a una reducción efectiva de recaudación (US\$ 420 millones) por Impuesto de Timbres y Estampillas. Ninguna de ellas representa mayor gasto fiscal.

Respecto a las medidas de inyección de liquidez, la aceleración del pago a proveedores del Estado, equivalente a US\$ 1.500 millones, en parte corresponde a saldar deudas vencidas que ya habían si-

do contraídas previo a la crisis y al compromiso de pagar al contado las deudas vigentes y a 30 días los futuros devengos. Ninguna de ellas es un compromiso de aportar mayores recursos fiscales. La capitalización del Banco Estado (US\$ 500 millones) corresponde a una transferencia patrimonial al interior de organismos del Estado. Esto corresponde aproximadamente a un 20% del capital pagado y reservas actual del banco, e incrementará su capacidad de colocación. No obstante, tampoco es un compromiso de mayor gasto fiscal efectivo.

Contradicciones

Pero lo más contradictorio del discurso oficial es que se plantee que el paquete de medidas va hacia las familias: “proteger la salud, los ingresos y el trabajo de las familias chilenas”.

Las únicas medidas que van directamente hacia los hogares son dos. Se compromete un Bono Covid-19 por unos \$ 50.000, según indicó la ministra de Trabajo, para un máximo de dos millones de personas sin trabajo formal, por un total de US\$ 130 millones. No obstante, la información oficial habla de un monto equivalente al SUF, es decir, \$ 13.155. Tal vaguedad podría cuadrar si se entrega el total de recursos comprometido al total de personas sin trabajo formal. En consecuencia, el bono no es de \$50 mil por

persona, sino por hogar, suponiendo que detrás de cada trabajador hay aproximadamente tres cargas familiares en promedio. En tanto, el Fondo Solidario para el micro-comercio por apenas US\$ 100 millones, será canalizado a través de los municipios.

Otras medidas como las que se relacionan con el Seguro de Cesantía (inyección de recursos fiscales por US\$ 2.000 millones al Fondo y urgencia del proyecto de Ley sobre Protección del Empleo) trasladan la responsabilidad hacia los propios trabajadores, en la medida en que es el Seguro el que absorbería la mayor parte del gasto. Por otra parte, la flexibilización de cobranzas de deudas por parte de Tesorería, solo constituye una postergación de compromisos en el tiempo. El reconocimiento como gastos “aceptados” de las empresas aquellos que se relacionen con la pandemia (que reducen Utilidades y disminuyen el pago de Impuesto a la Renta), claramente no va destinado a las familias, sino a las grandes empresas.

En síntesis, la historia económica recordará este paquete de medidas como una gran falsedad y, especialmente, como un plan de reactivación económica que no estuvo a la altura de las necesidades actuales de la población y de la debacle económica que se avecina. ■

*Economista.

La violencia y la lucha social

¿Venga de donde venga?
por Claudio Espinoza A.

Represión como escarmiento en Copenhague
por René Vázquez Díaz

Preguntas por la dignidad, la violencia y la
justicia
por Javiera Cienfuegos

Mercenarios de las luchas no violentas
por Ana Otasevic

Los discursos sobre la violencia
por Ibán de Rementería

Nelson Mandela
Enemigo de ayer, ídolo de hoy
por Alain Gresh

Estallido en los suburbios franceses
por Laurent Bonelli

Libro en venta en versión digital en Pdf a \$2.500

www.editorialauncreemos.cl



Compre libros digitales a \$2.500



La Universidad en tiempos de COVID-19

La urgencia de pensar y diseñar una sociedad alternativa

por Dante Castillo* y Mario Torres**

En el contexto nacional, es un hecho que el asalto neoliberal ha limitado la capacidad de acción y de colaboración de las universidades del Estado. Indudablemente esto se reflejará negativamente en la reacción que tendrán para diseñar e implementar acciones estratégicas, que se requieren para atender los desafíos de la actual crisis sanitaria. La pandemia del Covid-19 será el enésimo ejemplo del fracaso de la lógica de mercado, instalada y aplaudida en Chile por más de cuarenta años de gestión neoliberal. Las universidades tendrán dificultades para satisfacer las necesidades de la sociedad y las demandas de los sectores más pobres en particular.

El gran empresariado nacional e internacional está adaptándose, desde hace tiempo, a los efectos y consecuencias catastróficas de la producción capitalista, tal como se advierte en el tema del cambio climático. Lo mismo se observa con las transnacionales farmacéuticas que, sabiendo de la probabilidad real que se produzcan pandemias, se disputan las patentes de vacunas y medicamentos, para asegurar y aumentar sus beneficios económicos.

Sin embargo, pese a las adaptaciones y precauciones que está tomando el capitalismo internacional y, a lo rentable que puede ser esta catástrofe para las grandes transnacionales, en términos generales, el Covid-19 será sin duda, un duro golpe al sistema de producción capitalista. En el caso chileno, con toda seguridad, el impacto de la pandemia se convertirá en otro “gatillante” de la crisis de legitimidad que afecta al gobierno, al sistema político en su conjunto y al modelo productivo y laboral.

El estallido social de octubre de 2019 mostró el agotamiento y fracaso del modelo económico y de la cultura de mercado. Si bien la demanda se expresó en diversos ámbitos sociales, el énfasis estuvo puesto en las dimensiones previsional y educacional. En este último caso, la Ley General de Educación, promulgada y celebrada por todos los representantes políticos en el año 2009, dio cuenta de su nulo impacto en la disminución de las desigualdades educativas. De hecho, en los últimos 10 años, las brechas de desigualdad y de inequidad entre el sistema de educación público y privado, se incrementaron brutalmente al amparo de este marco jurídico. Esta situación ha sido profusamente denunciada por la ciudadanía, sus organizaciones y por las propias instituciones públicas de educación superior.

A pesar de la vulnerabilidad en la que se ha recluso a la universidad pública del Estado, una vez más, para abordar la emergencia sanitaria, las instituciones de educación superior estatales se levantan como una de las pocas entidades sociales, de las que se espera un aporte significativo. Ellas ocupan un lugar de privilegio para la comprensión, diseño, contención y prevención de las diferentes contingencias que emergerán al alero de la crisis del modelo. A diferencia de



Oscar Gacitúa, Orfeón en perspectiva (acuarela sobre papel), 2008

la mayoría de las instituciones públicas y privadas nacionales, las universidades públicas del Estado aún mantienen el reconocimiento y aceptación de la ciudadanía y sus organizaciones.

En el contexto que está imponiendo la actual de crisis sanitaria, las universidades del Estado no debieran encasillarse exclusivamente en las acciones de voluntariado, necesarias, por cierto, pero muy insuficientes para abordar los retos de la pandemia y las provocaciones y estertores de un modelo neoliberal. Un modelo que se advierte aterrado por los fantasmas de las crisis cíclicas pronosticadas por la teoría marxista clásica. Es precisamente este terror, el que impulsa a que varios representantes del modelo solicitan con urgencia la ayuda económica del Estado. De hecho, desde hace semanas varias vocerías empresariales hablan de un Estado que aporta liquidez a las grandes empresas o derechamente a la “nacionalización” de una parte de las grandes compañías. Una prueba de ello es el llamado que están haciendo las empresas de aviación.

En Chile, indudablemente el sistema de partidos políticos caerá seducido por los cantos de sirena. Para ser justos, la mayoría de sus representantes no tendrán pudor en solicitar un nuevo rescate estatal. La idea de base nuevamente será la lógica del “chorreo”, es decir, inyectar liquidez a las empresas privadas para reducir los efectos nocivos de la pandemia en el empleo de los trabajadores.

Es por ello que las universidades y sus académicos e intelectuales, no deben

conformarse con una contribución logística o meramente reactiva y contingente. Hoy, es imperativo que, pese a las limitaciones, la universidad pública del Estado se levante y se ubique en el lugar donde mejor lo hace. Siempre es tiempo de “trabajos voluntarios”, pero para atender la crisis sanitaria y sus efectos en el sistema social, la universidad del Estado debe promover la reflexión y la discusión, pues, a partir de estos debates internos y públicos, será posible levantar propuestas y acciones consensuadas.

Es imperativo que las universidades estén atentas a la función y rol en que la política neoliberal tratará de confinarlas en tiempos de crisis.

Sabemos que es necesario promover una logística que permita utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para mantenernos conectados. Sabemos también que es importante contar con un sistema de “clases por Internet”, pero junto con esto, también debemos reflexionar y discutir sobre los efectos no deseados de una educación a distancia y de una actividad laboral centrada en el teletrabajo. En otras palabras, la universidad debe mantener y fortalecer su rol político e ideológico, incluso cuando cede sus laboratorios clínicos o cuando contribuye con la toma de muestras para diagnosticar el Covid-19.

La universidad del Estado es un espacio legítimo y facilitador del debate y los acuerdos transversales que requiere Chile. Por lo mismo, estas instituciones de educación superior deben ofrecer a las

autoridades políticas, administrativas y a la sociedad en general, todas las capacidades que disponen para organizar y facilitar sistematizadamente los mecanismos y procedimientos para avanzar en las transformaciones que demanda y requiere nuestra ciudadanía. Es tarea prioritaria articular la creatividad, el compromiso y el trabajo de los y las estudiantes, académicas y de la comunidad universitaria en general. La crisis sanitaria también se vincula a diálogos significativos que permitan acompañar los procesos de cambio que se requerirán a nivel cultural, social, político y económico.

La universidad pública, pese a la gran arremetida neoliberal, ha conservado su dimensión y vinculación con la política. Por más que la han tratado de encuadrar como un espacio instrumental de educación científica y tecnológica. Por más que la han tratado de separar del quehacer social, las universidades públicas han logrado “milagrosamente” mantener la dimensión política que las conecta con la realidad y las demandas de la ciudadanía.

Los debates, disputas, propuestas y acciones que se dan en el quehacer de las universidades públicas del Estado, son mucho más intensas e ideológicas que la mezquindad observada en la mayoría de los partidos políticos chilenos. A la fecha, los partidos políticos chilenos se han especializado en las tecnologías para la administración del poder y muy marginalmente para el cambio. En síntesis, cuando los partidos políticos chilenos se han transformado en un actor eminentemente “apolítico”, las universidades públicas, sus estudiantes, académicos, investigadores y administradores, tienen la obligación de politizar los efectos y las acciones con las que se intentará abordar la crisis sanitaria.

Las universidades del Estado chileno pueden, contribuir a difundir un “virus” igualmente contagioso, pero a diferencia del Covid-19, beneficioso para la ciudadanía. Es un desafío para los estudiantes, académicos e intelectuales universitarios, tal como recientemente lo ha propuesto Slavoj Žižek, diseñar un virus ideológico que infecte y se expanda para pensar en una sociedad alternativa. En otras palabras, es un deber de las universidades del Estado, impulsar los laboratorios de humanidades y ciencias sociales, con el fin de expandir el virus que termine con las inequidades y las injusticias de la sociedad del lucro. En el horizonte se avecinan otras pandemias. Las sequías, las olas de calor, las inundaciones, entre otras cuyos síntomas ya estamos sintiendo. Por lo tanto, es un deber universitario tener respuestas para enfrentar al pánico y al caos. La mejor respuesta, es una política e ideológica.

En síntesis, las universidades públicas del Estado no deben reducirse a un rol técnico que solo es consultado para juzgar si el uso de la mascarilla bucal es efectivo para la propagación del virus. Ante todo, las universidades del Estado son una de las pocas instituciones que cuentan con la legitimidad para participar en las grandes transformaciones sociales, culturales y económicas que demanda el contexto. Al mismo tiempo, es la única entidad que tiene como misión institucional, asegurar que toda la sociedad, independientemente del origen, reciba los beneficios de su quehacer. ■

*Investigador PIIE

**Vicerrector de la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Vinculación con el Medio. UTEM.

El capitalismo del desastre

Hasta el próximo fin del mundo...

por Renaud Lambert y Pierre Rimbert*

El arte de la prestidigitación consiste en orientar la atención del público para que no observe lo que tiene ante sus ojos. En el corazón de la epidemia de Covid-19, el juego de manos adoptó la forma de un gráfico con dos curvas, difundido por los televisores de todo el mundo. Como abscisa el tiempo; como ordenada la cantidad de casos severos de la enfermedad. Una primera curva en forma de puntas agudas presenta el impacto de la epidemia si no se hace nada: rompe la recta horizontal que indica las capacidades máximas de acogida de los hospitales. La segunda curva ilustra una situación donde las medidas de confinamiento permiten limitar la propagación. Débilmente abombada, como el caparazón de una tortuga, se desliza bajo el umbral fatídico.

Exhibido de Washington a París, pasando por Seúl, Roma o Dublín, el gráfico apunta a la urgencia: extender en el tiempo el ritmo del contagio para evitar la saturación de los servicios de salud. Cuando llaman la atención sobre las dos ondulaciones, los periodistas eluden un elemento importante: esa recta discreta, en el medio del gráfico, que representa la cantidad de camas disponibles para atender los casos graves. Presentado como un dato caído del cielo, ese “umbral crítico” se desprende de elecciones políticas.

Si hay que “achatar la curva” es porque, desde hace decenas de años, las políticas de austeridad redujeron la marca al despojar a los servicios de salud de sus capacidades de recepción. En 1980 Francia disponía de once camas de hospital (todos los servicios mezclados) cada mil habitantes. Hoy no hay más que seis, que en septiembre una ministra de Salud marconista proponía dejar libradas a la buena voluntad de los “*bed managers*” (administradores de camas), encargados de asignar ese recurso escaso. En Estados Unidos, las 7,9 camas por mil habitantes inventariadas en 1970 se reducen a 2,8 en 2016. Según la Organización Mundial de la Salud, Italia contaba con 922 camas dedicadas a los “casos serios” por 100.000 habitantes en 1980, contra 275 treinta años más tarde. En todas partes la misma consigna: reducir los costos. El hospital funcionará como una fábrica automotriz, en modo “justo a tiempo”. Resultado, el 6 de marzo pasado la Sociedad italiana de Anestesia Analgésica, Reanimación y Terapia Intensiva (SIAARTI) comparaba el trabajo de los médicos de urgencia transalpinos con “medicina de catástrofe”. Y alertaba: teniendo en cuenta “la falta de recursos”, “podría ser necesario establecer una edad límite para el acceso a la unidad de terapia intensiva”. “Medicina de guerra”: un término ahora corriente en el Gran Este de Francia.

Burocracia liberal

Así, la crisis del coronavirus depende tanto de la peligrosidad de la enfermedad como de la degradación organizada del sistema sanitario. Eternas cámaras de resonancia del credo contable, los grandes medios eludieron el examen crítico de esas elecciones para invitar a lectores y auditores a un vertiginoso debate filosófico: ¿cómo decidir a quién salvar y a quién dejar morir? Esta vez, sin embargo, será difícil ocultar la cuestión política detrás de un dilema ético.



Marie Rosmanich, Catalejo (óleo sobre tela), 2020 (Gentileza Galería La Sala)

Porque la epidemia de Covid-19 descubre a los ojos de todos una organización económica todavía más aberrante de lo que nadie suponía. Mientras que algunas compañías aéreas hacían circular a sus aviones vacíos con el objeto de conservar sus franjas horarias, un investigador explicaba cómo la burocracia liberal había desalentado la investigación fundamental sobre los coronavirus. Como si fuera necesario salir de lo corriente para percibir su desarreglo, Marshall Burke, docente en Ciencia de los Ecosistemas en la Universidad de Stanford, observaba esta paradoja “La reducción de la contaminación del aire debida a la epidemia de Covid-19 en China probablemente salvó veinte veces el número de vidas perdidas debido a la enfermedad. No se trata tanto de inferir de esto que las pandemias son benéficas como de medir hasta qué punto nuestros sistemas económicos son malos para la salud. Incluso en ausencia de coronavirus”. El broche de oro de este viaje a Absurdilandia no se encontraba ni en el riesgo de escasez de medicamentos consecutivo a la deslocalización de las cadenas de producción, ni en la obstinación de los mercados financieros en penalizar a Italia cuando el gobierno tomaba sus primeras medidas sanitarias, sino puertas adentro de los hospitales. Instituida a mediados de los años 2000, la “tarifa por la actividad” (T2A) proporciona el financiamiento de los establecimientos por el número de los actos médicos realizados, facturados cada uno como en una tienda, más que en función de una planificación de las necesidades. De haber sido aplicado durante la crisis en curso, este principio del cuidado como mercancía importado de Estados Unidos pronto habría estrangulado a los establecimientos que recibían a los pacientes más afectados porque las formas críticas del Covid-19 exigen en primer lugar el establecimiento de una ventilación mecánica, acto costoso en tiempo pero menos remunerativo en la estructura de precios que cantidad de exámenes diferidos a causa de la epidemia...

La hora de la cuarentena

Un tiempo, el microbio que está en el origen de las más severas medidas de confinamiento nunca imaginadas en tiempos de paz pareció romper los marcos del espacio social: el banquero de Wall Street y el trabajador chino ¿no se veían repentinamente sometidos a la misma amenaza? Y luego el dinero recuperó sus derechos. Por una parte los confinados en los chalets que teletrabajan con los pies en la piscina; por la otra los invisibles de todos los días, personal sanitario, agentes de superficie, cajeros de supermercado y asalariados de la logística que por una vez salieron de la sombra por estar sometidos a un riesgo que los más favorecidos desdeñan. Teletrabajadores enclaustrados en un apartamento exiguo donde resuenan los llantos de los niños; gente sin techo a quienes les gustaría poder quedarse en su casa.

En su “tipología de los comportamientos colectivos en tiempos de peste”, entre los siglos XIV y XVIII, el historiador conservador Jean Delumeau observa esta invariante: “Cuando aparece el peligro del contagio primero se trata de no verlo”. El escritor alemán Heinrich Heine observa que después del anuncio oficial de la epidemia de cólera en París, en 1832, “los parisinos se paseaban con tanta más jovialidad en los bulevares” cuanto que “había sol y un tiempo espléndido”. Luego, los ricos huyen al campo. Más tarde, el gobierno pone a la ciudad en cuarentena. Entonces, de pronto, explica Delumeau, “los marcos familiares son abolidos. La inseguridad no nace solamente de la presencia de la enfermedad sino también de una desestructuración de los elementos que construían el medio ambiente cotidiano. Todo es distinto”. Los habitantes confinados de Wuhan, Roma, Madrid o París lo experimentan en una escala inédita.

Las grandes pestes de la Edad Media y del Renacimiento se interpretaban a menudo como un signo del Juicio Final, el de la furia de un Dios vengador desencade-

nada en un mundo que llega a su fin. Entonces cada uno se volvía alternativamente hacia el cielo para implorar la gracia y hacia la vecindad en busca de culpables: los judíos y las mujeres a quienes buscan como chivos expiatorios en *Los animales con peste*, de La Fontaine. En la Europa del siglo XXI, la epidemia de coronavirus se desploma sobre sociedades secularizadas pero, desde la crisis financiera de 2008, afectadas en grados diversos por el sentimiento de una “pérdida de control” ecológico, político, financiero, demográfico, migratorio, etcétera.

Desdeñar lo imprevisto

En esta atmósfera de “fin del mundo” donde se mezclan imágenes de Notre-Dame de París en llamas y debates sobre el derrumbe venidero, las miradas se vuelven hacia el poder público: el Estado, fuente de agravación del problema por su obstinación en quebrar el sistema de salud y única instancia no obstante susceptible de ordenar y coordinar una respuesta a la epidemia. Pero, ¿hasta dónde ir? En el curso del mes de febrero, el confinamiento durante varias semanas de 56 millones de habitantes de Hubei en China, la detención forzada de las fábricas, la llamada al orden de ciudadanos por drones equipados de cámaras y megáfonos, provocan en Europa comentarios socarrones o circunspectos sobre la mano de hierro del Partido Comunista. “Ninguna lección puede ser sacada de la experiencia china sobre la duración potencial de la epidemia –explica la revista L’Express, el 5 de marzo–. Allí disminuyó gracias a medidas drásticas de confinamiento, probablemente inaplicables en nuestras democracias”. Cansados, frente a virus insensibles a la superioridad de “nuestros” valores, hay que resolverse a poner en primer plano la decisión centralizada y el liberalismo económico en segundo.

Director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus aclara que “es posible rechazar la epidemia, pero únicamente sobre la base de un abordaje colectivo, coordinado y amplio, que implica al conjunto de la maquinaria”. Colectivo, coordinación, Estado: el revés del mercado. En algunos días, los marcos interpretativos del mundo social se vuelven con un guante: “Todo es distinto”. Las nociones de soberanía, de frontera, de límite e incluso de gastos públicos, asociadas desde hace medio siglo en los discursos públicos al “nacional-populismo” o a Corea del Norte, adquieren de pronto figura de solución en un mundo hasta entonces regulado por el culto a los flujos y al rigor presupuestario.

Aguijoneada por el pánico, la vanguardia editocrática descubre repentinamente lo que se había propuesto ignorar. “¿No se puede decir también que en el fondo esta crisis nos invita a repensar partes enteras de la globalización: nuestra dependencia de China, del librecomercio, del avión?”, interroga en *France Inter*, el 9 de marzo, Nicolas Demorand, en cuyo micrófono los detractores del proteccionismo, como Daniel Cohen, se suceden desde hace años.

Es preciso que la razón mercantil haya reconfigurado profundamente los entendimientos para que solo la irrupción de una pandemia mortal haga audible al poder las perogrulladas enunciadas por

el cuerpo médico desde hace décadas: “Sí, hay que disponer de una estructura hospitalaria pública que se haga cargo de tener camas disponibles de manera permanente –resumieron los médicos André Grimaldi, Anne Gervais Hasenknopf y Olivier Milleron–. El nuevo coronavirus tiene el mérito de recordar evidencias: no se paga a los bomberos simplemente para que vayan a apagar el fuego, lo que se quiere es que estén presentes y dispuestos en su cuartel, incluso cuando no hacen más que sacarle brillo a su camión mientras esperan que suene la sirena”.

Prever lo que ocurre sin dar aviso (un incendio, una enfermedad, un cataclismo, una crisis financiera): fue incorporando a sus instituciones –a menudo en contra de su voluntad– esa exigencia popular como el capitalismo se perpetuó y se renovó entre la crisis de 1929 y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Planificar lo imprevisto exigía romper con la racionalidad del mercado, que fija un precio en función de la oferta y la demanda, desprecia lo improbable y modela el porvenir por medio de ecuaciones donde las sociedades no cuentan para nada. Esa ceguera de la economía estándar, llevada a su más alto grado en las salas de negocios, golpeó al ex-agente y estadístico Nassim Nicholas Taleb. En un libro que apareció unos meses antes de la crisis de 2008, él observaba a propósito de los futurólogos de corto plazo: “El problema con los expertos es que no tienen la menor idea de lo que ignoran”. Desdenar lo imprevisto en un mundo marcado por la multiplicación de acontecimientos inesperados, los “cisnes negros”, a su juicio tiene que ver con la insensatez. A fines de marzo de 2020, cualquiera que oía resonar en su venta-

na el silencio de la ciudad confinada podía meditar sobre el encarnizamiento del Estado en despojarse a sí mismo no solo de las camas de reanimación sino de sus instrumentos de planificación, ahora monopolizados por algunas multinacionales del seguro y el reaseguro.

Repensar otro modelo

El quiebre provocado por la pandemia ¿puede invertir ese curso? Reencastar lo eventual y lo fortuito en la conducción de los asuntos públicos, ver más lejos que el cálculo costo/beneficio, poner en marcha una planificación ecológica implicaría socializar la mayoría de los servicios indispensables para la vida de las sociedades modernas, de la limpieza a las redes digitales, pasando por la salud: un vuelco de tal magnitud como raramente ocurre en tiempos normales. Una mirada de historiador sugiere que los cambios de régimen, de trayectoria, de manera de pensar la vida colectiva y la igualdad permanecen fuera de alcance de las deliberaciones políticas corrientes. “En todos los tiempos –escribe el historiador austriaco Walter Scheidel, profesor en Stanford–, los más grandes replanteos resultaron de los impactos más severos. Así, cuatro tipos de rupturas violentas lograron aplanar las desigualdades: la guerra cuando implica una movilización masiva, las revoluciones, las quiebras estatales y las pandemias mortíferas”. ¿Estaríamos en una de ellas? Por otro lado, en el curso de su historia el sistema económico mostró una extraordinaria capacidad de absorber los impactos cada vez más frecuentes que engendra su irracionalidad. De tal modo que las sacudidas más brutales generalmente son provecho-

sas para los garantes del *statu quo* que se apoyan en la estupefacción para extender el control del mercado. Ese capitalismo del desastre desmenuzado poco antes de la gran depresión de 2008 por Naomi Klein se burla del agotamiento de los recursos naturales y de las instituciones de protección social susceptibles de amortiguar las crisis. En un arrebato de optimismo, el ensayista canadiense observaba: “No siempre reaccionamos a los golpes volviendo atrás. En el marco de una crisis, a veces crecemos, rápido”.

Una idea loca

Fue una impresión de este tipo la que quiso dar el presidente francés Emmanuel Macron al expresar el 12 de marzo de 2020 su voluntad de “interrogar el modelo de desarrollo en el cual se internó nuestro mundo desde hace décadas y que devela sus fallas a la luz del día, interrogar las debilidades de nuestras democracias. Lo que revela ya esta pandemia es que la salud gratuita sin condiciones de ingresos, de trayectorias o de profesión, nuestro Estado de Bienestar, no son costos o cargas sino bienes preciosos, ventajas indispensables cuando golpea el destino. Lo que revela esta pandemia es que hay bienes y servicios que deben ser puestos fuera de las leyes del mercado. Delegar nuestra alimentación, nuestra protección, nuestra capacidad de cuidar nuestro marco de vida a otros es en el fondo una locura. Debemos recuperar el control”. Tres días más tarde aplazaba una reforma de las jubilaciones, otra de las asignaciones por desocupación, para luego decretar la puesta en marcha de medidas consideradas hasta ahora imposibles: limitación de los des-

pidos, abandono de toda coerción presupuestaria. Las circunstancias acentuaron por sí mismas esta degradación: con el derrumbe de los valores bursátiles, la obsesión presidencial de orientar el ahorro y las jubilaciones de los puestos jerárquicos hacia los mercados de acciones se presenta como una genialidad visionaria. Sin embargo, suspender el código del trabajo, restringir las libertades públicas, financiar a las empresas con total disponibilidad, sustraerlas a las cotizaciones sociales sobre las cuales descansa el sistema de salud no señala una ruptura radical con las políticas precedentes. Esta transferencia masiva de dinero público hacia el sector privado recuerda el salvataje de los bancos por el Estado en 2008. La cuenta había adoptado la forma de la austeridad impuesta a los asalariados y a los servicios públicos. ¿Menos camas? Claro: había que rescatar a los bancos.

Por eso la epifanía del jefe de Estado evoca la que golpeó a Nicolas Sarkozy un día de septiembre de 2008, poco después del derrumbe de Lehman Brothers. Ante sus partidarios petrificados, el presidente de la República había anunciado solemnemente: “Con el fin de un capitalismo financiero que había impuesto su lógica a toda la economía y había contribuido en pervertirla culmina cierta idea de la globalización. [...] La idea de que los mercados siempre tienen razón era una idea loca”. Cosa que, una vez pasada la tormenta, no le impidió retomar el curso de la locura común y corriente. ■

*Respectivamente, redactor en Jefe Adjunto y redactor de *Le Monde diplomatique*, París.

Traducción: Víctor Goldstein

Coronacrack

por Frédéric Lordon*

¿Otra vez sopa? Está claro que, con la globalización financiera, la calesita no deja de girar: la convulsión es la regla y la tranquilidad, el intervalo. Hoy enfrentamos una crisis que veíamos venir desde hace tiempo.

Sin embargo, no hay que confundir su naturaleza. Por lo general, los cracks propiamente bursátiles (es decir, los que solo implican a las acciones) tienen más de espectáculo que efectos. El de 1987 se absorbió como tinta en papel secante, el de la burbuja puntocom, en 2001, fue más difícil de pasar, pero ninguno se compara con la devastación que provocó una crisis de deuda como la de las hipotecas “subprimes”. Por lo demás, la caída en picada de los valores bancarios (es decir, de la cotización de sus acciones) no tiene por sí misma ninguna consecuencia seria, ya que solo afecta a quienes poseen estos valores. La sola caída no tiene el más mínimo efecto en la conducta de las operaciones de los bancos y, por lo tanto, no es por sí misma señal de que haya que “salvar a los bancos”. El hecho de que el BNP Paribas haya perdido un 50% en tres semanas es meramente anecdótico y solo preocupa a la dirección, que ve cómo su negocio pierde tanto valor en la bolsa que se convierte en un blanco atractivo para una OPA.

¿Mercados de valores o de deuda?

Una crisis financiera solo se vuelve realmente seria cuando llega a los mercados de deuda –llamados de manera errónea “mercados mayoristas de crédito” (1)–, en donde inicia una cadena de suspensión de

pagos que, con seguridad, llegará hasta los bancos, ya que son los principales acreedores. Ahí es cuando podemos empezar a entrar en pánico: los canales de crédito están afectados. Ante la crisis, los bancos reaccionan con la brutalidad simétrica de su flexibilidad durante el boom: así como prestaban a diestra y siniestra, cierran el chorro sin miramientos apenas perciben que la posibilidad de cobrar sus deudas es dudosa. Restringen entonces todas las líneas de financiamiento, cuya continuidad es vital para las empresas. Pero hay más: los bancos están unidos entre sí por relaciones de deuda-crédito de una densidad sin paralelo en el resto de la economía, de tal modo que la propagación de la suspensión de pagos en este grupo particular cobra proporciones nucleares con una rapidez inusitada.

En cuanto un banco entra en cesación de pagos, se materializa un riesgo sistémico, ya que esto puede generar por sí solo una reacción en cadena en todo el mercado interbancario y, luego, en todos los mercados mayoristas de crédito, incluso aunque se trate de una entidad no muy grande. Por ejemplo, aunque Lehman (2) era una entidad relativamente modesta, según el tamaño de su balance, todos sabemos lo que pasó (lo que hizo más daño no fueron sus dimensiones, sino el grado de interconexión). Aparte de la inflación, la forma más acabada de desastre económico es el riesgo sistémico, ya que, independientemente de las transmisiones a la economía de producción mediante los canales de crédito, los bancos son las instituciones

que guardan los fondos de las personas en general y las que manejan la infraestructura de pagos. Entonces, si el sistema bancario se va a pique (y el problema es que, por su nivel de interconexión, no se hunde por partes, sino en su conjunto) ya no va a haber efectivo en los cajeros, acceso a las cuentas propias, ni posibilidad de pagar con cheque: los que tengan una huerta volverán a trabajarla y los demás, al stock de fideos. Esto muestra a la perfección que las élites neoliberales están determinadas a ignorar las lecciones más claras y violentas de la realidad para alcanzar el mayor beneficio, determinadas a ignorar el desastre ambiental que se nos viene encima, así como el desastre financiero que está de vuelta. Lo que se está escribiendo hoy es lo mismo que se escribía hace doce años durante la crisis de las subprimes...

Burbujas infladas

Por el momento no estamos en ese punto. Bien, pero ¿cuánto tiempo falta para llegar? No por nada los anticipos de una crisis violenta florecían desde antes de la aparición del virus. En pocas palabras: la situación de las finanzas es la misma que en 2007, pero peor: desde ese entonces, los volúmenes de liquidez en los mercados no dejaron de crecer y las burbujas se inflaron como debían, ¡genial!; muchos balances bancarios no terminaron de deshacerse de las consecuencias de las subprimes (en Italia, en Alemania, etc.), lo que deja importantes puntos de fragilidad en el núcleo duro del señorío (en particular, el Deutsche Bank); el movimiento

de “consolidación” (recuperación, fusiones, etc.) que se dio en el sector bancario post-2008 dejó a los organismos reguladores sosteniendo instituciones financieras privadas aún más *too big to fail*.

En este sentido, la aberración de las tasas cero (o negativas) le agrega su cuota de encanto a la situación: las tasas cero son condición necesaria para que los mercados financieros puedan sostenerse (a duras penas)... pero los rendimientos para los inversores son míseros. Resulta que quieren que los sostengan y además sacar provecho: tiene que funcionar como fondo de pensión, pagar las jubilaciones capitalizadas y todo lo que ofrecen es un 1%, ¿cómo se hace? Y bueno, como siempre, haciendo malabares. En este caso, los malabares consisten, por un lado, en ir a buscar títulos de riesgo (los que ofrecen mayores rendimientos) y, por el otro, practicar de manera más intensiva el apalancamiento, el equivalente de los esteroides para la rentabilidad financiera. Ahora bien, los títulos de riesgo podrán ser más rentables, pero... son más riesgosos. En cuanto al apalancamiento, este consiste en tomar mucha deuda para financiar operaciones especulativas, claro está, suponiendo que estas van a resultar bien y que el dinero se devolverá sin problemas, pero ¿y si resultan mal? Si resultan mal, habrá suspensión de pagos, porque los activos adquiridos se colocan a menor valor que la deuda que permitió adquirirlos y el que tendrá que soportar esta cesación de pagos será el banco, ya que fue el que

amablemente propuso sus servicios para el apalancamiento (préstamo).

Hoy por hoy, la cuestión reside en saber cuántos agentes financieros serán incapaces de devolver ese dinero y, del otro lado, cuántos bancos se van a quedar esperando con las manos vacías y por qué montos. La respuesta depende, en gran parte, de cómo evolucione la coyuntura bursátil, el volumen de las pérdidas, el horizonte temporal en el que podrían recuperarse y la capacidad de los agentes especuladores para refinanciar sus déficits mientras tanto... Es decir que depende (sobre todo) de la buena voluntad de los bancos, teniendo en cuenta sus propios adelantos y la decisión que van a tomar en consecuencia: ya sea ver más allá de la fluctuación y otorgar los préstamos puente a quienes lo necesiten, ya sea, considerando el probable desarrollo de los acontecimientos, estimar que más vale detener los costos y hacerse cargo de las pérdidas antes de que todo se desplome (y, al detener los costos, llevar a que todo se desplome –la maravillosa lógica de las finanzas–).

En cuanto a la evolución de los acontecimientos, lo cierto es que el bebé está naciendo de nalgas. Las tensiones de liquidez van a aparecer en todas partes, no solo entre los agentes expuestos de las finanzas, sino también (¿y sobre todo?) entre los de la economía real, en todos los niveles: el de la actividad de proximidad, claro está, comercios y pymes, pero también el nivel “alto” de los intercambios internacionales. En las últimas cuatro décadas, la globalización consistió en un inmenso proceso de reestructuración de la división internacional del trabajo, con una redistribución geográfica de las especializaciones y las actividades, y con repolarizaciones regionales, como China, que se volvió subcontratista industrial del mundo. Pero ¿qué pasa si el subcontratista queda varado? Los ordenantes se quedan con sus órdenes bajo el brazo, con gastos comprometidos, pero nada para vender. El juego de repercusiones de uno en uno hace que el potencial de desorganización de la actividad mundial sea considerable.

Tensiones y liquidez

Y ahí, lo que realmente importa es la duración y la fluctuación. Mientras dure, las tesorerías van a estar sometidas a una dura prueba y todos sus pedidos de refinanciamiento van a recaer en el sistema bancario, que no va a estar demasiado feliz, ya que debe hacer frente a los pedidos provenientes del mercado de valores... y de los mercados de materias primas, sobre todo del petróleo, que está en su mejor momento. Como podía esperarse, las tensiones sobre la liquidez de los agentes no bancarios se traspasan a los bancos, donde se convierten en tensiones sobre la liquidez bancaria, y estos van a buscar una solución al instituto emisor, la última instancia de préstamo. Dicho de otro modo, los pedidos de refinanciamiento, que en un primer momento se concentran en el sistema bancario privado, se transfieren al banco central para una validación final.

Cuesta imaginar que este los rechace. Sin embargo, cuando se agote todo el margen de maniobra que pueden dar las tasas, solo le quedará tomar medidas cuantitativas: aumento del volumen de financiamiento, extensión de los vencimientos, flexibilización de los criterios de elegibilidad de los colaterales (3). En definitiva, poco a poco, van a ir perfilándose las medidas llamadas “no convencionales” que constituyeron el punto cúlmine de la crisis de las subprimes... Si la epidemia tiene la decencia de no durar demasiado y reducir un poco su escalonamiento geográfico a medida que pasa el tiempo, la crisis puede pasar sin hacer demasiado daño.

O no. Si bien, en teoría, el choque se puede absorber, este se da en una estructura financiera global muy degradada y estructuralmente inestable. Nadie conoce con el mapa de los compromisos de los bancos y nadie puede suponer que algunos de ellos no acumulen todo tipo de suspensión de pagos (especuladores apalancados en los mercados especulativos, agentes de la economía real), que pronto los pondrán en situación de iliquidez. No pasará mucho tiempo antes de que, en los mercados mayoristas de crédito, donde los bancos son muy activos, y en particular en ese espacio reservado, denominado “mercado interbancario”, comiencen a mirarse de reojo para evaluar el riesgo de crédito y, sobre todo, el riesgo de contrapartida de cada uno, es decir, para estimar con quién pueden negociar y con quién no.

Ahora bien, cuando hay sospecha, no hay cautela. Apenas un rumor levante sospechas sobre uno de ellos, como sucedió con Bear Stearns y Lehman, el desafortunado no va a poder escapar de la rentabilidad creciente de su miseria: le van a facturar el crédito más caro, le pedirán más colaterales para el ajuste de los márgenes, en resumen, ¡le van a hacer la vida cada vez más difícil cuando ya le estará siendo difícil! En el instante en que un interesado queda en el fuego cruzado de las sospechas, está frito: no hay duda de que se va a desplomar, ya que nada puede oponerse a una opinión polarizada fuera de control, que además se autoconfirma, ya que la reacción colectiva a una situación individual degradada tiene como efecto degradarla aún más (las maravillas de la lógica...).

Frente a un tsunami

Así empiezan las grandes catástrofes, como la de 2007. Es inútil sentir que estamos protegidos por una regulación que habría aprendido, en ese entonces, todas las lecciones necesarias para que no se repitiera. Esa muestra gratis de rereglamentación simbólica concedida tras la crisis de las subprimes no tiene ninguna capacidad para hacer frente al tsunami, si este llegara a producirse. Cabe recordar con qué experticia la “ley de separación bancaria” de Holanda no separó absolutamente nada (se trataba de dividir las bancas de inversión de las entidades de depósito), de modo que los depósitos del común de la gente siguen estando expuestos. Por su parte, los sueños de una “unión bancaria europea” se proponían sobre todo adornar las noches de los eurocreyentes, pero el fondo de garantía de los depósitos, instituido por la unión, alcanzó apenas unos miles de millones de euros, cuando los montos que debe garantizar rondan los millones de millones... Está todo bien encaminado...

¿Hacia un crack generalizado?

Hasta la actualidad, las crisis financieras se presentaban como hechos limitados a su esfera (la de los mercados, de los bancos, etc.). La situación actual tiene la peculiar e inédita característica de que la crisis financiera no está “aislada”, sino que se presenta como la metonimia de una multitud de crisis sectoriales sincronizadas: las crisis del neoliberalismo, en proceso de fusión-totalización, y el conjunto de la construcción en torno al síndrome chino. Hospitales, escuelas, investigación: al igual que sucede con las finanzas, el virus vendría a ser el golpe de gracia para estas instituciones que están tan debilitadas –por el neoliberalismo– que esta tensión extra las pone en peligro de derrumbe. Si llegara a producirse un coronacrack, no sería “simplemente” un crack financiero, sino uno generaliza-

do: todo estaba a punto de desmoronarse, ahora va a suceder.

Por supuesto, la institución que ofrece el espectáculo más conmovedor en el crack generalizado, antes que las finanzas, es el hospital. Allí es donde el neoliberalismo dio lo mejor de sí. La desorganización es completa, la racionalidad neomanagerial está en la cima de la irracionalidad y todo fue destruido sistemáticamente. Como lo explica un artículo de opinión de publicación reciente, el *bed management* –que, hasta hace poco, era el orgullo de Agnès Buzyn, ex ministra de Solidaridad y Salud de Francia– sometía la organización al criterio único de flujo tenso y de “ninguna cama libre”, al igual que una empresa lean busca no tener stock, ya que se preocupa por gestionar los flujos de enfermos (o sea, los enfermos son partículas de flujos) o de repuestos, da igual. Ahora bien, el *bed management* mostró todas sus virtudes: será lean pero es incapaz de amortiguar el menor golpe. Mucho antes de la aparición del virus, el mundo hospitalario venía anunciando a viva voz que estaba al borde del colapso. Imagínense después. Y no hay que hacerse ilusiones: el gobierno francés no va a tomar los tres mil millones del impuesto de solidaridad sobre la fortuna (ISF), ni parte de los diez mil millones del crédito impositivo para la competitividad y el empleo (CICE) para dárselos a los hospitales. Por el contrario, podemos apostar que, cuando la epidemia haya terminado y se hayan palmeado algunas espaldas frente a las cámaras, la agonía managerial va a retomar el mismo camino.

La inepta burocracia

El caso de la investigación es distinto, por supuesto, pero no por eso menos ilustrativo. Bruno Canard, especialista sobre coronavirus del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS) (4) cuenta sobre las bondades de la investigación “por proyectos”: no hay continuidad a largo plazo, está sometida a los avatares de los temas “atractivos” y a las fluctuaciones de la moda, y somete a los investigadores a la inepta burocracia de las convocatorias a proyectos. En resumen, la investigación sobre el coronavirus, que Canard había iniciado a comienzos de los años 2000, quedó freezeada y privada de financiamiento debido al cambio en las tendencias del glamour académico-institucional. En materia de investigación, por definición, nunca se sabe qué resultados habrá, cuándo y cómo, pero uno bien puede suponer que quince años de continuidad permitirían conocer un poco más. Al igual que con los hospitales, apenas se cierre el paréntesis, la destrucción managerial va a retomar su curso, es decir, van a poner todas las fichas para el coronavirus, pero se las van a sacar a otras investigaciones, cuya utilidad se hará evidente dentro de una década.

Bien distinto es lo que pasa en la escuela. Allí, en donde en tiempos de epidemia se enseña la profilaxis, los maestros se preguntan si no será mucho pedir que haya jabón y toallas de papel. Además, a pesar de la insistencia de los medios en el lavado de manos, no se consigue alcohol en gel; la mano invisible del mercado debe tener una artritis momentánea o la habrán convocado en otro lado. Mientras tanto, a riesgo de los que chicos portadores sanos distribuyan el virus de acá para allá, el gobierno se niega a cerrar las escuelas, y no porque sea importante mantener la vida social dentro de la mayor normalidad posible, sino porque lo que importa, sobre todo, es que los trabajadores no se muevan de sus puestos. Que estén o no expuestos, estén o no enfermos no es un problema. Acerca de esto, el ministro de Educación fran-

cés Jean-Michel Blanquier explicaba con sorna a los periodistas (que tienen el poder de reacción de una cámara de aire) que las escuelas se mantenían abiertas “para que las enfermeras puedan ir a atender a la gente”. Las enfermeras constituyen el 2% de la población activa, ¡bravo, ministro!

Coronacrack, el rey de los cracks

Fue el estado de destrucción generalizada lo que instaló, desde hace tiempo ya, las condiciones para un crack generalizado. Solo faltaba una sacudida, esta. Es probable que, como de costumbre, las finanzas se distingan por la amplitud de los daños, pero podría ser que esta vez no caigan solas, y todo el conjunto va a dar un buen espectáculo. Entre el escándalo de los candidatos a reanimación rechazados por falta de respiradores y un nuevo salvataje de los bancos tras doce años de intervalo, a la población no le van a faltar oportunidades para meditar sobre los beneficios de cuatro décadas neoliberales. Y también sobre los benefactores.

El coronavirus acusa, en todos los sentidos del término. Acusa –revela, señala– los efectos de las políticas neoliberales, sus efectos desorganizadores y su toxicidad general. También acusa, en el sentido más corriente del término, a quienes las implementaron y, en especial, a quienes las implementan hoy –sin juego de palabras– a tumba abierta. Ellos, que llevaron la ignominia política a niveles inéditos, van a tener su merecido. Es cierto que el coronavirus les da un poco de tiempo, porque la epidemia no disloca únicamente las instituciones, sino también las condiciones elementales de la política de combate que, como toda política, y aún más, supone la copresencia compacta de los cuerpos. Por suerte, esta dislocación no es más que un paréntesis. Pronto saldremos de ella, con la cabeza llena de recuerdos frescos y punzantes... Con la felicidad de recuperar el espacio público sin reservas... Y con todos esos nuevos lugares a donde ir a llevar la nota: sucursales bancarias, salas de mercados, ministerios de puertas aún vírgenes, medios de comunicación. Y la sede de la presidencia, por supuesto.

En este punto, es inevitable pensar en *La guerra de los mundos*, en la que terribles potencias extraterrestres saquean la humanidad y el planeta, resisten a las armas más sofisticadas, pero son vencidas por creaturas ínfimas que no dan señal de alto: microbios y virus, justamente. ¿Podrá ser que el coronavirus, con su poder acusador, su potencial de escándalo, sea el agente inesperado en la caída del monstruo? Coronacrack, el crack con corona, el rey de los cracks: ¿será que es tan general que puede extender su poder de destrucción hasta llevarse incluso a los destructores? ■

1. De manera errónea porque el crédito es una operación puramente *escritural*, realizada *ex nihilo* por los bancos, mientras que en los mercados (obligatorios) solo se intercambian títulos, cuya suscripción supone un ahorro previo.

2. Cuya quiebra precipitó la crisis financiera de 2008; véase “Cuando Wall Street se hizo socialista”, *Le Monde diplomatique*, edición chilena, octubre de 2008.

3. Se denomina “colaterales” a los títulos que los bancos privados llevan al banco central como garantía, en contrapartida de un refinanciamiento transitorio. Por lo general, el banco central solo acepta títulos de calidad superior (títulos soberanos triple A), pero en situación de crisis puede verse obligado a ampliar la gama a títulos de menor calidad.

4. Véase su artículo sobre el virus del Ébola, “Des treillis sous les blouses blanches”, *Le Monde diplomatique*, diciembre de 2014.

*Economista.

Otras epidemias en la historia

La peste de Marsella y el “dulce comercio”

por Alain Garrigou*

“El exponente más influyente de la doctrina del *doux commerce* fue Montesquieu. En la parte de *El espíritu de las leyes* que se ocupa de cuestiones económicas, afirma en el capítulo inicial: ‘es casi una regla general que dondequiera que los modos del hombre son amables (*mœurs douces*) hay comercio; y dondequiera que hay comercio, los modos de los hombres son amables.’”⁽¹⁾ En su ensayo sobre la manera en la que los pensadores modernos intentaban encontrar una solución a las guerras, Albert O. Hirschman ignora una curiosa ceguera: los pensadores no parecen darse cuenta de que el comercio no es necesariamente tan amable y dulce (*doux*) como dicen.

Su optimismo debería haberse visto moderado por los evidentes daños causados por el comercio, como la colonización bélica en espera de las crisis económicas. Y más aún, debería haberse moderado por las epidemias. Entre junio y octubre de 1720, mientras Charles de Secondat, barón de Montesquieu, tenía 31 años, la peste de Marsella acababa con un tercio de la población de la ciudad, la mitad de la de Tolón, y entre 90.000 y 120.000 personas sobre una población de 400.000 en la Provenza. ¿Cómo pudo Montesquieu, junto a otros, ignorar que el comercio provocaba sus propias catástrofes? No lo ignoraba del todo, sin embargo. En *Las Cartas persas*, redactadas durante la peste y publicadas al año siguiente, hacía alusión a una epidemia de la que cabe suponer, a pesar de la aproximación cronológica, que se trata de la peste negra de 1347-1349, que aniquiló a un tercio de la población europea: “No hace ni dos siglos que la más vergonzosa de todas las enfermedades se hizo sentir en Europa, en Asia y en África; en muy poco tiempo, hizo efectos prodigiosos: habría acabado con los hombres si hubiera continuado su progreso con la misma furia”. Al menos concebía lo peor de una extinción de la especie humana.

Si bien la peste de Marsella de 1720 resultó de menor alcance, fue igualmente importante en la historia de las epidemias. Comienza con un buque comercial, el Gran San Antonio, que unía el Levante (Siria, Líbano e Israel). Durante el viaje de regreso, murieron nueve personas a bordo. Tras una primera negativa a desembarcar en Marsella, el 25 de mayo de 1720, y un intento frustrado en Livorno, el barco fue puesto en cuarentena frente a la costa de Marsella, en la isla Jarre, destinada a los buques afectados por la peste. En el viejo puerto, se instaló una oficina de sanidad donde los capitanes de los barcos procedentes del Levante debían ir, en bote, para obtener el permiso de entrada al puerto. En el Líbano, en Sidón, el cónsul francés le expidió al barco una patente neta –que atestiguaba que había abandonado el puerto libre de enfermedades contagiosas– y luego el cónsul de Tiro, donde se embarcó otro cargamento, y el de Trípoli, donde el buque reparó un desperfecto. El capitán informó a la oficina de las muertes ocurridas durante la travesía. Tras la muerte de un marinero a bordo del Gran San Antonio, al cabo de dos días en Marsella, el cuerpo fue desembarcado, pero el médico no vio ningún signo de peste.

Después de haber enviado el barco a la isla Jarre, la oficina de sanidad revierte su decisión. Mientras que los fardos de algodón se envían a otro lugar del aislamiento, se autoriza la descarga de los productos preciosos, es decir, la seda. Unos días más

tarde, se permite el desembarco de todas las mercancías. Los fardos de algodón se distribuyen sucesivamente, en condiciones turbias. Y junto con las pulgas portadoras del bacilo de la peste. Los cargadores resultaron ser los primeros infectados. A partir de finales de junio, la epidemia estalla en pocos días, afectando a los viejos barrios y, luego, a los nuevos, antes de propagarse en la Provenza. Cruel ironía: en la ciudad de Beaucaire, la mercadería no se cobró víctimas gracias al cierre de la feria del 22 de julio. La peste dejó un trauma duradero en la población local. En lugar de escenas trágicas de cadáveres arrojados a la calle, fosas comunes y todos los horrores que derivan de estos dramas epidémicos, la memoria prefiere retener las imágenes positivas de héroes que se sacrifican por las víctimas, como el arzobispo Belzunce y el caballero Roze, homenajeados hoy con estatuas y calles que llevan sus nombres en la ciudad meridional. Toda la región fue confinada con el muro de la peste y el bloqueo de las tropas militares al norte.

Ocultan información

Evidentemente, la voluntad divina fue invocada como en todas las circunstancias, pero en el siglo XVIII, los poderes políticos no podían dejar que la providencia resolviera los asuntos públicos. La justicia asume el caso, y acusa al capitán del barco, Jean-Baptiste Chataud, y al primer corregidor, Jean-Baptiste Estelle: negociador y destinatario de una parte de las telas. El primero se defendió alegando que había obtenido las patentes obligatorias en Siria y que había informado, como correspondía, a la oficina de sanidad. El segundo, murió sin que se pudiera demostrar cierta presión de su parte para descargar los fardos contaminados. Aun sin contar con documentos escritos que lo demuestran, es innegable que los negociantes habían ejercido presión para recuperar su mercadería. Cuando el guardia de sanidad del barco murió, un día antes de que se levantara la cuarentena impuesta a la tripulación, el cirujano del puerto diagnosticó muerte por vejez. Además, el cuaderno de bitácora del capitán Chataud fue falsificado para registrar que las muertes acontecidas durante la travesía fueron causadas por envenenamiento alimenticio.

La existencia misma de un sistema de patentes en el Levante era bastante explícita en cuanto a la preocupación de organizar una lucha sanitaria, desde que la peste negra señalara al Levante como foco de las grandes epidemias. La organización de una administración de cuarentena en el puerto de Marsella era otro componente de esta lucha. Es cierto que la etiología de las enfermedades transmisibles estaba, entonces, en plena polémica entre contagionistas y anticontagionistas. (2) Los médicos François Chicoyneau y Jean Verny, de la Universidad de Montpellier, fueron enviados a Marsella por iniciativa del regente y de su médico Pierre Chirac, que sospechaba la peste. La epidemia de Marsella inició los primeros pasos hacia una comprensión científica de la enfermedad al atribuir la a insectos o gusanos, y, por ende, a agentes infinitamente pequeños. Se trataba de contacturas lanzadas por médicos que seguían de cerca la enfermedad, como los dos médicos de Lyon, Jean-Baptiste Bertrand y Jean-Baptiste Goiffon, quienes fueron los primeros en enunciarlas. (3) La hipótesis fue retomada por médicos de otros países, como el holandés Nicolas Hartboeker, que hablaba de “*insectos invisibles*”. Sin embargo, fue finalmente el pastor franco-suizo Alexandre Yersin quien identificó el bacilo e inventó la vacuna, en 1894, en Indochina. A pesar de la ignorancia, las respuestas políticas y médicas a la peste, no se desconocía su origen extranjero. Tampoco Montesquieu lo ignoraba.

En realidad, él había permanecido sensible a la amenaza puesto que volvía a ella en *El espíritu de las leyes*. Si bien era consciente del peligro que representaban las epidemias para la existencia misma de la humanidad, aun no las vinculaba con el comercio internacional. En una breve reseña histórica de las epidemias, evocaba causas sucesivas: las conquistas bizantinas, las cruzadas, para la peste negra; la conquista del Nuevo Mundo y la sed de oro, para la sífilis.

Una enfermedad

En este capítulo sobre las “*leyes que tienen relación con las enfermedades del clima*”, Montesquieu menciona las leyes y aborda la cuestión de las curas. Para la sífilis del siglo XVI, lamenta no haber recurrido a una

vieja legislación: “*Como incumbe a la sabiduría de los legisladores velar por la salud pública, lo acertado hubiera sido contener el contagio por medio de leyes semejantes a las mosaicas*”. La “ley mosaica”, afortunadamente olvidada, al menos en esas circunstancias, prohibía tocar a los leprosos. No obstante, flota una especie de optimismo en la materia que ya se había manifestado veinte años antes en *Las cartas persas*: “¿*Qué habría acontecido si el veneno se hubiera exaltado aun más? Y sin duda lo habría hecho si no hubiéramos sido lo suficientemente afortunados en encontrar una cura tan poderosa como la que hemos descubierto*”. ¿Qué cura? Eso no se menciona. Ahora bien, ¿será más preciso en *El espíritu de las leyes*? “*La peste es un mal cuyos estragos son aun más prestos, y más rápidos. Su asiento principal está en Egipto, de donde se propaga a todo el mundo. En la mayor parte de los estados de Europa existen muy buenos reglamentos para impedir su invasión; y en nuestros días, se ha imaginado un buen medio de detenerla: formar un cordón alrededor de los lugares infectados mediante tropas, para hacer imposible toda comunicación*”. La cuarentena, el confinamiento, e *in fine* la fuerza de las armas difícilmente alimenten el optimismo. Y si eso no es suficiente, todavía se puede apelar a la religión: “*Los turcos, que no toman medida alguna contra las epidemias, ven a los cristianos en la misma ciudad escapar del peligro, y solo ellos perecen*”.

En cualquier caso, el “dulce comercio” no se ha visto afectado a esto. En las epidemias del siglo XVIII, al igual que hoy, el comercio es una enfermedad para la cual no parece haber cura. Ni siquiera entre las mentes más brillantes, siempre tan agudas. Pero conocemos la causa de eso: la negación. ■

1. Albert O. Hirschman, *Las pasiones y los intereses*, (p.67), Fondo de Cultura Económica, México, 1980.

2. Cf. Jean Ehrard, “*Opinions médicales en France au XVIIIème siècle: la peste et l'idée de contagion*,” en *Annales. Économie, sociétés, civilisation* 12 :1, Armand Colin, París, 1957.

3. Cf. Jean-Baptiste Bertrand, *Observations faites sur la peste qui règne à présent à Marseille et dans la Provence*, André Laurens, impresor, Lion, 1721 y *Relation historique de la peste de Marseille en 1720*, Pierre Marteau, impresor, Colonia, 1721.

*Profesor emérito de ciencias políticas en la Universidad de Paris-Nanterre.



Michel Serre, Scène de la peste en 1720 à la Tourette

La crisis sanitaria abre una oportunidad de cambios

La salud pública, el día después

por André Grimaldi y Frédéric Pierru*

Todos los especialistas concuerdan: el confinamiento total es el precio por la falta de medios, en particular en los hospitales, debido a la incuria de los gobiernos que se sucedieron en los últimos treinta años. Ahora es el momento de aprender la lección y revisar de cabo a rabo la política sanitaria.

“Estamos en guerra”. El presidente de la República Emmanuel Macron lo repitió siete veces durante su solemne alocución del 16 de marzo de 2020. En guerra, ¿contra quién? Contra un virus que provoca una enfermedad benigna en aquellas y aquellos que no mata. Pero que, como es particularmente contagioso, puede matar a mucha gente y no solo a las personas mayores o vulnerables –a falta de vacunación-. De ahí las variaciones de la comunicación gubernamental.

En efecto, pasamos en pocas semanas, de mensajes tranquilizadores que apuntaban a proteger a las personas llamadas “de riesgo” a la movilización general que conmina a todas las personas a acudir lo antes posible a los refugios. La contradicción culminó la víspera de la primera vuelta de las elecciones municipales, cuando el primer ministro Édouard Philippe decidió el cierre inmediato de los bares y los restaurantes, comprometiendo al mismo tiempo a los ciudadanos a dirigirse al día siguiente a las mesas de votación. El “al mismo tiempo” macroniano se tornó en confusión. Provocó una abstención masiva justificada, que puso fin a la “mascarada”, en términos de Agnès Buzyn, decepcionada por su resultado electoral, tras su salida del ministerio de Salud. El “jefe de los ejércitos” se amparó entonces cautamente en el supuesto aviso emitido por expertos científicos, acusando a su vez a los malos franceses de “negligencia”. De donde surge una impresión de irrealidad, que acentúa el histrionismo de los discursos afectados y grandilocuentes del presidente.

Reviste mayor gravedad que esta guerra no debería ser la “prosecución de la actividad política con medios diferentes”,



María Inés Schmidt, Paisaje 2

según la expresión consagrada. Ella impone un vuelco total. En efecto, la epidemia reveló brutalmente la peligrosa inepticia de la política neoliberal que se mantuvo ininterrumpidamente desde el último cuarto del siglo XX y que Macron decidió profundizar, transformando al empleado en emprendedor autónomo y al usuario del servicio público en cliente. Como ministro de Economía que luego se postula para presidente de la República, él deseaba que cada vez más “jóvenes franceses tengan ganas de convertirse en millonarios (1)” y los exhortaba a que “ya no busquen un jefe, sino clientes (2)”.

Esa visión mercantilista dibuja la línea directriz de las políticas de salud que se aplicaron con asiduidad, desde la introducción de la tarificación de la actividad (T2A) para financiar los hospitales públicos, en 2004 (3). Se trata de poner a competir a estos últimos con clínicas comerciales, en un pseudo mercado administrado. El objetivo de cada establecimiento ya no es responder a necesidades sino “ganar partes de mercado”, aumentando la actividad financieramente “rentable”, mientras “se reducen los costos de producción”.

Catástrofe anunciada

Para garantizar el equilibrio contable, hay que aumentar las internaciones, y al mismo tiempo reducir su duración, cerrar camas (70 000 en diez años) y contener la masa salarial, congelando los salarios, restringiendo la cantidad de personal e imponiendo el “trabajo de flujo extendido”. Esta concepción ideológica, que reduce al hospital público a una cadena de producción o plataforma de aeropuerto, se justifica con el desarrollo de las actividades técnicas estandarizadas programadas, como la colocación de marcapasos o stents vasculares, la diálisis, coloscopia o cirugía ambulatoria, es decir, las actividades que privilegian las clínicas privadas.

Lamentablemente, desconoce la explosión del ingreso a las urgencias, consecuencia del crecimiento de los desiertos médicos en las zonas rurales y urbanas, así como el crecimiento de las enfermedades

crónicas; y hace caso omiso del retorno de las epidemias infecciosas, pese a las múltiples alertas de los últimos años.

A partir de 2008, el ajuste presupuestario público recayó principalmente sobre los hospitales, a los que se impuso, en diez años, 8000 millones de euros de ahorro y a los que se pide, además, para 2020, 600 millones de ahorro. La crisis de la epidemia de bronquiolitis en el otoño de 2019, durante la cual los especialistas en reanimación pediátrica debieron trasladar lactantes a más de 200 kilómetros de su domicilio parisino, a falta de camas y de personal, anunció la catástrofe. Pero no hizo vacilar a las autoridades políticas, apegadas a su visión financiera de la salud pública.

Fue pues necesario el Covid-19 para dar la razón al Colectivo Inter-Hospitales (CIH) y descalificar en pocas semanas el credo neoliberal: el salvaje ajuste presupuestario de los hospitales, la tarificación de la actividad, la gobernanza empresarial trasladada a la salud pública... El presidente Macron pareció descubrir repentinamente que la salud debía sustraerse a los mercados. Los “primeros de cordada” dieron espacio en sus discursos a los “héroes de delantal blanco”, aquellos y aquellas que desde hace meses reclaman el fin de la asfixia presupuestaria.

Pese a todo, para nuestros gobernantes no es cuestión de anunciar claramente un aumento salarial para el personal hospitalario no médico: en lo que respecta a los salarios de los enfermeros, Francia llega en la posición 28 entre 32 países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Por todo reconocimiento a los “héroes de delantal blanco” que carecen de mascarillas de protección, Gérald Darmanin se conformó con asegurar que “se les pagarán sus horas extras”. ¿Vaya generosidad del señor ministro de la acción y las cuentas públicas!

Su grosería hace temer que quienes priorizaron el beneficio a corto plazo por sobre la seguridad no hayan extraído las enseñanzas de esta epidemia; quienes aceptaron que los principios activos de

los medicamentos no se siguieran produciendo en Europa; quienes consideraron insensata la construcción de una empresa farmacéutica sin fines de lucro para producir los medicamentos genéricos y los dispositivos indispensables; quienes demostraron ser incapaces de proveer a demanda mascarillas y solución hidroalcohólica; los que trabajaron durante años en la demolición de los hospitales públicos; quienes acabaron con el carácter sagrado de la recaudación de la Seguridad Social (4) y sustrajeron de allí este año 2500 millones de euros, para financiar la exoneración de aportes y la reducción de la contribución social generalizada (CSG), implementadas a raíz del movimiento de los Chalecos Amarillos.

Gobernanza de hospitales

Habrà que hacer entonces el balance de esas irresponsables decisiones y poner la política de salud y medio ambiente en el centro del debate democrático. En efecto, el sistema de cuidados se encuentra al final de la cadena y debe gestionar las consecuencias sanitarias de las decisiones de política económica y presupuestaria que agudizan las desigualdades sociales y geográficas de la salud. Trece años de esperanza de vida separan a las franjas más favorecidas de las más carenciadas (5). El virus no elige a sus víctimas pero las crisis sanitaria, económica y social golpean a los más desfavorecidos.

“El día después”, nos promete el presidente, no será un retorno al día anterior. Esperamos que sea mejor, pero podría ser peor: igualmente liberal en lo económico, pero políticamente más autoritario. La política sanitaria será como un test: ¿salud negocio o salud pública?

El hospital público del mañana será altamente tecnológico, pero debería preservar su lugar de recurso médico y social, mantener su función de hospitalidad y permitir al mismo tiempo la innovación científica. Su financiamiento estaría pues mayormente garantizado por un presupuesto global que cambiaría en función de las necesidades definidas con los pro- →

→ fesionales y los representantes de los usuarios -y no accionando la calculadora de Bercy-. Personal de la salud y usuarios deberán participar en la “gobernanza” de los establecimientos. La aplicación de la regla de la “asistencia justa para el paciente al menor costo para la colectividad” sustituirá a la persecución de rentabilidad para cada establecimiento.

Va de suyo que habrá que abrir camas con personal formado allí donde sea necesario, es decir, en una etapa previa a la urgencia, para poner fin a las hospitalizaciones que se prolongan durante horas en camillas, y previa a la atención de los cuadros agudos, imposible, por razones médicas o sociales, que debe proseguir en el domicilio de las personas que la requieren. Los directores franceses están obsesionados por la reducción de un 30% de las camas, que conduce a “la puerta giratoria ambulatoria”. Alemania, por su parte, dispone de un 50% de camas de más y del doble de camas de reanimación por habitante.

Tanto en el ejercicio liberal de las profesiones de la salud como en la salud pública, la calidad de la asistencia se basa en el trabajo en equipo -médico y paramédico- con personal en número suficiente, formado y estable. Esto implica una coordinación estructurada entre los profesionales: ya sea de primeros auxilios (médicos generales del sector 2 y enfermeras liberales), especialistas, personal hospitalario o que ejerce en centros de seguimiento y rehabilitación o bien en el campo médicosocial, en residenciales para personas mayores dependientes (Ephad). Y esto requiere también la participación en los equipos de asistencia de “pacientes expertos” -esos pacientes que padecen enfermedades crónicas, que acumularon conocimientos, aprendieron a vivir con ello y pueden acompañar a otros enfermos. Toda esa calidad debe ser evaluada, en especial por los pares y por los pacientes. Lo cual es imposible, si no renunciamos al modelo anglosajón del “pago de la calidad” que conduce a cuidar los indicadores, más que a las personas.

Construir un servicio de medicina de proximidad se vuelve indispensable, con la posibilidad, para los profesionales que así lo deseen, de elegir trabajar en relación de dependencia, y la necesidad de restringir la libertad absoluta de instalación en el territorio nacional, en especial para los médicos que deciden ejercer en el sector 2, con honorarios que superan el reembolso de la Seguridad Social. En términos generales, habría que tener el coraje político de revisar decisiones que llevaron progresivamente a la desintegración del sector 1, vinculado a la Seguridad Social, mediante la revalorización de las remuneraciones de los médicos generales. La Seguridad Social, cuya socialización del gasto de salud no es compatible con la libertad de fijar los honorarios “según la cara del cliente”.

Los profesionales de la salud

Los enfermeros considerados de “práctica avanzada” a partir de la validación de la experiencia adquirida (VAE) deben multiplicarse y gozar de un estatuto y un reconocimiento salarial, tanto en el ejercicio liberal de la profesión como en salud pública. Esos enfermeros clínicos que trabajan en equipo con médicos podrían hacer el seguimiento de cierta cantidad de pacientes y adaptar sus tratamientos.

Francia se vanagloria de ocupar el tercer lugar mundial por los gastos de salud calculados en porcentaje del producto interno bruto. Pero cae al doceavo lugar al compararse el gasto con el número de habitantes (6). En 2018, según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), los gastos de salud en Alemania representaban 5847 dólares para Alemania, 4931 dólares en Francia. En comparación con países europeos similares, nuestra estructura de gasto se caracteriza por el escaso lugar otorgado a la prevención, la importancia de las desigualdades sociales y geográficas pese a la cobertura médica universal, la moderación de los ingresos de los profesionales de la salud (fuera del

sector privado) y los de primeros auxilios -que obliga a multiplicar los actos. Tendremos pues que llevar los salarios de los trabajadores de la salud al nivel promedio de los países de la OCDE, es decir, a más que la legítima reivindicación de 300 euros por mes para el personal no médico, que reclaman los colectivos y los sindicatos. Asimismo, habrá que proponer a los médicos generales una alternativa al pago por acto (25 euros por consulta) que se traduzca en consultas cortas pero frecuentes. Y por último, a la saturación de las citas médicas.

Finalmente, elaborar una verdadera política para mejorar la pertinencia de los actos y las prescripciones, supone la participación de todos los actores involucrados -desde las sociedades de expertos hasta las asociaciones de pacientes pasando por los docentes, los sindicatos de médicos y paramédicos, en colaboración con la Alta Autoridad de la Salud y la Seguridad Social.

El foco en las personas

Así podremos por fin pasar de un sistema centrado en la enfermedad y la atención médica a un sistema de salud centrado en la persona -lo cual incluye la prevención individual y colectiva. Porque el estado de salud de la población depende de determinantes sociales, como el acceso a la vivienda, la educación, la cohesión social, la calidad del ambiente físico, etc. Esto también implica una atención global, a la vez biomédica y psicosocial. El paciente ya no será un consumidor que hace libremente su comercio y el profesional un prestatario como cualquier otro, sino que uno y otro pasarán a ser los actores de un sistema solidario que se hace cargo de un 100% de una canasta de prevención y cuidados cuyos límites deberán fijarse tras un debate de democracia sanitaria.

Sin embargo, para confiar en que se pueda implementar un enfoque que trate a la salud como un “bien común” que escapa a la lógica de la ganancia y no debe ser estatizada ni privatizada, habrá que volver al espíritu “de los días felices” que presidió la creación de la Seguridad Social y la gran reforma

de la salud de 1958, que hizo entrar a la salud pública en la modernidad biomédica, con la creación de los centros hospitalarios universitarios (CHU) donde se articulan asistencia, investigación y formación (7).

La historia demuestra que los sistemas de salud solo conocen reformas de importancia en coyunturas sociales y políticas críticas. En el caso francés, ellas fueron la Revolución francesa, la salida de la segunda guerra mundial, la crisis de Argelia y el advenimiento de la Quinta República, o bien mayo-junio de 1968. El carácter inédito de la pandemia de Covid-19 puede brindar una oportunidad de este tipo. Mientras tanto, no podemos más que repetir las palabras que el doctor François Salachas, neurólogo del CHU-Pitié-Salpêtrière (París), dirigió a Macron, el 27 de febrero pasado: “Señor presidente, usted puede contar con nosotros. La recíproca está por demostrarse”. ■

1. *Les Échos*, 6-1-2015.

2. *L'Obs*, París, 12-1-2016.

3. Véase “Hôpital entreprise contre hôpital public”, *Le Monde diplomatique*, 9-2006 y “D'où vient la crise de l'hôpital”, *Le Monde diplomatique*, 10-2019.

4. La ley Veil de 1994 impulsó el reembolso total del lucro cesante a la Seguridad Social por las exoneraciones de aportes. Macron dejó de aplicarla desde 2019.

5. Nathalie Blanpain, “L'espérance de vie par niveau de vie”, serie de los documentos de trabajo de la Dirección de estadísticas demográficas y sociales, n° F1801, 2-2018.

6. “Statistiques de l'OCDE sur la santé 2019”, consultables en el sitio de la OCDE, www.oecd.org

7. Cf. Pierre-André Juven, Frédéric Pierru, Fanny Vincent, *La Casse du siècle. A propos des réformes de l'hôpital public*, Raisons d'Agir, París 2019 (accessible gratuitamente en el sitio del editor, en apoyo a los funcionarios de la salud pública).

*Profesor emérito del Centro hospitalario universitario Pitié Salpêtrière (París) y sociólogo, investigador del Centro nacional de investigación científica (CNRS) - Centro de estudios e investigaciones administrativas, políticas y sociales (CERAPS), Lille 2, respectivamente. Ambos codirigen el libro *Santé Urgence*, Odile Jacob, París, de próxima publicación.

En el Reino Unido, la tentación de lo “inevitable”

por Théo Bourgeron*

El 12 de marzo pasado, el primer ministro británico Boris Johnson anunció que iba a embarcar a su país en una apuesta un tanto arriesgada. En contraposición a la estrategia de confinamiento radical decretada por Italia y varios países asiáticos, el Reino Unido decidió “contener [...] pero no erradicar el virus” con el fin de “crear una inmunidad de grupo” en la población (1), lo que no contemplaba ni confinamiento de personas, ni cierre de escuelas, ni tampoco prohibición de grandes eventos, sobre todo de fútbol.

Sin conocer el nivel exacto de infecciones que se necesitaba para alcanzar la inmunidad de grupo (es decir, el porcentaje de personas que deberían contraer la infección para que el virus deje de propagarse), los expertos del gobierno de Johnson consideraron que, en el peor de los casos, se infectaría el 80% de la población británica. ¿La ventaja de esta estrategia? Una vez alcanzada esa cifra, el Reino Unido podría volver a prosperar en el comercio in-

ternacional sin tener que preocuparse por nuevos focos de contagio. ¿Su costo? Hasta 500.000 muertos (2). En tales circunstancias, el 12 de marzo, Boris Johnson admitió que “muchas familias perderán a sus seres queridos antes de tiempo”.

Cuatro días después, ante la presión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la opinión pública y de numerosos científicos, el primer ministro tuvo que ajustar su política. Finalmente, prohibió algunos encuentros deportivos, impuso el aislamiento para las personas con síntomas y esbozó la posibilidad de un endurecimiento progresivo de las medidas de distanciamiento social en función de la tasa de ocupación de las unidades de terapia intensiva del país, aunque sin cambiar radicalmente su plan de acción contra una epidemia que considera “inevitable”.

Desde un punto de vista científico, el enfoque que adoptó inicialmente el gobierno británico era, sin embargo, razonable. En lugar de tratar de erradicar la epidemia, se centraba en el control de la

propagación del virus en la población. Tenía por objetivo evitar una propagación anárquica limitando la infección a los grupos menos vulnerables y confinando a las personas de riesgo (gente mayor o con comorbilidades), para que estos últimos se beneficiaran de la inmunidad adquirida por los primeros.

Epidemia anual

Aunque solo los británicos se atrevieron a exponer su enfoque con tal desnudez, otros también han contemplado dicha posibilidad. El primer ministro neerlandés Mark Rutte no dijo nada distinto cuando explicó que esperaba que el 60% de la población de los Países Bajos se infectara (3). Los Estados Unidos también aplicaron de facto esta misma estrategia durante la primera fase de la epidemia. A pesar de que a mediados de marzo el virus responsable de la enfermedad, el SARS-CoV-2, ya circulaba en el territorio estadounidense y la gran mayoría de los casos aún no se correspondía con ningún foco identi-

ficado, el Estado federal solo adoptó medidas menores o simbólicas (tal como la suspensión de los vuelos desde países de riesgo), y dejó que cada estado federado, por no decir cada agencia de salud, se encargara de controlar el riesgo en un país en el que, además, alrededor de 27,5 millones de personas no tienen cobertura médica y un día de internación cuesta, en promedio, unos 3.800 euros. En Francia, hasta el 12 de marzo, día en que se anunció un endurecimiento de las medidas de distanciamiento social, la estrategia tampoco era radicalmente distinta.

Sin embargo, el enfoque británico refleja una visión neoliberal, de tendencia libertaria, del orden de las cosas. Patrick Vallance, ex presidente de investigación y desarrollo del gigante farmacéutico GlaxoSmithKline (GSK) y ahora asesor científico principal (*chief scientific adviser*) del gobierno británico, afirma que en un mundo “abierto” que se caracteriza por la existencia de sistemas de salud desiguales es inevitable que el coronavirus con-

tinúe circulando. Según Vallance, la epidemia está incluso destinada a volverse anual. Aunque es posible contenerla por completo a través de medidas drásticas al estilo chino, es inconcebible que un país como el Reino Unido soporte cuarentenas de más de unas pocas semanas y menos aún confinamientos largos y repetidos durante varios años consecutivos. El argumento de Patrick Vallance se basa en el concepto de “fatiga social” elaborado por el Behavioural Insights Team, también llamado “Nudge Unit”: una unidad de economía del comportamiento que creó David Cameron en 2014 dentro de la Oficina del Gabinete (Cabinet Office) con el objetivo de incorporar la psicología conductista en las grandes decisiones gubernamentales del país (4). Esta institución se vio fortalecida con la llegada a 10 Downing Street de Dominic Cummings, asesor especial de Boris Johnson, y él mismo ferviente admirador de la economía del comportamiento. Así, para el Reino Unido, las medidas de confinamiento estricto no son solo nocivas para la economía, sino también insostenibles socialmente a largo plazo. La victoria de los países asiáticos (China, Singapur, Hong Kong) sobre el SARS-CoV-2 mediante la prohibición de la circulación de personas sería una falsa impresión, ya que si los países restablecieran la circulación interna y externa de la población –apertura que los expertos británicos consideran como un principio ineludible de la organización de las sociedades–, aparecerían inmediatamente nuevos focos de infección que requerirían nuevas y costosas medidas de bloqueo. Algo que ya se está comprobando con la “importación” de nuevos casos chinos (5). Así pues, no hay alternativa: hay que dejar que el virus se propague, desacelerando al mismo tiempo su circulación.

Gestión “abierta”

El orden neoliberal emitió sus normas a través de sus instancias de coordinación internacional en materia de epidemias, a la cabeza de las cuales se encuentra la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al defender un enfoque global del problema, la institución promueve una gestión “abierta” de las propagaciones de virus: si por un lado apoya las medidas de cuarentena de ciudades y regiones adoptadas por los Estados de los países afectados, por el otro, rechaza el cierre de fronteras (descrito como contraproducente porque impide la trazabilidad de los enfermos y no es 100% eficaz) y los embargos de suministros médicos (que provocan comportamientos de pánico, los cuales a su vez conducen a un exceso de inventario en los países que están a la espera de la epidemia y a una penuria en los países ya afectados). En resumen, esta organización constituye el núcleo de un conjunto de normas multilaterales que tienen por objeto hacer frente a las epidemias en un mundo integrado por Estados que se supone que cooperan entre sí, aunque, en realidad, muchos de ellos –en especial los Estados Unidos– rechazan precisamente el orden del juego internacional multilateral heredado de los años 1990 y 2000.

Por ejemplo, ¿cómo es posible aplicar las normas de la OMS a un país como Irán que, al estar sometido a un embargo estadounidense, se ve obligado a comerciar con China para sobrevivir a pesar de la epidemia y cuyo derecho a recibir ayuda humanitaria está incluso puesto en cuestión? (6). Sin embargo, dejar que esta potencia regional de 81 millones de habitantes se convierta en un foco de COVID-19 es condenar a Europa y Asia a un constante resurgimiento de la infección.

La estrategia británica constituye una nueva etapa en los enfoques liberales de

las epidemias. Dicho plan –elaborado entre 2010 y 2017 a partir de varios informes del Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud (National Health Service, NHS)– cuenta con el apoyo no solo de investigadores en epidemiología matemática y médicos, sino también de psicólogos sociales y economistas del comportamiento, que formaron parte del Grupo Asesor del Marco de Preparación para una Gripe Pandémica (Pandemic influenza preparedness framework advisory group). Tomando como punto de partida las grandes pandemias gripales del siglo XX –desde la gripe española de 1918-1919 hasta la gripe porcina de 2009-2010–, el equipo británico ha constatado que resulta imposible contener una pandemia en un país como el Reino Unido, que mantiene vínculos económicos con el resto del mundo: “La circulación masiva de personas a escala global, propia del mundo moderno, hace que el virus se propague más rápidamente por todo el planeta. [...] Esto significa que es muy probable que no se pueda contener o erradicar un nuevo virus en su país de origen o en su llegada al Reino Unido. Es de esperar entonces que el virus se propague de manera inevitable y que todas las medidas tomadas para interrumpir o reducir su propagación [...] tengan probablemente un impacto muy limitado o parcial a nivel nacional y que ni siquiera se las pueda utilizar con fiabilidad como una forma de ‘ganar tiempo’” (7). Así pues, el gobierno británico no tiene otra opción que dejar que el virus se propague en la población tratando de “reducir los picos” de contagio y “asegurando una comunicación eficaz” que evite el pánico.

Superioridad occidental

La promulgación de este nuevo plan es un ejemplo de las estrategias sanitarias radicalmente individualistas que se elaboran dentro del corpus ideológico de las derechas en el poder, sobre todo del Reino Unido y Estados Unidos. En los últimos diez años, un gran número de analistas ha demostrado cómo el núcleo ideológico del partido conservador fue deslizándose desde la centroderecha hacia los *think tanks* de Tufton Street, que llevan el nombre de esta calle de Westminster donde se reúnen los “tanques de ideas” de la derecha radical, heredados de la era Thatcher y generalmente euroescépticos, negacionistas del cambio climático y libertarios. Mucho antes de la crisis del coronavirus, y pese al resurgimiento de epidemias de sarampión, estas instituciones recomendaban abandonar las políticas de vacunación obligatoria para las enfermedades infantiles. Algunas de ellas consideraban que la “inmunidad de grupo” adquirida por la vacunación optativa ya era bastante alta (8) y otras proponían reemplazarla por mecanismos mercantiles. El think tank liberal Adam Smith Institute, por ejemplo, planteaba como posibilidad pagarles a los padres por vacunar a sus hijos en nombre de la externalidad positiva, la cual sugiere que toda la sociedad se beneficia de la inmunidad sin asumir el costo total de la vacunación (9).

Durante la primera etapa del COVID-19 en China, varios columnistas liberales se regocijaron con la idea de que esta epidemia constituiría una demostración de la superioridad del sistema neoliberal occidental frente al autoritarismo chino. Así, en febrero, el periodista Brice Couturier afirmó en su columna radial de France Culture que veía en esta crisis “el Chernóbil de Xi Jinping”, el cual terminaría de destruir la credibilidad del Partido Comunista chino al igual que Chernóbil destruyó la credibilidad de la Unión Soviética (10). Para algunos analistas, la crisis ofrecía, de hecho, la posibilidad de realizar un

experimento de economía experimental a escala real. Para el grupo de control (China, Hong Kong, Singapur): soluciones estáticas clásicas como la cuarentena obligatoria y la interrupción de la circulación interna y externa de personas hasta erradicar el virus del territorio. Para el grupo de tratamiento (países occidentales, y en particular el Reino Unido): soluciones de *laissez-faire* organizadas por el Estado, sin cierres ni confinamientos, basadas en la canalización de los contagios hacia los grupos menos vulnerables. Al final del experimento, se habrían podido determinar, mediante análisis de regresión, las características de cada uno de estos dos modelos (por la cantidad de muertos, quiebras y puntos del PBI perdidos). Un experimento natural, desde luego, pero con un costo exorbitante: cientos de miles de muertos.

Finalmente, Londres parece haber dado marcha atrás. Sin embargo, las repuestas a la crisis del COVID-19 se ven limitadas por el agotamiento del sistema productivo (11). Tras haber puesto en práctica durante las últimas cuatro décadas el sistema de “stock cero” y de producción “justo a tiempo” con el objetivo de aumentar –arañando– el “rendimiento del capital empleado” y maximizar el “valor de los accionistas” (12), las empresas europeas se encuentran ahora desprovistas de recursos frente a la ruptura de las cadenas de suministro. Los Estados, sometidos al imperativo de la competencia fiscal, también aumentaron la presión sobre el gasto en los servicios públicos, la “optimización” de las camas disponibles en los hospitales, así como en los stocks estratégicos, de modo que Francia, por ejemplo, afrontó el brote de esta pandemia sin ningún stock de mascarillas de protección de tipo FFP2 en su territorio (13). ¿Los países que experimentaron el giro neoliberal de los años 1980 tienen acaso la capacidad económica de organizar una cuarentena como la de China o Singapur? Durante el discurso de Emmanuel Macron del 12 de marzo pasado, el pueblo francés no pudo evitar enojarse cuando escuchó al presidente poner al mismo nivel la protección de los más vulnerables y el apoyo a las empresas, pero esa es la realidad: para salir del neoliberalismo se necesitan más de quince días y, mientras tanto, la producción urgente de instalaciones médicas, medicamentos, barbijos, respiradores artificiales y alimentos que necesitan los habitantes solo cuenta con el apoyo de la infraestructura económica heredada de los últimos cuarenta años.

Sin embargo, esta pandemia también ha despertado la indignación de la población frente al inmenso sufrimiento que está padeciendo. Los cientos de miles de muertes que prevén los expertos de los países occidentales y “la pérdida de muchos seres queridos” que promete Boris Johnson son motivos suficientes para causar importantes disturbios. En China, como sabemos, el virus desató fuertes protestas: liberación de la palabra en Internet, barricadas en las rutas de Hubei y manifestaciones en Hong Kong contra la entrada de personas de China continental. De la misma manera que la libre circulación de mercancías provocó fuertes tensiones sociales en el Reino Unido durante el siglo XIX (14), la sensación de libre circulación del COVID-19 está provocando mucha preocupación en la población. Las encuestas recientes sobre el tema ponen de manifiesto este hecho: es la opinión pública la que está presionando a los gobiernos para que adopten medidas más radicales de distanciamiento social y no al revés. En el Reino Unido, mientras que el 41% de los británicos encuestados cree que el gobierno no está tomando medidas lo suficientemente fuertes, solo el 12% afirma lo contrario (15). En Francia, las políticas de

distanciamiento social, tales como el cierre de escuelas, contaron con un apoyo masivo de la población (el 82% de los encuestados se mostraron a favor), en tanto que la continuidad del transporte público fue la medida que, paradójicamente, tuvo la peor recepción de todas las que se anunciaron el 12 de marzo (16). Ante la implementación de nuevas estrategias de salud, es previsible, por lo tanto, que se produzcan movimientos de respuesta popular acordes con el sufrimiento padecido.

A los gobiernos no hay que darles más margen de maniobra del que ya tienen. En estos tiempos de crisis, se ven atrapados en el conflicto entre las estructuras productivas de sus países y el sufrimiento popular causado por la pandemia. Lo que se revela aquí, y que ya habíamos vislumbrado con la epidemia del sida, no son las elecciones políticas individuales, sino más bien el modo en que se trata un evento extremo –una pandemia– en un régimen de acumulación neoliberal. Ante la presión del pueblo, el gobierno de Johnson ya empezó a batirse en retirada, lo que demuestra que la estrategia británica para enfrentar el COVID-19 no es más que una estrategia. Pero si las estrategias no son todopoderosas, tampoco son elucubraciones: estas revelan cómo los intelectuales de un régimen buscan soluciones para salvar dicho régimen de sus propias contradicciones y crisis. Lo que no hacen es preguntarse si un régimen que requiere de soluciones tan inhumanas merece ser salvado. ■

1. “Coronavirus: science chief defends UK plan from criticism”, *The Guardian*, Londres, 13 de marzo de 2020.
2. “Johnson under fire as coronavirus enters dangerous phase”, *Financial Times*, Londres, 12 de marzo de 2020.
3. “Coronavirus: pas de confinement aux Pays-Bas, où le gouvernement prône ‘l’immunité de groupe’”, *France 3 Hauts de France*, 17 de marzo de 2020.
4. Tony Yates, “Why is the government relying on nudge theory to fight coronavirus?”, *The Guardian*, 13 de marzo de 2020. Véase también Laura Raim, “La nueva ciencia económica, peor que la anterior”, edición chilena *Le Monde diplomatique*, agosto de 2013.
5. Véase Shivani Singh y Winni Zhou, “China’s imported coronavirus cases rise as local infections drop again”, *Reuters*, 14 de marzo de 2020.
6. Véase Eli Clifton, “Amid coronavirus outbreak, Trump-aligned pressure group pushes to stop medicine sales to Iran”, *The Intercept*, 5 de marzo de 2020.
7. “UK Influenza Pandemic Preparedness Strategy 2011”, Department of Health, Londres, 2011.
8. Len Shackleton, “Compulsion is not the answer to the recent fall in vaccination uptake”, *Institute of Economic Affairs*, Londres, 9 de octubre de 2019.
9. Sam Bowman, “A neat solution to the vaccine problem”, *Adam Smith Institute*, Londres, 18 de febrero de 2015.
10. Brice Couturier, “L’épidémie de coronavirus peut-elle être le Tchernobyl de Xi Jinping?”, *Le Tour du Monde des Idées*, 10 de febrero de 2020.
11. Véase la columna de Cédric Durand y Razmig Keucheyan, “L’emboîtement de quatre crises met en lumière les limites des marchés”, *Le Monde*, 13 de marzo de 2020.
12. Frédéric Lordon, “La ‘création de valeur’ comme rhétorique et comme pratique. Généalogie et sociologie de la ‘valeur actionnaire’”, *L’Année de la régulation*, Vol. 4, pp. 115-164.
13. Clémentine Maligorne, “Coronavirus: la France ne parvient pas à répondre à la demande de masques de protection”, *Le Figaro*, 26 de febrero de 2020.
14. Karl Polanyi, *La Grande Transformation*, Paris, Gallimard, 1983 (reed.).
15. Toby Helm, “Only 36% of Britons trust Boris Johnson on coronavirus, polls find”, *The Guardian*, 14 de marzo de 2020.
16. Etude Elabe y Laurent Berger, encuesta realizada a través de Internet los días 12 y 13 de marzo de 2020 y publicada por BFM TV el 14 de marzo.

*Investigador postdoctoral en economía y sociología de la salud en la University College Dublin e investigador asociado en el laboratorio Instituciones y Dinámicas Históricas de la Economía y de la Sociedad (IDHES-Nanterre).

Traducción: Andrea Romero

Los recortes en el sistema de Reino Unido

Salud en baja

por Michael Marmot*

En materia de progreso social, el Reino Unido perdió diez años. La salud de los británicos, medida con la vara de la esperanza de vida, se degrada mientras que desde hace más de un siglo se habían acostumbrado a su mejoría año tras año. En forma paralela, las desigualdades en materia de salud se profundizan. Y lo que era cierto para Inglaterra lo es todavía más para Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Toda la sociedad se para cuando la salud de una población deja de progresar. Así, los datos acumulados a nivel mundial confirman que el estado de salud es un buen indicador de progreso económico y social. Una sociedad desarrollada tiende a lucir una salud floreciente. A la inversa, profundas disparidades económicas y sociales se traducen por desigualdades en la salud.

Determinantes sociales

La manera en que el sistema sanitario de un país es financiado y administrado evidentemente es crucial, pero la salud de sus habitantes no depende solamente de eso. En gran medida descansa en las condiciones de vida y de trabajo, la cobertura de la vejez, así como las desigualdades en el reparto del poder y de los recursos. Todos esos factores constituyen los determinantes sociales de la salud.

La esperanza de vida en Reino Unido, que no dejó de aumentar desde fines del siglo XIX, en 2011 inició un descenso espectacular. Entre 1981 y 2010 se prolongaba alrededor de un año cada cinco años y medio entre las mujeres, y cada cuatro años entre los hombres. Entre 2011 y 2018 esa progresión se frenó considerablemente: las mujeres solo ganan un año cada veintiocho, y los hombres uno cada quince.

Para este indicador, una clasificación de las regiones en función del índice de privación múltiple -que agrega datos sobre el ingreso, el empleo, la educación, la formación, la salud, las condiciones de vida... y que se acerca al índice de pobreza multidimensional utilizado, por ejemplo, por Naciones Unidas- revela la existencia de un gradiente social -una variación según los niveles sociales- tan fuerte como constante. En otras palabras, cuanto más desfavorecida es una región, tanto más baja es allí la esperanza de vida. Sobre el período 2016-2018, los hombres que residen en la parte del territorio británico que figura en el 10% más favorecido (el primer decil) vivían nueve años y medio más que aquellos que residen en la comprendida en el 10% menos favorecido (el último decil). Entre las mujeres, la diferencia era de 7,7 años. El gradiente social de la esperanza de vida en buena salud es todavía más marcado. El tiempo vivido en mala salud incluso se alargó entre 2009-2011 y 2015-2017, pasando de 15,8 a 16,2 años entre los hombres y de 18,7 a 19,4 años entre las mujeres. Por último, pese a la ausencia de estadísticas regulares a este respecto, las cifras disponibles sobre la incidencia del origen étnico indican que la mitad de las minorías -principalmente los afrodescendientes, los asiáticos y los mestizos- tienen una esperanza de vida sin incapacidad física claramente más baja que la de los británicos blancos.

Este deterioro general no tiene nada de fatalidad. En 2008, conmoviéndose por la amplitud de las desigualdades de salud en el país, el gobierno laborista de Gor-

don Brown nos encargó que formulemos proposiciones orientadas a reducirlas. Con mi equipo del futuro Instituto para la Equidad en materia de Salud, creado en 2011, formamos nueve grupos de trabajo que congregaban a más de ochenta especialistas que se dedicaron al examen de los datos disponibles. Luego se reunió una comisión de expertos para debatir sobre esos resultados.

Austeridad y deterioro

El desenlace de esas investigaciones fue la publicación, en 2010, de *Fair Society, Healthy Lives*, más conocido con el nombre de "Informe Marmot" (1). Aunque encargado por los laboristas, este informe recibió una buena acogida de la muy nueva coalición gubernamental, dirigida por los conservadores. Un sondeo llevado a cabo por la Royal Society for Public Health ante sus miembros y un panel de científicos también lo clasificó entre los tres más grandes éxitos del siglo XXI en materia de salud pública en Reino Unido, con la prohibición del tabaco en los lugares públicos y laborales y el establecimiento de la "tasa soda". No obstante, su demostración central, según la cual políticas públicas ambiciosas con destino a todas las edades de la vida podían actuar sobre los determinantes sociales de la salud y atenuar las desigualdades, quedó ampliamente ignorada.

En efecto, la austeridad presupuestaria se convirtió en la principal consigna del gobierno que llegó al poder en 2010 así como también del gabinete conservador electo en 2015. Los gastos públicos pasaron de 42% del Producto Interno Bruto en 2009-2010 a 35% en 2018-2019, todo con el pretexto de reactivar el crecimiento económico.

Los dirigentes británicos evidentemente habrían puesto el grito en el cielo si alguien hubiera sugerido que su verdadera intención era seguir empobreciendo a los desguarnecidos, al tiempo que permitían que el 1% de los más acomodados se siguiera enriqueciendo más y mejor después del breve intermedio de la crisis financiera mundial. Sin embargo, es exactamente el

efecto que produjeron sus políticas. Y ¿cómo asombrarse de eso? Las asignaciones familiares fueron amputadas en un 40%, los gastos públicos locales en un 31% en el decil del territorio menos favorecido (pero solamente en un 16% en el más favorecido), y los financiamientos dedicados a las últimas clases de la secundaria y a la enseñanza superior en un 12% por alumno (2).

Tal vez, los arquitectos de estas medidas pensaban que todas esas ayudas eran dinero tirado por la ventana, pero los hechos lo desmienten. En el nuevo estudio que hoy publicamos, diez años después del Informe Marmot (3), redactamos un estado de situación para cinco de las seis grandes recomendaciones formuladas por nuestro equipo en 2010: permitir que cada niño tenga el mejor comienzo posible en la vida; garantizar el acceso a la educación y a la formación continua; mejorar las condiciones de empleo y de trabajo; proporcionar a cualquiera los recursos necesarios para vivir en buena salud; desarrollar lugares de vida y barrios sustentables. Nuestra conclusión es que la austeridad tuvo consecuencias catastróficas en casi todos los determinantes sociales de la salud, agravando las desigualdades en ese campo.

Efectos perniciosos

Así, la pobreza infantil se incrementó, pasando -después de la integración del costo de la vivienda- de un 28% en el período 2009-2012 a un 31% en el 2015-2018. Cerca de un millar de guarderías y de estructuras de acogida de la primera infancia implicadas en el programa Sure Start, un programa gubernamental de apoyo a la primera infancia y a la parentalidad establecidos a escala local tuvieron que cerrar sus puertas a causa de los recortes en los gastos públicos locales. Una pérdida que el loable esfuerzo consentido en favor de los niños preescolarizados más grandes no basta para compensar. Sin embargo, no es un misterio que la primera infancia es una etapa crucial de la vida, donde se adquieren competencias determinantes para el futuro, competencias cognitivas, lingüísticas, sociales, emocionales y comportamentales. Un desarro-

llo satisfactorio del niño pequeño permite augurar buenos desempeños escolares, los que a su vez garantizan mejores oportunidades profesionales y condiciones de vida más saludables en la edad adulta.

En otro plano, la crisis de vivienda se traduce en una explosión del número de personas sin hogar, pero también en un aumento de la proporción de británicos que consagran a esa función más de un tercio de sus ingresos. Aunque esta alza atañe a todas las clases, se observa también allí, sin gran sorpresa, un fuerte gradiente social. En 2016-2017, el 38% de las familias situadas en el 10% más bajo de la escala de ingresos se encontraban en esa situación, contra el 28% diez años más tarde.

De una manera general, una parte cada vez más importante de la población no tiene ya los medios de mantenerse en buena salud y debe recurrir a los bancos de alimentos para poder comer. Los marginados se multiplican, con condiciones de vida miserables que casi no les ofrecen razones de esperar una mejoría.

Entre esos efectos perniciosos de la falta de compromiso del Estado, es difícil decir cuáles tienen más impacto en las desigualdades de salud, porque todos están correlacionados. El caso es que las palabras que escribíamos hace diez años en el Informe Marmot siguen siendo de actualidad: "Las desigualdades de salud podrían ser evitadas y fuertemente reducidas, en la medida en que se desprenden de desigualdades sociales que a su vez son evitables". ■

1. Michael Marmot, *Fair Society, Healthy Lives. The Marmot Review. Strategic Review of Health Inequalities in England Post-2010*, Institute of Health Equity, Londres, 2010.

2. Jack Britton, Christine Farquharson, Luke Sibbeta, *Annual Report on Education Spending in England*, The Institute for Fiscal Studies, Londres, 2019.

3. *Health Equity in England: The Marmot Review 10 Years On*, Institute of Health Equity, Londres, 2020, www.instituteoftheequity.org

*Director del Instituto para la Equidad en materia de Salud del University College de Londres (UCL). Una versión de este texto apareció en *British Medical Journal* en febrero de 2020. Traducción: Víctor Goldstein



Adriana Asenjo, Tijeras (xilografía), 2005

Chile y el camino a una Nueva Constitución

por Pamela Figueroa*

El pasado 23 de marzo, y en el contexto de la crisis sanitaria global a partir de la declaración de pandemia del COVID19, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, anunciaba el acuerdo de los principales partidos políticos para postergar la fecha del Plebiscito Nacional y con ello el cronograma electoral para dotar a Chile de una nueva Constitución Política. A partir de dicho acuerdo, el Congreso aprobó la nueva fecha del plebiscito para el 25 de octubre de 2020 y las elecciones convencionales para el 4 de abril de 2021. Este es un paso más en el largo camino que Chile ha recorrido para contar con un proceso democrático, participativo e institucional que dará paso a un nuevo texto constitucional.

El camino ha sido largo, pues la actual Constitución se originó bajo un régimen autoritario, cuando la convivencia nacional se había quebrado por el uso de la fuerza. La Constitución Política de 1980 buscaba institucionalizar un modelo político, económico y social que representaba a una élite que había llegado al poder rompiendo el sistema democrático. Entonces, el cuestionamiento a dicha Constitución se dio desde su instalación, por su origen autoritario. Fuerzas políticas y sociales de oposición denunciaron su ilegitimidad. El diseño constitucional no contemplaba un mecanismo de cambio total, y esta rigidez fue marcando límites al proceso de transición y al propio ejercicio democrático.

La presión de las fuerzas políticas de oposición llevaron a reformas constitucionales, siendo las más destacadas las de 1989, que permitieron la transición a la democracia, y las de 2005, que buscaban poner fin a los “enclaves autoritarios”. Sin embargo, a pesar de este camino de reformas, a partir de 2006 la movilización social, de estudiantes, de ambientalistas, de movimientos nuevos e inorgánicos que demandaban mayor justicia social, fueron poniendo al tope de sus demandas la necesidad de una nueva Constitución. El ciclo político a partir de 2005 se ve marcado por una creciente desconfianza hacia las principales instituciones del país, y un distanciamiento de las élites gobernantes con respecto a la ciudadanía. En este contexto, las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2013 pusieron énfasis en el debate constitucional, ya no sólo como un problema de las élites y del origen autoritario del texto constitucional; si no como la inminente necesidad de actualizar las instituciones políticas a la nueva realidad social del país.

El informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado en marzo de 2014, *Auditoría a La Democracia*, puso una alerta importante con respecto al cuestionamiento de la democracia en Chile. Los datos mostraban cómo la desafección se fue expresando en la disminución sostenida de la participación electoral (desde un 86% de participación electoral en las elecciones presidenciales de 1989, a un 44% en las elecciones presidenciales de 2013 en segunda vuelta). Los partidos políticos (15% de aprobación) y el Congreso (24% de aprobación) eran las instituciones con más bajo apoyo ciudadano, siendo instituciones como Carabineros las de mejor evaluación. Lo interesante, es que junto con la decepción de las



Alain Tergny, Hoja, 2012 (www.alaintergny.com)

instituciones y líderes políticos, la ciudadanía mostraba un alto interés por la realización de reformas políticas que permitieran profundizar la democracia.

Es así, que los resultados de la encuesta LAPOP de 2012 ya arrojaba datos interesantes con respecto a la actitud ciudadana frente al cambio constitucional. Ante la pregunta: “Últimamente se ha planteado una discusión respecto a la necesidad que se produzca en Chile una reforma a la Constitución para cambiar el funcionamiento político del país... ¿Cuán de acuerdo está usted con que se busque realizar una reforma constitucional?”, los resultados fueron 71% muy de acuerdo + acuerdo, 4% muy en desacuerdo + en desacuerdo, y un 25% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Frente a la pregunta “Suponga ahora que existen una o varias propuestas de reforma constitucional, ¿cuál cree que es la mejor forma para elegir entre dichas reformas?” un 89% señaló “que la ciudadanía decida votando a favor o en contra de dichos proyectos” y un 11% “que el Congreso, como representante de la sociedad, decida a favor/en contra de dichos proyectos”. La encuesta CEP de septiembre-octubre de 2013 incluyó la pregunta “¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la propuesta de Asamblea Constituyente?, y las respuestas fueron 44,7% a favor, 21,5% en desacuerdo, 31,0% no sabe, 2,8% no contesta. Por tanto la aparición de esta demanda a partir del 18 de octubre de 2019, sólo cristaliza en el espacio público una idea que ya estaba presente en el discurso y la demanda social desde al menos 2011.

El Proceso Constituyente impulsado por la presidenta Michelle Bachelet el año 2016, y en el que participaron más de 200.000 mil personas en una innovadora metodología de democracia deliberativa, no sólo ha sido el proceso participativo constitucional más amplio a nivel mundial, si no también el primer impulso institucional, democrático y participativo, que junto a la fuerza social expresada en octubre de 2019, delineó el camino al itinerario constitucional que hoy tenemos.

El 15 de noviembre, y como reacción a la movilización sostenida de cientos de miles

de chilenos en las calles, se logró el acuerdo político amplio requerido para destrabar los cerrojos constitucionales y dotar a la actual carta magna de un nuevo Capítulo XV, que incluye un itinerario para elaborar una nueva Constitución, y no sólo reformarla.

El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución consideró la convocatoria de un grupo de 14 expertos con representación política transversal, para elaborar el texto de reforma. Este texto debía redactarse bajo los márgenes del acuerdo político, debía ser una propuesta de unanimidad de los integrantes del grupo de expertos, y ser una reforma auto ejecutable. Esto daba un alto nivel de dificultad al trabajo, pero también la exigencia de construir acuerdos sólidos, necesarios para un escenario como el que vive Chile. En un período de dos semanas se emanó la propuesta de texto que luego fue aprobado por ambas cámaras en el Congreso.

La tramitación incluyó la participación de distintas organizaciones sociales y políticas, lo que fue dando mayor legitimidad al proceso, en medio de continuas protestas y movilizaciones. Quedó pendiente de esta propuesta de texto, generar mecanismos de inclusión para la Convención, los que se definieron en tres áreas: a) que la Convención fuese paritaria, b) que los pueblos indígenas contaran con escaños reservados, y c) que los independientes tuvieran condiciones viables de competir para ser miembros de la Convención. La mesa técnica acordó dejar este debate para la discusión parlamentaria, pues la UDI (Unión Demócrata Independiente) no dio la unanimidad para incluir estos aspectos en la reforma del capítulo XV. Fue así, que en marzo de 2020 y con votos de los partidos de oposición y de parlamentarios de Renovación Nacional, el Congreso aprobó en una jornada histórica, la paridad y la inclusión de independientes. Aún está en trámite... legislativo la definición de escaños reservados para los pueblos indígenas.

El texto aprobado establece un itinerario que considera tres momentos de participación ciudadana para la elaboración, deliberación y aprobación de un nuevo texto constitucional. Estos momentos son:

A. Plebiscito Nacional. En este plebiscito cada persona recibirá dos cédulas. La primera cédula contendrá la siguiente pregunta: “¿Quiere usted una Nueva Constitución?” Las alternativas de respuesta serán: Apruebo o Rechazo. La segunda cédula contendrá la pregunta: “¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?”. Habrá dos alternativas de respuesta: a) Convención Constitucional: integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente”, y b) Convención Mixta Constitucional: Integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarios en ejercicio. Para el plebiscito registrará el voto voluntario.

B. Si resulta ganadora la opción **APRUEBO**, se activa el siguiente paso del itinerario, que es la **elección de los CONVENCIONALES CONSTITUYENTES**, nombre que reciben los integrantes de la Convención (en cualquiera de los dos tipos de Convención). También, con los resultados del Plebiscito Nacional se sabrá qué tipo de órgano se elegirá. La elección de los Convencionales Constituyentes será con el mismo sistema electoral que se elige la Cámara de Diputados, y además será **PARITARIA** para el caso de la Convención Constitucional. Esto significa que el sistema electoral asegura paridad de sexos en el resultado, es decir, se elegirá la mitad mujeres y la hombres. Para la elección de Convencionales Constituyentes registrará el voto voluntario.

C. Finalmente, cuando los Convencionales Constituyentes hayan elaborado un texto constitucional, este texto de Nueva Constitución será sometido a la aprobación, o no, de la ciudadanía a través del **PLEBISCITO CONSTITUCIONAL**. Para este plebiscito constitucional ratificatorio registrará el voto obligatorio.

La Convención tendrá un plazo máximo de 12 meses para redactar y aprobar el texto que será sometido a la ratificación de la ciudadanía. Los Convencionales se darán su reglamento de funcionamiento, y deberán aprobar las normas de la propuesta de texto por dos tercios de los convencionales en ejercicio. Esto a partir de una “hoja en blanco”, expresión usada para explicar que los convencionales tendrán la posibilidad de proponer distintas versiones de texto, sin que la actual Constitución sea el texto de base. El desafío es entonces poner en debate las distintas visiones que la sociedad tiene y construir los acuerdos amplios requeridos para elaborar un texto constitucional que refleje a la actual sociedad chilena, y sobre todo, que permita que en adelante sean las mayorías democráticas las que vayan construyendo el futuro del país.

Si hay algo que ha desnudado la actual crisis sanitaria, es la enorme desigualdad que existe entre los chilenos, y con mayor fuerza aún, que la política, las instituciones públicas, y los derechos sociales serán la base para superar las injusticias que denuncia la sociedad chilena. Un mejor Chile es posible, por eso es tan importante reafirmar el Proceso Constituyente en este mundo de incertidumbres. ■

*Académica Universidad de Santiago de Chile Integrante Mesa Técnica por una Nueva Constitución.

Petrobras en manos de Jair Bolsonaro

En Brasil, privatización en aguas profundas

por Anne Vigna*

Nació con la premisa de ser “una empresa de petróleo nacional, pero de capital privado”, alcanzó el grado de mayor empresa latinoamericana y encauzó el sueño de Lula Da Silva de fomentar el desarrollo económico del país, pero ahora se la conoce como una de las más endeudadas del mundo. ¿Qué quedará del gigante Petrobras?

20.000 trabajadores movilizados, 130 fábricas, plataformas o refinerías bloqueadas... Hacia veinticinco años que el sector petrolero brasileño no vivía una huelga tan prolongada como la de febrero de 2020. Según Sérgio Borges Cordeiro, miembro de la dirección de la Federación Única de Petroleros (FUP) del Estado de Río de Janeiro, el movimiento se explica por la intención de los huelguistas de “alertar a la población” sobre una amenaza: “El gobierno desea privatizar Petrobras”. ¿Petrobras? El gigante brasileño del oro negro, la mayor empresa latinoamericana, nacida mixta, pero con el 75% en manos del Estado en 1995, contra el 50,2% en la actualidad.

Sin embargo, según el gobierno, la venta de Petrobras no está en su agenda. Cuando, en julio de 2019, el ministro de Economía Paulo Guedes anunció un “ambicioso” programa de ventas de empresas públicas, mencionó 17 sociedades, desde los servicios postales hasta los bancos, pasando por la lotería y la Casa de la Moneda (encargada de imprimir los billetes). La lista contenía incluso algunas “joyas”, como el mayor productor de electricidad de América Latina, Electrobras, o el puerto más grande de América Latina, situado en Santos, en el Estado de San Pablo. Pero Petrobras no estaba incluida...

Los trabajadores de la empresa ¿caso sufrían de paranoia? No completamente.



Juan Pablo Neira, Combustibles fósiles, 2020 (Gentileza Galería Bahía Utópica)

Si bien el nombre de la empresa no había sido mencionado, estaba en todas las mentes. Guedes jamás ocultó sus pretensiones respecto de ella y, un mes más tarde, confirmaba su “intención de privatizar la empresa” (1)... Ahora bien, el proyecto es impopular, y no únicamente en el seno de las Fuerzas Armadas (2): según una encuesta del Instituto Datafolha realizada en agosto de 2019, el 65% de los brasileños se opone a la privatización de Petrobras (contra el 27% que la desea). ¿Qué hacer cuando se planifica una operación que la población desapruaba? Negar que se piensa en ello: “La privatización de Petrobras no está en los planes del gobierno federal”, intentaba tranquilizar Salim Mattar, secretario especial de privatizaciones del Ministerio de Economía, en febrero de 2020.

Entonces, privatización ¿sí o no? Finalmente, la respuesta a esta pregunta importa poco, ya que, más allá de las declaraciones contradictorias del poder, la venta de la empresa de hecho comenzó. “Se parece a una privatización ‘por de-

partamento’, sector por sector. Por supuesto, la dirección prefiere el término de ‘estrategia de desinversión’”, explica Felipe Coutinho, presidente de la Asociación de Ingenieros de Petrobras (AEPET). ¿Las razones de este abordaje en pequeños pasos? En primer lugar, el tamaño de Petrobras, una joya que pocos bolsillos están en condiciones de regalarse. Pero, sobre todo, la necesidad de eludir el Congreso. “Vender la empresa de una sola vez implicaría su aprobación, necesaria para la privatización de toda empresa pública. Ahora bien, el gobierno no tiene mayoría de diputados ni de senadores.”

Utopías opuestas

Desmembrar al gigante petrolero como quien corta un salchichón no fue siempre el proyecto de Brasilia. La idea surgió en el seno del gobierno provisional de Michel Temer del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), en 2016, tras la destitución de la presidenta Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores (PT). Antes,

Petrobras desempeñaba un papel clave en el modo en que el Estado conducía la economía. Sobre todo, a partir del descubrimiento, en 2005, de gigantescos yacimientos enterrados 5.000 y 7.000 metros bajo el nivel del mar, bajo una capa de sal cuyo espesor puede alcanzar los 2.000 metros: las reservas del presal. Mientras Lula da Silva (PT) estaba en el poder (2003-2010), Brasilia veía en Petrobras el modo de fomentar el desarrollo económico del país: la inmensa riqueza petrolera debía, según él, permitir la creación de astilleros, estimular la investigación y el desarrollo, ver florecer las pequeñas industrias subcontratistas, crear miles de empleos. En síntesis, facilitar el progreso del país en el sector industrial. Por entonces, Petrobras asociaba la expansión de su producción de petróleo a la de sus refinerías: producción, transformación y distribución se pensaban como un todo.

La destitución de Rousseff, el 31 de agosto de 2016, constituyó un punto de inflexión. La nueva dirección de la empresa decidió concentrarse en la explotación de las reservas de la cuenca presalífera con vistas a obtener un margen de maniobra financiera, a riesgo de vender la mayoría de las llamadas actividades de “logística”. En 2017, el 70% de sus 34.000 estaciones de servicio (BR distribuidora) fueron puestas en venta. En 2019, el 90% del capital de *Transportadora Asociada de Gás* (TAG), su red de gasoductos de 4.500 kilómetros al norte del país, cayó en manos de la francesa Engie y de la empresa canadiense Caisse des Dépôts por el equivalente a 7.800 millones de euros. Petrobras puso fin al conjunto de sus actividades en el extranjero: en África (Nigeria, Angola, Gabón, Benín y Guinea Ecuatorial); en América Latina (Argentina, Uruguay, Chile, Colombia y Paraguay), donde se separó de sus actividades conjuntas con otras empresas en la exploración y distribución de petróleo; en Estados Unidos, finalmente, con la venta de la refinería Pasadena a Chevron por 509,7 millones de euros. A fines de febrero de 2020, el presidente de la Sociedad, Roberto Castello Branco, anunció la puesta en venta de su 51% del capital en Gaspetro, una red de distribución de gas de 10.000 kilómetros, comprometiéndose a vender, durante el año, ocho de las trece refinerías que Petrobras posee en Brasil. La compañía piensa también abandonar sus fábricas de fertilizantes nitrogenados, sus proyectos en petroquímica y biocombustibles y ceder sus explotaciones onshore (sobre la tierra) y offshore (en mar poco profundo). ¿Pero no hablen de “privatización”!

De la caña al petróleo crudo

La estrategia produjo algunos resultados: en enero de 2020, por primera vez en su historia, Petrobras superó la barrera de los 4 millones de barriles equivalentes de petróleo por día, un salto del 100% con respecto a 2012 (3). Según un informe de la agencia especializada en energía, *Rystad Energy* (4), Petrobras es

la empresa petrolera cuya producción más aumenta en el mundo. Así, a partir de 2030, podría convertirse en la primera compañía nacional en términos de producción, frente a la rusa Rosneft y la china PetroChina.

Sus ganancias en 2019 alcanzaron también un récord. En 2013, su volumen de negocios era de 50.000 millones y los beneficios de 4.700 millones de euros. En 2019, la primera cifra aumentó un 21%, la segunda... más del 130%, resultado que conjuga la venta de activos, el aumento de su producción y la reducción de costos. Ese mismo año, la masa salarial se redujo un 8,9% (con un total de 22.900 puestos de trabajo eliminados en 4 años), pero los dividendos de 2020 se anuncian en alza: 2.700 millones de euros, contra 1.600 en 2018...

A pesar de estas cifras seductoras William Nozaki, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos de Petróleo, Gas y Biocombustibles (INEEP), no festeja: "Petrobras está realizando una evolución inversa a la del resto del sector, ya sea privado o público. Mientras que las demás empresas buscan en general 'integrar' sus actividades, controlar el conjunto de la cadena de producción, la distribución, la venta y los productos derivados, en síntesis, estar presentes 'del pozo al surtidor', Petrobras se conforma actualmente con exportar petróleo crudo. Una renuncia tanto menos comprensible cuanto que poseía instalaciones que permitían no limitarse a la producción".

Consecuencia: desde 2016, Brasil incrementa sus exportaciones de petróleo crudo, con menor valor agregado, pero... importa más gasolina y diésel. Las exportaciones parten en su mayoría a China y la gasolina proviene en un 60% de Estados Unidos. De ahí el apodo poco halagüeño de "nueva colonia en el siglo XXI" que le puso la Asociación de Ingenieros de Petrobras (AEPET). Ayer, Brasil exportaba caña e importaba azúcar en polvo; actualmente exporta petróleo crudo e importa gasolina. Una lógica que resulta aún menos convincente en momentos que la cotización del barril de crudo se

derrumba, como consecuencia de la crisis del coronavirus.

Privatización estimulada

Petrobras justificó esta estrategia de desinversión con una deuda demasiado elevada, producto, según su dirección, de una mala gestión y de la corrupción, que salió a la luz a partir de 2014. En 2015, el endeudamiento de la compañía alcanzó los 100.000 millones de dólares para un volumen de negocios de 64.300 millones de euros: se la consideraba entonces una de las empresas más endeudadas del mundo. Para Adriano Pires, asesor del Centro Brasileño de Infraestructura (una agencia privada de consultores), la constatación es simple: "Petrobras fue destruida por el PT. Controlaron el precio en el surtidor, supuestamente para detener la inflación. Y obligaron a la empresa a construir refinerías en el noreste para crear artificialmente empleo. Por no hablar de la corrupción". En otras palabras, el intervencionismo del Estado y su intento de utilizar la gran empresa para garantizar el desarrollo del país la habría conducido a la ruina fomentando la prevaricación.

Profesor de economía política en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo y autor de un estudio sobre el tema (5), Gilberto Bercovici hace otra lectura de la situación: "La quiebra de Petrobras en un mito destinado a justificar su privatización". Recordando que una deuda no es necesariamente mala, desde el momento en que prepara la actividad del mañana, explica que la de Petrobras "resulta de una inversión de alrededor de 272.000 millones de euros entre 2009 y 2014 tendiente a dominar la tecnología de perforación en aguas muy profundas. No se debe en absoluto a la corrupción, tal como se quiso hacer creer. La deuda era importante, pero los proyectos rentables. Es lo que se observa hoy." En el mundo petrolero, Petrobras es considerada actualmente a la vanguardia en materia de explotación de los yacimientos *deep offshore* [a gran profundidad].

Pero la decisión de vender la empresa proviene menos del razonamiento económico que de una lectura ideológica del

mundo: el actual presidente de Petrobras fue designado por el Ministro de Economía, del que es amigo íntimo. Ambos se formaron en la Universidad de Chicago a fines de los años setenta. Monetaristas convencidos, los dos consideran que el Estado no puede competir con el mercado: defienden pues, de manera más o menos discreta, una aceleración de las privatizaciones. Y el actual jefe de Estado Jair Bolsonaro, los escucha. Su gobierno vendió tanto las acciones de Petrobras que poseía el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) como la Caja Económica (banco público), reduciendo pues su control al 50,2%, contra el 62,7% al llegar Bolsonaro al gobierno.

El mercado se asusta

Del mismo modo, tras el descubrimiento de las reservas petroleras presalíferas en 2005, Brasil las había subastado, reservando a Petrobras un "derecho de preferencia" frente a la competencia justificada por sus inversiones para descubrir el "botín". Petrobras había adquirido pues los principales bloques puestos en venta. Además de que el actual gobierno desea eliminar un dispositivo que considera un "privilegio" de Petrobras "frente a sus competidores" (6), multiplicó las subastas de las reservas. Así, según un relevamiento realizado por el instituto brasileño especializado INEEP, Exxon, Total y BP poseen hoy 11.600 y 4.000 millones de barriles de petróleo, respectivamente, para explotar en la cuenca presalífera. Deseoso de atraer a las multinacionales, Brasil redujo también su exigencia de contenido local -es decir, la obligación de que las empresas extranjeras utilicen herramientas y tecnologías provenientes de Brasil para explotar las reservas-.

Según la ideología imperante en Brasil, competencia y apertura favorecen la inversión sin que sea necesario imponer reglas: "Una regulación excesiva asusta al mercado -nos explica Décio Oddone, presidente de la Agencia Nacional de Petróleo (ANP), encargada de regular el mercado de la energía en Brasil-. Hago todo para abrir este sector a la competencia con el

fin de aumentar las inversiones que Petrobras ya no puede asumir."

La afirmación le causa gracia a William Nozaki: "Siempre se dice que el sector privado puede 'finalmente' invertir una vez que el público le deja lugar. Pero la historia nos enseña que las cosas no suceden así". En 1954, el presidente Getulio Vargas deseaba crear una "empresa de petróleo nacional, pero de capital privado". El capital privado no vino, poco interesado en la exploración petrolífera en un territorio tan inmenso. Ésa es la razón por la cual surgió la empresa pública Petrobras, que debió invertir, sola, durante 20 años, antes de descubrir sus primeros yacimientos.

Nada cambió en 1997, cuando el gobierno neoliberal de Fernando Henrique Cardoso puso fin al monopolio de Petrobras sobre los hidrocarburos del país: el sector privado no siempre reemplaza al público en la exploración... "Durante la década 1997-2007, continúa Nozaki, nadie asumió el riesgo, en el campo de la prospección en aguas profundas. Shell y Chevron estudiaron un tiempo la cuestión antes de dar marcha atrás, considerando que los riesgos eran demasiado grandes. Petrobras se lanzó pues sola".

En suma, al sector público la explotación costosa, al privado la explotación provechosa. ■

1. "Guedes retoma processo de privatização da Petrobras iniciado na gestão Temer", *Estado de SP*, San Pablo, agosto de 2019.

2. Véase Raúl Zibechi, "Que veulent les militaires brésiliens?", *Le Monde diplomatique*, Paris, febrero de 2019.

3. Agência nacional do petróleo.

4. *Ucube Research and Analysis*, Rystad Energy, noviembre de 2019.

5. Gilberto Bercovici, "A inconstitucionalidade do regime de desinvestimento de ativos das sociedades de economia mista", *Revista de direito, Associação dos advogados da caixa econômica federal (ADVOCEF)*, Brasília, 2019.

6. "Perda de preferência não incomoda Petrobras", *Valor econômico*, San Pablo, 21 de enero de 2020.

*Periodista, Rio de Janeiro

Traducción: Gustavo Recalde

Los Libros de la Radio que piensa



EDGARDO ENRIQUEZ FRØEDDEN
TESTIMONIO DE UN DESTIERRO
Jorge Gilbert Ceballos

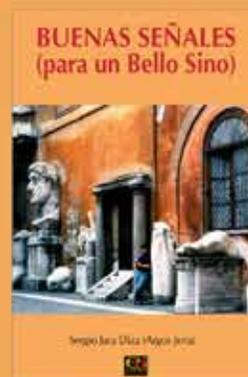
Ediciones Radio Universidad de Chile presenta el libro "Edgardo Enriquez Frøedden, testimonio de un destierro" de Jorge Gilbert.

Las transcripciones textuales a largas conversaciones entre el autor y Edgardo Enriquez, los silencios, los olvidos, nos invitan a vivir de manera íntima procesos históricos fundamentales sucedidos en el Chile previo a la dictadura.



CANTO UNIDO UN ENCUENTRO AMERICANO
David Spener

Un relato en profundidad de la vida de cuatro importantes artistas, sus historias, anécdotas y los testimonios de quienes les conocieron. Violeta Parra, enmarcada en el clima social de su época. Une al relato de la chilena, la historia de Woody Guthrie, músico estadounidense, que nos muestra notables coincidencias. Otro tanto sucede con Víctor Jara y Phil Ochs, personajes que llegan a conocerse durante el Gobierno de la Unidad Popular. Al igual que Guthrie y Violeta, el lector puede apreciar con claridad la similitud entre las miradas de Jara y Ochs sobre la realidad que les tocó vivir.



BUENAS SEÑALES (PARA UN BELLO SINO)
Sergio Jara (Argo Jera)

"Una vez iniciada, es difícil distraerse de la lectura de este conjunto de crónicas, que nos llevan por una ruta que cruza distintos ámbitos de la vida. La del autor, claro está, pero también la del lector. Reflexiones sobre política, amor, libros, música, amistad, viajes; mas recuerdos plagados de anécdotas que, sin embargo, trascienden con mucho lo meramente anecdótico...". "En más de algún pasaje, de pronto, inevitablemente se transportarán a momentos de la propia existencia, haciéndolos viajar hasta ese episodio vivido años ha, y que parecía irremediablemente olvidado...".



LA POLICÍA EN DEMOCRACIA
Sebastian Roché

Sebastián Roché ha recogido el fruto de varios años de trabajo de campo y múltiples estudios comparados para intentar comprender de mejor manera la relación entre la policía y el público. Los gobiernos de los países que no han sabido adaptar sus policías al giro democratizado, enfrentan con mayor dificultad su relación con la ciudadanía. El interés de este análisis para América Latina es evidente. Los sistemas policiales de Francia y Chile comparten una tradición jerárquica y centralizada de escasa transparencia. La policía es, ante todo, una institución al servicio de la comunidad.

102.5 FM

Adquiéralos en:
Miguel Claro 509
Providencia

ediciones
Radio Universidad de Chile

La herencia comunista continúa

Derecho al trabajo a la bielorrusa

Loïc Ramirez*, enviado especial

El sistema obligatorio de “distribución” de puestos de trabajo para los egresados universitarios bielorrusos, creado durante la era soviética, garantiza el acceso de la juventud al mercado laboral. Con fuerte impronta comunista, el gobierno de Alexandre Lukashenko conserva el culto por el “valor trabajo” y el odio al ocio.

Es un día caluroso en Novopolotsk. El sol pega sobre la inmensa plaza de la municipalidad. No hay árboles, ni un poco de sombra. A pocos metros se encuentra la bien llamada Calle de las Escuelas. En el número 5, la música se escapa por las ventanas entreabiertas. En el suelo, unas piedras pintadas de azul dibujan una clave de sol: es el Instituto de Música, en donde nos recibe Ksenia Kossaiña. “Bienvenidos a Novopolotsk, la única ciudad de Bielorrusia que no tiene estatuas de Lenin”, bromea la joven.

Esta antigua ciudad soviética –situada en el norte del país, cerca de la frontera entre Letonia y Rusia– se fundó en 1954 para acoger a las familias de los trabajadores del sector petroquímico. Hoy alberga la imponente refinería de la empresa estatal Naftan. En esta localidad de alrededor de cien mil habitantes, Kossaiña ha sido designada por dos años como profesora de piano: “Estudí en el Conservatorio de Minsk. Cuando terminé los cinco años de formación, quería trabajar en la capital, pero me enviaron aquí”.

Kossaiña se refiere al *raspredelenie*, que en ruso significa literalmente “distribución”: se trata de un sistema de asignación de puestos de trabajo que los universitarios deben realizar de manera obligatoria al finalizar sus estudios. Este dispositivo, que se creó en la época soviética y se mantuvo parcialmente luego de la independencia del país en 1991 responde, según el Artículo 83 del Código de Educación, a “la exigencia de protección social de los jóvenes graduados y a la satisfacción de la necesidad de especialistas, trabajadores y empleados en las ramas de la economía y la esfera social”. En 2018, 19.300 estudiantes hicieron el *raspredelenie*, es decir, alrededor del 60% de los graduados (exceptuando a los alumnos de estudios a distancia).

El principio es simple. Cada establecimiento de enseñanza superior abre para los egresados de la secundaria un determinado número de vacantes gratuitas (1) que se distribuyen en función de sus calificaciones: a los mejores promedios se les da prioridad. A cambio, cuando terminan sus estudios, el centro universitario les asigna un puesto de trabajo en algún lugar de Bielorrusia, donde deben trabajar durante dos años. Médicos, ingenieros, contadores, profesores, periodistas: ninguna profesión escapa al dispositivo.

Herencia soviética

Al garantizar un primer empleo a una parte de la juventud, Bielorrusia tomó una decisión que va a contracorriente de las recetas liberales que se aplican en el resto de Europa, donde los gobiernos pretenden luchar contra el desempleo de los jóvenes recortando sus salarios o flexibilizando sus contratos. Quizás los estudiantes franceses que en 2006 se opusieron al “Contrato de Primer Empleo”, que ampliaba el período de prueba a dos años para los menores de 26 años, le hubieran encontrado algunas ventajas al modelo bielorruso.

A menudo, por falta de conocimiento, Bielorrusia es objeto de burlas debido a su afición por las estatuas de Lenin y su excesiva devoción por el pasado. Además, las insti-

tuciones financieras internacionales consideran que su sector público está desbordado. Sin embargo, la preservación de ciertas conquistas sociales soviéticas ha contribuido a la longevidad en el poder del presidente Alexandre Lukashenko, quien gobierna el país con mano de hierro desde 1994. De la herencia comunista, el régimen de Lukashenko ha conservado también el culto por el “valor trabajo” y, por ende, el odio al ocio, que no es ajeno a su preocupación por encontrarle una ocupación útil a su población en edad laboral, sobre todo si es joven y potencialmente turbulenta.

Ola de privatizaciones

No es de extrañar pues que las autoridades presuman de los logros del *raspredelenie*. “La asignación obligatoria es ante todo una ventaja para los estudiantes –afirma Irina Starovóitova, viceministra de Educación, a quien visitamos en su oficina–. Por un lado, el Estado tiene la obligación de garantizarles un trabajo cuando terminan sus estudios. Por el otro, los estudiantes obtienen el título de ‘jóvenes especialistas’ y reciben por ello una bonificación como complemento de su salario.” Una apreciación a la que la mayoría de los jóvenes entrevistados no se ha opuesto. Algunos nos han confiado que tienen miedo de ser designados en lugares remotos, lejos de su familia y amigos, pero ninguno criticó el principio del dispositivo. “Este verano terminé mi asignación, pero creo que me voy a quedar acá el año que viene. Me acostumbré a este lugar”, dice Kossaiña, para quien este sistema obligatorio es, en última instancia, “algo bueno”: “Me ha permitido conseguir un trabajo y ganar experiencia muy rápido”.

La preservación de un sistema que les permite a los jóvenes insertarse en el mercado laboral pone de manifiesto la decisión que ha tomado la más rusa de las repúblicas soviéticas al conservar determinadas instituciones de su antigua economía planificada. Bielorrusia, que gozaba en aquel momento del más alto nivel de desarrollo humano (medido a través de tres dimensiones: ingresos, alfabetización y esperanza de vida) e industrial de la URSS, nunca fue un foco de resistencia al poder central de Moscú. En 1991, el país obtuvo su independencia casi de imprevisible, al ser arrastrado por la ola nacionalista que agitaba a los países vecinos (países bálticos, Ucrania). Luego se abrió un período de transición durante el cual el gobierno interino, a cargo de Stanislav Shushkévich, lanzó una primera ola de privatizaciones.

En 1994, para sorpresa de todos, las primeras elecciones presidenciales pusieron fin a dicha política liberal. Lukashenko fortaleció el Poder Ejecutivo y volvió a colocar al Estado en el centro de la vida económica. Hoy en día, las empresas públicas emplean al 50% de los trabajadores y generan el 60% de la producción nacional. Sin embargo, el gobierno también se preocupa por atraer inversiones extranjeras, sobre todo de Europa Occidental, para reducir su dependencia respecto de Rusia, que le provee a bajo precio los hidrocarburos que necesita su industria. A pesar de las recurrentes acusaciones de fraude, Lukashenko ha si-

do reelegido por quinta vez consecutiva en 2016, y por el momento ninguna ola de protestas acabó con su régimen, como sí sucedió del otro lado de la frontera, en Ucrania.

El gobierno tiene algunos argumentos sólidos para jactarse de los logros de este liberalismo sumamente regulado. El país está clasificado por las Naciones Unidas como uno de los Estados “con mayor nivel de desarrollo” y a mediados de 2010 registró tasas de crecimiento que rozaban el 10% y que, además, no provocaron un aumento excesivo de las desigualdades. Aunque el 6% de los habitantes vive bajo la línea de pobreza, este porcentaje es mucho menor que el de Polonia, su vecino más rico (17,6%). Los desempleados, por su parte, representan un 5% de la población activa (excluyendo a estudiantes y jubilados) (2). Este es el único indicador disponible para calcular la tasa de desempleo, ya que el Estado se resiste a reconocer esta categoría de “vagos”. “La gente debe trabajar –dijo el presidente durante una visita a los trabajadores de una empresa de productos lácteos del oeste del país, en agosto de 2017–. Si nosotros no les proporcionamos un trabajo socialmente útil, crearemos una categoría que no hará más que crecer. Algo que no nos podemos permitir” (3).

En el mundo privado

Para adaptarse a las leyes del mercado, el *raspredelenie* se ha ido atenuando con el paso de los años. Mientras que en la época de la URSS las asignaciones respondían únicamente a la demanda del colosal sector público, hoy también pueden realizarse en el sector privado si la empresa se declara “en demanda de personal” ante las autoridades. Tatiana Bojedomova, miembro del Departamento de Ideología, Cultura y Juventud de la Municipalidad de Bechankovitchy, es quien se encarga de las asignaciones de este pueblo de alrededor de seis mil habitantes. Cada año, a partir del mes de marzo, el Departamento determina cuánta mano de obra calificada necesitan las entidades públicas y las empresas privadas. “En mayo, tenemos que tener todo listo. Luego, enviamos los resultados a la capital regional, Vitebsk, que, a su vez, los envía a Minsk. De lo contrario, todos los médicos y profesores irían a Minsk, y nosotros también necesitamos profesionales aquí”, explica Tatiana. Para ella, el *raspredelenie* permite, ante todo, luchar contra la despoblación de las zonas rurales y las pequeñas ciudades.

“Cuando comienza el período de asignaciones, nos muestran los puestos disponibles, pero también nos dan la posibilidad de presentar un trabajo que nosotros mismos hemos encontrado”, explica Julia, estudiante en Minsk. Este es el camino que ha elegido Anna Korachova, que trabaja como responsable comercial en el grupo Altabel, una sociedad de servicios informáticos con sede en Minsk. “El sector privado paga mejor por lo general”, argumenta para explicar su elección. Además de su salario, la empresa le paga una bonificación de 220 rublos (100 dólares) para cubrir una parte de su alquiler. “Y no tienen derecho a despedirte durante la asignación”, agrega la joven. ¿Por qué un empleador decide contratar a “jóvenes especialistas” que no puede echar? “Porque sabe que estamos bien formados”, responde Korachova, sorprendida por la pregunta. La caída de la matrícula universitaria (de 430.000 en 2013 a 268.000 en 2019), debido a la llegada de las generaciones vacías (4) a la edad

universitaria, podría explicar la adhesión de las empresas privadas al dispositivo. Sin embargo, al Estado le resulta difícil a veces ubicar a los graduados en un puesto que se ajuste a su formación, sobre todo en ciencias humanas o físicas, ámbitos en los que, respectivamente, solo el 80,7% y el 76,8% de los universitarios encuentran una salida laboral relacionada con su especialidad (frente a un promedio de 88,4%).

Lejos de asignarle un destino particular a la juventud, el régimen de Lukashenko hace del trabajo un deber cívico para todos los ciudadanos, y el cimientamiento de la sociedad. Ya sea en las veredas de una gran ciudad o en el fondo de un camino rural, al caminar por las calles, en general impecables, no es raro encontrarse a ciudadanos, con chalecos amarillos, pintando una valla, desmalezando los canchales de un jardín público o barriendo un patio, sobre todo cuando se aproxima un acontecimiento especial o una celebración. “Como trabajadora del sector hospitalario, también estoy encargada, junto a otros colegas, del mantenimiento de un parque de la ciudad”, explica Lia Tarassevitch, una epidemióloga de unos veinte años que ha sido asignada al hospital de Bechankovitchy para recoger y analizar muestras de agua y alimentos en las escuelas.

Las empresas y las autoridades locales organizan varias veces al año un *subbotnik*: un sábado de trabajo colectivo. Asimismo, existe una jornada nacional, por lo general en primavera, en la que al presidente le gusta mostrarse labrando un campo, siguiendo la tradición del Komsomol (juventudes comunistas), que solía ayudar en la cosecha. Las construcciones de algunos edificios públicos, como la Biblioteca Nacional de Minsk, en 2003, o el complejo deportivo y cultural Minsk-Arena, en 2006 y 2008, fueron otra ocasión para poner en escena este tipo de iniciativa, en las que también participaron altos funcionarios (5).

Los ciudadanos parecen aceptar estos dispositivos que combinan el derecho al trabajo y el sentido cívico, aunque no con mucho entusiasmo. La lucha contra el ocio ha tomado hace poco un giro más represivo, al punto de exasperar a una parte del pueblo. A principios de 2017, miles de personas salieron a la calle para protestar contra un decreto presidencial que había sido adoptado en 2015 y que preveía una multa de alrededor de 200 dólares para aquellas personas que carecieran de un empleo formal durante más de seis meses. Luego de aceptar enmiendas y declarar que el objetivo era combatir el trabajo negro y las actividades exentas de impuestos (empresas de apuestas en línea, alquiler de departamentos, etc.), el gobierno, poco acostumbrado a las manifestaciones, dio finalmente marcha atrás y derogó el decreto. ■

1. El costo de la matrícula en las universidades de Bielorrusia oscila, en general, entre los 800 y los 1.200 euros por año.

2. “Labour and employment in the Republic of Belarus”, National Statistical Committee of the Republic of Belarus, Minsk, 2018.

3. “Working trip to Brest”, 11-8-17, disponible en: <http://president.gov.by>

4. Generaciones con menos miembros que los grupos de edad anteriores y posteriores. Esto puede deberse a guerras y/o a la reducción de la fertilidad.

5. Ronan Hervouet y Alexandre Kurilo, “Travailler ‘bénévolement’ pour la collectivité: les subbotniki en Biélorussie postsoviétique”, *Genèses*, N° 78, París, 2010.

*Periodista.

Traducción: Andrea Romero

Las polémicas indemnizaciones de la justicia estadounidense

Vidas más valiosas que otras

por Charlotte Recoquillon*

En mayo de 2011, cuando se mudó con su marido a un departamento recientemente renovado de Brooklyn, en Nueva York, Niki Hernández Adams estaba embarazada. Quince meses más tarde, un examen médico de rutina revelaba tasas de plomo tan elevadas en la sangre de su recién nacido que las consecuencias sobre su salud fueron irreversibles. La joven madre decidió entonces presentar una demanda contra el propietario de la vivienda, con el objeto de obtener una reparación mediante el pago de daños y perjuicios compensatorios (*compensatory damages*) (1).

Al término de una batalla judicial de cuatro años, el propietario fue declarado culpable (2). El tribunal debió entonces fijar la indemnización que recibiría la víctima. Para ello, los jueces y los jurados se apoyaron en los testimonios de expertos encargados, por el demandante por un lado y por el acusado por el otro, de evaluar el perjuicio económico padecido, el que incluía los eventuales gastos médicos o funerarios, los daños materiales, así como el lucro cesante debido a una herida, una discapacidad o un fallecimiento. Con el objetivo de respaldar sus estimaciones, los expertos tuvieron en cuenta criterios supuestamente objetivos: el salario de la víctima (o de su familia si se trata de un niño), la cantidad de años de actividad que aún debería tener, su esperanza de vida... De forma casi automática, las desigualdades existentes en la sociedad se trasladan al monto de los daños y perjuicios. Así, se propondrá una reparación menos importante a una mujer de la limpieza atropellada por un auto e impedida de trabajar durante tres meses que a un agente inmobiliario en la misma situación.

En el caso del hijo de la demandante, Hernández Adams, los abogados de la familia pidieron entre 2,5 y 4 millones de dólares, o sea, según sus estimaciones, la suma que la víctima habría podido ganar en el curso de su vida de no haber quedado discapacitada por una intoxicación por plomo. Los defensores del propietario hicieron otro cálculo. Siendo el niño de origen hispano, argumentaron que tenía pocas posibilidades de formarse académicamente y de llevar a cabo una carrera que le permitiera amasar semejante suma. Propusieron, en cambio, una reparación menos elevada: entre 1,5 y 2,5 millones de dólares. El abogado de la víctima replicó afirmando que “la población hispana tiene una mayor tendencia a alcanzar un nivel de educación superior al de sus padres”. El jurado zanjó finalmente por 1,9 millones de dólares, tras la exclusión categórica del criterio racial – poco habitual en los tribunales estadounidenses – por el juez Jack B. Weinstein. “La categoría ‘hispanos’ es demasiado general. [...] Hay profesores y también jardineros [...]. Por lo tanto, no pueden considerar al niño según la media de los hispanos, sino que deben tener en cuenta características específicas, como los diplomas de la madre, su lugar de residencia, su familia, etc.”, agregaron los jurados.

Así, la justicia autorizó la consideración del sexo y de la raza de una víctima, además de su nivel social, en el cálculo de los daños y perjuicios. En otras palabras, el perjuicio se equipara al estatus social, las mujeres y las minorías reciben menos que los hombres y los blancos. “Las desventajas que los negros y las mujeres padecen en Estados Unidos en términos de acceso al merca-



Juan Martínez Bengoechea, Hombre con pájaros, 2017 (www.juanmartinezbengoechea.com)

do de trabajo se reflejan en el monto de las indemnizaciones que reciben”, sintetizan los juristas Ronen Avraham y Kimberly Yuracko (3). En 2019, en Estados Unidos, el ingreso medio de las mujeres representaba el 82,3% del de los hombres; el de los hombres negros, el 74,9% del de los blancos (4), etc. Todos estos datos, recolectados por la administración, luego son transformados en cuadros que sirven de referencia a las estimaciones de los expertos, en particular cuando las víctimas son jóvenes y desprovistas de un historial de carrera.

El perjuicio se equipara al estatus social, las mujeres y las minorías reciben menos que los hombres y los blancos.

Como la mayoría de las negociaciones entre querellante y acusado tienen lugar a puerta cerrada, resulta difícil medir con precisión el peso de esos cuadros. Por otra parte, ocurre que la corte rechace el uso de los criterios de sexo y de raza, como ocurrió con el fondo de indemnización de las víctimas del 11 de Septiembre que, bajo la presión de representantes y de asociaciones, finalmente escogió apoyarse en los cuadros masculinos y blancos – los más favorables – para todas las víctimas. “La práctica [de discriminar según el sexo y el origen étnico] es corriente, pero no sistemática”, nos explica Martha Chamallas, profesora de Derecho en Ohio y autora, a partir de 1994, de los primeros trabajos sobre el tema. En 2009, el 92% de los expertos interrogados por la Asociación Nacional de Peritos Judiciales (National Academy of Forensic Engineers, NAFE) declaraban tener en cuenta el género de la víctima, y el 44,1% su raza (5).

“Si usted me pregunta si las discriminaciones raciales son corrientes en el sis-

tema judicial, le diré que sí, que son omnipresentes”, dice por su parte Lee Merritt. Este abogado, militante en el seno del movimiento Black Lives Matter (“Las Vidas Negras Importan”), compara dos casos recientes. “En julio de 2017 Justine Damond, una profesora de yoga australiana y blanca, fue asesinada por un policía negro en Minneapolis. Como empleador del policía, la ciudad de Mineápolis concedió a la familia de la víctima, en mayo de 2019, una indemnización récord de 20 millones de dólares”. En el mismo momento, Merritt defendía a la familia de Jordan Edwards, un adolescente negro muerto por un policía blanco de Dallas en abril de 2017. Reconocido culpable, el agente fue condenado a una pena de quince años de prisión. Pero la ciudad, en cambio, sigue rechazando toda forma de indemnización.

Doble pena

La consideración de los criterios de medio social, de raza o de sexo equivale a una forma de doble pena. Las familias pobres, entre las cuales las minorías están sobrerrepresentadas, corren más riesgos por ejemplo de padecer una exposición al plomo que las parejas acomodadas: están más restringidas en la elección de su barrio y de su vivienda, y las actividades contaminantes se instalan con más frecuencia en territorios de sectores populares, donde el poder político (y en consecuencia el poder de oposición) de los habitantes es más débil... Luego, en caso de intoxicación, son peor indemnizadas. Avraham y Yuracko estiman incluso que la consideración de los cuadros demográficos en el cálculo de los daños y perjuicios podrían incitar a las empresas a concentrar los riesgos en los barrios no blancos y pobres. Para respaldar su hipótesis presentan el caso (ficticio) de una empresa de entregas a domicilio, PhedEx, que tendría todo el interés en incitar a sus choferes a circular más despacio en los barrios blancos – puesto que allí las penalidades financieras en caso de accidente son más elevadas – y que, con el objeto de efectuar sus trayectos más rápidamente, privilegiaría por lo tanto los itinerarios que atraviesan los barrios negros, aumentando al mismo tiempo los perjuicios y el peligro.

Tan corrientes como discretas, esas prácticas discriminatorias recientemente

te ganaron visibilidad. En 2016, los senadores demócratas Cory Booker y Kirsten Gillibrand presentaron un proyecto de ley, el Fair Calculation Act, cuyo objetivo era prohibir el uso de los criterios de raza y de género a nivel federal. Pero el texto nunca fue adoptado. Los movimientos Black Lives Matter y #MeToo ampliaron la impugnación de esas prácticas discriminatorias, denunciando las desigualdades socioeconómicas que fundan las desigualdades de indemnización.

En abril de 2019, dieciséis organizaciones de defensa de los derechos cívicos dirigieron una carta abierta a la NAFE pidiéndole que condene públicamente la consideración de los datos sobre la raza y el género en el cálculo de las indemnizaciones por perjuicio moral o físico. Recibieron un rechazo categórico. En el plano legislativo, California se convirtió en julio de 2019, en el tercer estado que prohíbe esta práctica, después de Carolina del Norte y Nueva Jersey. A nivel federal, un nuevo proyecto de ley está en estudio en el Congreso desde septiembre. Si bien no tiene ninguna posibilidad de ser votado por el Senado – donde los republicanos son mayoría –, da testimonio de tímidos avances en el debate público. Pero raras son las voces que predicán el abandono del criterio social. Está admitido que, si dos adolescentes mueren en un mismo accidente de auto, sus familias pueden ser indemnizadas de manera diferente, según su oficio o su nivel de estudios. ■

1. Estos daños y perjuicios se distinguen de las multas que pueden ser infligidas a los autores de crímenes y de delitos.

2. GMM vs. Kimpson, N° 13-CV-5059, 30-7-15. También Kim Soffen, “In one corner of the law, minorities and women are often valued less”, *The Washington Post*, 25-10-16.

3. Ronen Avraham y Kimberly A. Yuracko, “Torts and discrimination”, *Ohio State Law Journal*, Vol. 78, N° 3, Columbus, 2017.

4. “Median usual weekly earnings of full time wage and salary workers”, Bureau of Labor Statistics, United States Department of Labor, Washington, DC, octubre de 2019.

5. Michael Brookshire, Michael R. Luthy y Frank Slesnick, “A 2009 survey of forensic economists: Their methods, estimates, and perspectives”, *Journal of Forensic Economics*, Vol. 21, N° 1, Mount Union (Iowa), diciembre de 2009.

*Periodista.

Traducción: Andrea Romero

Un desarrollo muy desigual

Marruecos: un callejón sin salida

por Pierre Puchot*, enviado especial

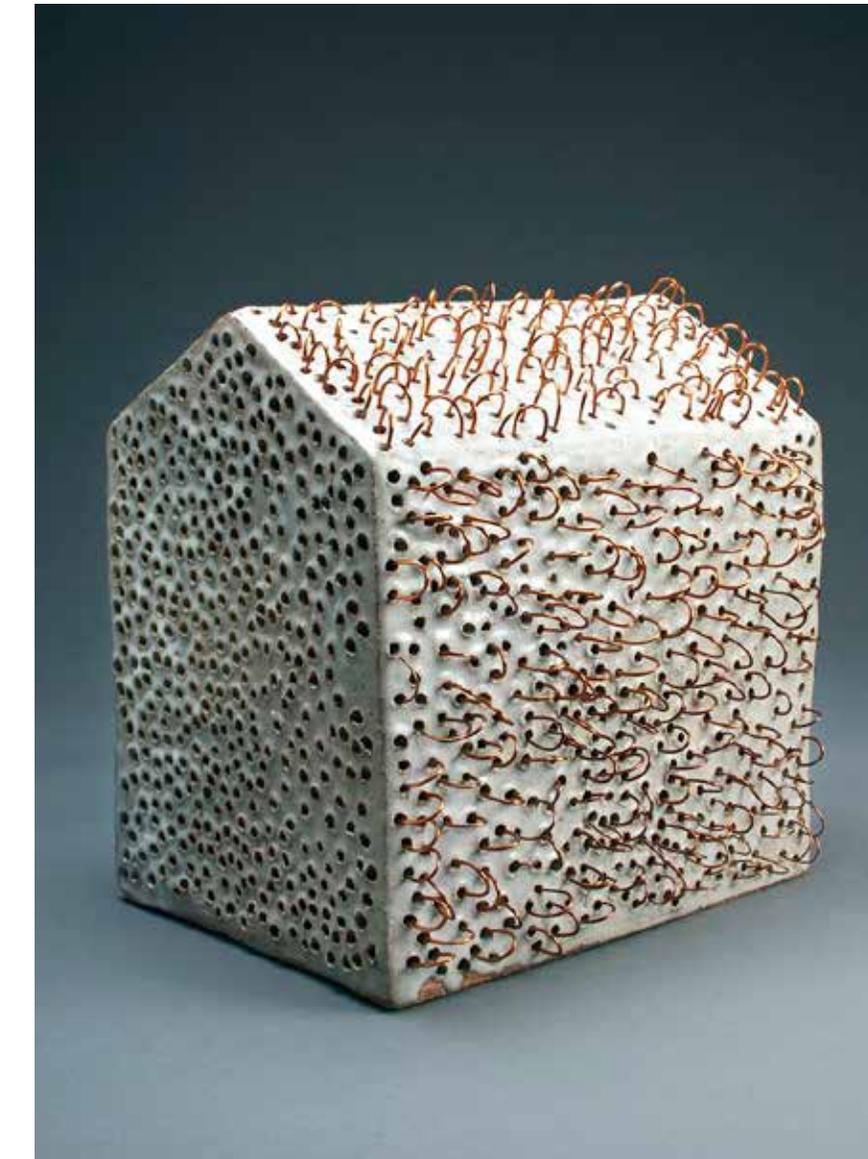
La primera impresión acerca de Marruecos es engañosa, el crecimiento del PBI, la reducción del desempleo y la realización de grandes obras de infraestructura esconden la persistencia de grandes desigualdades y de un sistema de salud y educativo totalmente devastado. Tras veinte años de reinado, el propio Mohamed VI reconoce los límites del modelo que desarrolló.

¿Hacia dónde va Marruecos? Nadie conoce la respuesta a esta pregunta. Ni siquiera el rey Mohamed VI, quien reconoció oficialmente los límites de un modelo que, sin embargo, había asegurado en 1999 el pasaje del régimen del difunto Hasán II, su padre, al suyo (1). “El deber de claridad y de objetividad impone matizar [el] balance positivo, en la medida en que, desafortunadamente, los progresos y las realizaciones ya logrados no han tenido aún las repercusiones suficientes sobre el conjunto de la sociedad”, repetía una vez más el soberano en la víspera de la fiesta del trono, en julio de 2019 (2).

Este modelo es el de una monarquía omnipotente que asegura la promoción de una economía ultra liberal a través de los organismos públicos para la realización de proyectos espectaculares: la línea ferroviaria de gran velocidad (LGV) Casablanca-Tánger, la zona económica e industrial del Puerto Tanger Med, el Teatro Mohamed VI en Casablanca, nuevas autopistas, etc. Grandes proyectos que, ciertamente, seducen a nivel internacional, y que le permitieron al rey llegar a los 20 años de reinado sin que la prensa, incluso la francesa, manchara su imagen. Desde París o desde la ciudad de Rabat, el país sigue pareciendo un águila que (¡sin petróleo!) alcanza las cimas de la economía africana y se integra sin dificultad a las cadenas de valor mundiales, convirtiéndose, por ejemplo, en un productor de peso en los sectores del automóvil y la aeronáutica (3).

Detrás de la vidriera

Pero en Marruecos las ilusiones se evaporan como las capas freáticas bajo la doble sangría del turismo de masa y de la agricultura intensiva. En la estela del discurso pronunciado por el palacio, la teoría del goteo cedió su lugar a la crítica autorizada de una distribución insuficiente de la riqueza. En sus últimos informes, el Tribunal de Cuentas, el Banco Central y el Con-



Ximena Ducci, Casa perforada (Cerámica de Gres y cobre)

sejo Económico, Social y Ambiental (CESE) alertaron sobre los problemas estructurales del país.

En apariencia, todo va bien: se prevé un crecimiento anual del Producto Bruto Interno (PBI) del 3,5% para el 2020 (4), el índice de los precios al consumidor es de +0,6%, la tasa de desempleo fue del 9,2% en 2019 (9,8% en 2018) (5). A fines de octubre, ante un público nutrido de representantes internacionales (Alemania, Suiza, Banco Mundial, etc.), el primer ministro Saadeddine Othmani posaba con una sonrisa plena ante una inmensa torta adornada con una cifra: “53”, la posición de Marruecos en el ranking “Doing business” -o “índice de facilidad para hacer negocios”- 2020, establecido cada año por el Banco Mundial. El reino escaló siete puestos en esa clasificación (6).

Sin embargo, sólo una minoría tiene la suerte de recibir una parte de la torta. El Marruecos de Mohamed VI cambia de aspecto en cuanto se evocan los índices más importantes: una compilación de todos los factores que revelan el estado de una sociedad, el índice de desarrollo humano (IDH) establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) no miente: en 2019 (7), el país se ubicaba en el puesto 121 en la categoría “desarrollo humano medio”, muy por debajo de Argelia (82) y Túnez (97), que figuraban ambos en la categoría “desarrollo humano alto”. Motivo de irritación para la élite marroquí que, al elogiar los méritos

del reino, suele insistir sobre las situaciones conflictivas de sus vecinos.

El puesto 121 traduce una realidad muy cruda. “Un 10% de los ciudadanos se encuentra en situación de pobreza extrema, total”, explica Taieb Aisse, especialista en desarrollo territorial que colabora con el gobierno actual, dominado por el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD, con referencial islámico). “Es decir que no tienen nada. Ningún ingreso. ¡Es muy peligroso!”. Además de esta miseria absoluta, la clase media sufre también la brecha abismal entre lo que aquí se llama la “vidriera” y el país real.

Esconder la pobreza

Esta vidriera es bien visible cuando nos desplazamos hacia el norte del país. La estación Casa Voyageurs es tan luminosa como las de Rabat o Tánger. Pero, a través de las ventanillas del tren de gran velocidad (TGV) -lleno en sus tres cuartas partes- que circula a 314 kilómetros por hora a lo largo del océano, percibimos, desde los primeros minutos, vastas extensiones de tierra con viviendas de chapa, de hormigón o de cemento. Las autoridades vaciaron los barrios precarios emblemáticos, como el de Sidi Moumen, foco de pobreza ubicado en las puertas de Casablanca que albergó a los terroristas autores de los atentados de 2003. Poco a poco, sus habitantes fueron reubicados en otros sectores, en grandes complejos, decenas de inmuebles idénticos de cinco

pisos como máximo. Sin infraestructura ni transportes, estos barrios marginales contruidos a las apuradas recuerdan las decisiones de la Francia de los años 50 y 60: sus barrios precarios nunca lograron reponerse. Aquí no se reabsorbe la pobreza, se la reubica, lejos de los centros y de los visitantes extranjeros.

El paseo de Tánger, que fue terminado el año pasado y bordea la playa, hizo desaparecer las viejas tabernas, expulsó a los merodeadores alcoholizados y a los traficantes de drogas diversas. Por la noche, las murallas iluminadas que bordean la medina ofrecen una vista única sobre la bahía de Gibraltar. Pero las preocupaciones de la población están en otra parte. “Marruecos es simple: no hay nada que hacer, el caos está en todas partes, incluso para retirar el más mínimo papel administrativo... Te tratan como a un insecto”, suspira Samira T., 30 años, docente en un colegio público de la ciudad. Su experiencia personal ilustra el retraso del país en uno de los factores que el PNUD tiene en cuenta para su clasificación: la educación.

“Enseñé cuatro años en un ambiente difícil, en Fnideq, una ciudad muy conservadora de la que salieron muchos hombres que se unieron al Estado Islámico. Cuando me trasladaron a Tánger, pensaba que mi vida cotidiana iba a mejorar. Pero no, al contrario: fue el verdadero inicio del infierno”. Dieciocho meses de depresión tratada con ansiolíticos, de los que a la mujer le cuesta mucho reponerse. “Sin embargo, el barrio no era particularmente pobre. Casi todos los alumnos tenían tablets. Pero las condiciones de enseñanza eran insoportables”, explica la docente que se prepara para dar ese día una clase de francés a 49 alumnos. Y esto, a cambio de 520 euros por mes. “Crecí en un pueblo perdido, desprovisto de todo. Pero al menos, con la escuela pública, teníamos la oportunidad de encontrar una salida. Hoy el nivel es muy bajo”.

Las familias que pueden hacerlo se inclinan por las escuelas privadas que, sin embargo, tienen un nivel tan desigual como las públicas. Esta situación crítica fue señalada por numerosos informes, marroquíes e internacionales. Un estudio de la Revista internacional de educación de Sèvres considera “vital una reforma radical que permita al sistema educativo marroquí progresar y cumplir con su misión” (8). En diciembre de 2017, cuando acababa de ser nombrado jefe de gobierno, Othmani tomó una medida drástica: el fin de la gratuidad de la enseñanza superior. Una elección que no fue aceptada por el CESE. “La gente tiene que pagar dos veces: primero a través de los impuestos y después se ven obligados a acudir al sector privado”, comenta su presidente, Ahmed Reda Chami, ex ejecutivo de Microsoft que fue ministro de la industria entre 2007 y 2012. Sin embargo, el Primer Ministro defiende esta medida y el balance correspondiente. “Hemos reducido ampliamente la cantidad de alumnos por clase. Ahora estamos más bien alrededor de los 40. Cuarenta y nueve alumnos, es una excepción. De manera más general, hemos reducido la pobreza desde 2004. ¡Marruecos avanza!”, nos asegura. La señora T., por su parte, sólo sueña con dejar el país. Dentro de dos años, espera, se mudará a Canadá, donde podrá “recuperar [su] dignidad”.

El segundo criterio que también se tiene en cuenta en el ranking del IDH es la salud. “En Marruecos, es simple: habría que crear todo un sistema de salud”, deplora Othmane Boumaalif. Este médico clínico de 38 años pertenece a la generación de militantes del movimiento llamado “20 de febrero”, que surgió en 2011 en el contexto de las revueltas populares en Túnez y en Egipto. Preside el Anfass (“respiración” en árabe) democrático, una asociación que produce regularmente notas sobre la economía y la sociedad. “El problema es estructural: no tenemos primera línea, el médico clínico que ausculta y luego orienta al paciente según su patología. En Marruecos, el paciente va al médico si obtiene un turno dentro de los seis meses, o al hospital universitario [CHU], cuando existe, o a un dispensario... Es un caos total, y las personas suelen recurrir a la automedicación”. ¿Qué piensa de los flamantes establecimientos hospitalarios construidos en conjunto con los Estados del Golfo? “Se construye un puñado de hospitales-vidriera muy bien equipados. ¡Pero nadie puede pagarlos! Marruecos sigue siendo un gigantesco desierto médico, sobre todo porque muchos de nuestros profesionales emigran a Alemania, donde sus diplomas son ahora mejor reconocidos”.

El fracaso de un modelo

¿Cómo explicar este desfase entre los datos macroeconómicos más bien elogiosos, las ostentosas infraestructuras nuevas y las enormes carencias en los servicios de base del Estado? “Hay que poner en relación al sistema político con los problemas de la economía”, explica el economista Najib Akesbi, recién jubilado de la Escuela de Agronomía de Rabat. “Cuando el sistema político decide privilegiar un programa de autopistas mientras que las rutas rurales, los caminos para unir un pueblo a otro, hacen falta en todas partes, son elecciones que no pueden resultar viables. De este modo, el tramo Fez-Oujda, [con peaje] muy costoso, sólo funciona al 10% de sus capacidades. Las elecciones en cuanto a las inversiones no responden a las necesidades de la población”.

La falta de recursos no constituye, entonces, la primera causa de los desequilibrios económicos. “Tenemos una buena tasa de inversión (32%), pero no genera ni el crecimiento ni los empleos suficientes”, continúa el economista. “¿Por qué? Hace diez años, un punto de crecimiento representaba 35.000 empleos. Hoy, son menos de 10.000. Las grandes obras sólo le dan trabajo a la gente por un tiempo limitado. Por otra parte, el 70% de las inversiones proviene de los fondos públicos. Es el primer fracaso del ‘modelo de desarrollo marroquí’”.

Durante cincuenta años, una de las decisiones estratégicas del régimen fue apostar todo a la economía de mercado y al sector privado, ampliamente subvencionado por el Estado, con la idea de que iba a autonomizarse para convertirse en el principal inversor. Esta apuesta fue un fracaso evidente. Además de invertir muy poco, el sector privado sólo contrata al 10% de la población activa (es decir, 1,2 millones de personas sobre 12, para una población total de 36,6 millones de personas). Otro fenómeno notable es el de los trabajadores fantasma. En el seno de estos 12 millones de personas activas, dos millones están censados como tales, pero no reciben remuneración. Figuran en esta categoría, principalmente, los obreros agrícolas empleados en una explotación familiar o los jóvenes que trabajan en el artesanado.

“No hemos logrado alcanzar la tasa de crecimiento de entre el 6 y el 7% que esperábamos”, explica por su parte Chami.

“Ahora necesitamos un crecimiento más constante, que beneficie a más personas. Invertimos demasiado en “hardware” [infraestructura] y no lo suficiente en “software” [“programas”, que refieren aquí al valor agregado]”. Aunque a primera vista resulta seductora, esta metáfora encuentra sus límites rápidamente, cuando la mayoría de los servicios son deficientes en el sur. ¿No hubiera sido mejor construir un tren para Agadir, una de las principales estaciones balnearias del país y un pasaje importante hacia las zonas más meridionales, que endeudarse por un TGV cuando ya existía una línea entre Casablanca y Tánger?”

La pregunta incomoda al Primer Ministro, él mismo nativo de Souss, una región del sudoeste marroquí: “Cuando llegué al puesto de jefe de gobierno, la decisión ya estaba tomada”, explica. “Entonces, no fui yo quien la tomó. Yo digo: “Conservemos el TGV e intentemos construir el tren para Agadir”. Muchos de sus conciudadanos no comparten esta idea. Para Akesbi, “el TGV es una catástrofe para el país”. El economista recuerda que, al principio, para rentabilizar la línea de gran velocidad, el precio de los pasajes tendría que haberse establecido en un valor de entre 80 y 120 euros; un precio demasiado elevado para la clase media marroquí. Entonces, el Estado bajó el valor de manera artificial, y una ida de Casablanca a Tánger cuesta menos de 25 euros. “La Oficina Nacional de Ferrocarriles [ONCF] paga la diferencia y agrava así su déficit, que el contribuyente tendrá que reflotar. Lo que no pagamos al comprar el pasaje, lo pagaremos con nuestros impuestos”, explica Akesbi.

En la plaza Yamaa el Fna (9), emblemática del templo del turismo en el que se convirtió Marrakech, un inmenso afiche celebra al rey: “Veinte años de logros y de desarrollo económico”. Pero a menos de trescientos kilómetros de allí, las veredas destrozadas de Agadir (400.000 habitantes) recuerdan que ese “desarrollo” no beneficia a todo el mundo. Los muros húmedos y amarillentos de la estación de autobuses, comparados con la magnificencia de la estación de trenes de Marrakech, cuestionan las decisiones económicas del régimen. Sucesión de inmuebles desgastados, el centro de la ciudad se cae a pedazos. Signo del esplendor de antaño, la ciudad cuenta con no menos de tres palacios; pero el soberano, que prefiere el norte del país, y el extranjero, no le hacen el honor de visitarla muy seguido (10).

Agadir, víctima de las injustas decisiones del poder, se ve ahora castigada, condenada al subdesarrollo. “Sin embargo, antes no estábamos lejos de Marrakech. Hoy es otro mundo”. Con 37 años, este gerente de espacios publicitarios, que cuenta entre sus clientes a la cadena de comida rápida McDonald’s, vio caer su volumen de negocios de 100.000 a 40.000 euros entre 2012 y 2019. “¿Cómo hacer venir a las empresas cuando Agadir representa ahora un 4% de la cuota del mercado publicitario, contra el 12% de Marrakech?”. Por su parte, Mohamed Jaouhair, un maestro jubilado, reparte su tiempo entre Agadir y Sidi Ifni, a una hora y media de ruta por el camino del sur. “El otro día, en el ‘bled’ [pueblito], me picó un escorpión”, nos cuenta mostrando la fotografía del artrópodo negro sacada con su teléfono. “Como ahí no hay CHU, y no podía esperar a que el médico me diera un turno, fui al dispensario. ¡Me dijeron que no tenían nada para darme! Pasé veinticuatro horas acostado, con mucha angustia, esperando que se me pasara”, explica este miembro de la red Akal (“tierra” en bereber), que lucha por el reconocimiento de la comunidad amazigh del sur del país.

De todos modos, a principios de noviembre, Mohamed VI llamó a una “seria reflexión” sobre el establecimiento de una línea ferroviaria entre Marrakech y Agadir (11). Pero las dificultades de Marruecos no responden únicamente a las discutibles decisiones del palacio; también son estructurales, inherentes a la economía de renta y de monopolios diversos que ya existía en la época colonial francesa, y que la monarquía perpetuó. “Es la otra cara del fracaso de la apuesta por la economía de mercado. La renta, es decir, una remuneración sin trabajo ni valor agregado, gangrena la actividad económica. Tomemos el transporte de personas: si se quiere crear una empresa en ese sector, no se puede. Para hacerlo hay que disponer de un permiso, es decir, de una autorización política. Si se otorga, no es porque el proyecto sea viable, sino porque quien lo presenta está bien conectado. Los recursos naturales también están sujetos a la renta. En la industria, el 40% de las empresas declara estar en un sector dominado por oligopolios o duopolios”, comenta Akesbi. El agua en botella, los bosques, las canteras de arena, los minerales, pero también el banco, los carburantes, etc. En la actualidad, ningún sector escapa a esta ley de los permisos.

¿Una nueva era?

El rey, implicado en múltiples actividades -entre las que se cuenta el muy remunerador sector bancario-, preocupado por preservar las apariencias manteniendo su influencia sobre la economía (12), promueve ahora la idea de un “nuevo modelo de desarrollo”. El proyecto pretende ser, ante todo, “de orden filosófico”, nos explica el Primer Ministro. Pero, ¿otra vez lo mismo? Actualmente, los lineamientos no están bien definidos, incluso si, en diciembre de 2019, Mohamed VI nombró a treinta y cinco personalidades miembros de una comisión encargada de emitir un informe el próximo mes de junio. ¿Esta reflexión producirá proyectos de ley? “Seguramente”, contesta con evasivas el Primer Ministro. ¿Para invertir en qué sector? El misterio sigue siendo total. “Los servicios públicos”, espera, por su parte, Chami.

Pero además hay que poder financiarlos. El presupuesto concedido a la seguridad sigue siendo considerable: 77.000 millones de dirhams (7.320 millones de euros). Es un poco menos que el primer puesto de la ley de finanzas de 2020, a saber, el servicio de la deuda, que alcanza los 96.500 millones de dirhams (9.170 millones de euros) (13). Además, Marruecos continúa enredado en un sistema fiscal “injusto e ineficaz”, según las conclusiones de la Conferencia del sistema fiscal, que tuvo lugar en mayo de 2019. Hasta el día de hoy, el reino siempre se negó a llevar a cabo una reforma en este ámbito.

“Hablar de nuevo desarrollo sin reforma del modo de gobierno es una pérdida de tiempo”, considera Boumaalif. “Tenemos que ir hacia un nuevo pacto social, una monarquía parlamentaria. El asunto de la gobernanza es un asunto del pueblo marroquí”. El palacio hace oídos sordos a este discurso. Para enfrenar este triple callejón sin salida -político, económico y social-, parece tentado, al contrario, por una solución a la argelina, una mezcla de cooptación y represión. El caso de la periodista Hajar Raissouni, detenida por un “aborto ilegal” y por mantener “relaciones sexuales extramatrimoniales”, condenada a un año de prisión antes de obtener el perdón real, hizo mucho ruido en el ámbito internacional. Además, sacó a la luz el clima pernicioso en el seno del reino que pesa en primer lugar sobre los militantes del Hirak (“movimiento popular”) del Rif (14). Desde el inicio de las manifestaciones, en 2017, varias centenas de

manifestantes fueron condenados, algunos de ellos a veinte años de prisión firme. A fines de 2019, todavía había cincuenta y cinco detenidos. A comienzos de febrero, varios de ellos iniciaron una huelga de hambre para protestar contra sus condiciones de encierro.

“¿Y por qué? ¡Por haber pedido agua, electricidad, servicios públicos, sin violencia!”, suspira Amina Khalid, coordinadora de la ayuda a las familias de los prisioneros del Hirak. “Esto me recuerda los años de Hassan II. La represión vuelve a ser una política de Estado en Marruecos”, se lamenta esta hija de militantes de la Unión Socialista de las Fuerzas Populares (USFP). Como signo de una creciente impaciencia en el seno de la población, millones de personas desfilaron el 23 de febrero de 2020 por las calles de Casablanca para denunciar la caída del poder adquisitivo, la amplitud de la corrupción y la degradación de los derechos humanos. “El marroquí se vio tan afectado que ya no cree en nada. Simplemente ya no tenemos ninguna esperanza; sólo esperamos. Quizás, el ejemplo del Hirak libanés nos inspire”, suspira Khalid.

Marruecos se busca en un ambiente que no deja de recordar los últimos años del régimen de Zine El-Abidine Ben Ali, cuando Túnez vivía bajo el yugo de los Trabelsi, la familia política del Presidente. ¿Se acerca el fin de una era? El comportamiento del rey genera interrogantes. No estuvo presente en septiembre de 2019 en el entierro de Jacques Chirac, un gran amigo de su padre, ni en octubre en Sochi para la cumbre Rusia - África, a donde envió como delegado a su jefe de gobierno. Fuera de los efectos de anuncio, ¿qué pensará mientras se rodea de un gabinete real cuyos efectivos alcanzan las 2.000 personas? ¿Su discreción anuncia los grandes cambios que vendrán? “Todos aquellos que dicen que el rey es la base del país son los que todavía tienen algo que perder en el sistema actual”, afirma el periodista Omar Radi, atento espectador de un Marruecos cuyo futuro es cada vez más incierto. ■

1. Véase Kader Abderrahim et Zakya Daoud, “Le Maroc change-t-il vraiment”, *Le Monde diplomatique*, París, febrero de 2000.
2. “Fête du Trône : discours intégral du roi Mohammed VI”, *Atlas Info*, 29 de julio de 2019, <https://atlasinfo.fr>
3. Cf. Jean-Pierre Séreni, “L’économie du Maroc. Bien, mais doit (beaucoup) mieux faire”, *Orient XXI*, 24 de febrero de 2020, <https://orientxxi.info>
4. La Vie éco, Casablanca, 28 de enero de 2020.
5. Agence Ecofin, Genève-Youndé, 22 de febrero de 2020.
6. *Doing Business*, 24 de octubre de 2019, <https://francais.doingbusiness.org>
7. “Human Development Report 2019”, PNUD, diciembre de 2019, <http://hdr.undp.org>
8. Rahma Bourqia, “Repenser et refonder l’école au Maroc: la Vision stratégique 2015-2030”, *Revue internationale d’éducation de Sèvres*, N° 71, abril de 2016.
9. Véase Juan Goytisolo, “Jema-el-Fna, patrimoine oral de l’humanité”, *Le Monde diplomatique*, París, junio de 1997.
10. Cf. Ignacio Cembrero, “Mohammed VI, l’absentéisme déconcertant du roi du Maroc”, *Orient XXI*, 23 de octubre de 2017.
11. “Mohammed VI annonce le projet d’une ligne ferroviaire Marrakech-Agadir”, *Bladi.net*, 7 noviembre 2019, www.bladi.net
12. Véase Pierre Daum, “Marruecos avanza hacia atrás”, *Le Monde diplomatique*, edición chilena, septiembre de 2016.
13. Mohammed Benmoussa, “Lecture socio-politique et économique de la loi de finances 2020”, *Le Desk*, 27 de octubre de 2019, <https://ledesk.ma>
14. Véase Aboubakr Jamaï, “Au Maroc, le Rif défie le roi”, *Le Monde diplomatique*, julio de 2017.

*Periodista.

Traducción: María Julia Zaparart

Cuando Alemania intentaba limpiar su imagen

Las relaciones singulares entre Alemania e Israel

por Daniel Marwecki*

Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania Occidental, en reconstrucción, buscó reconquistar una imagen de inocencia apoyando la construcción del Estado de Israel. Así, Bonn desempeñó en Medio Oriente un papel tan importante como desconocido. Sin embargo, durante los años 50 y 60, esta diplomacia en busca de absolución no siempre logró enmascarar la expresión de un trasfondo dispuesto a resurgir.

En abril de 2018, el Parlamento alemán se reunió para conmemorar el septuagésimo aniversario de la creación del Estado hebreo. Durante el debate, Martin Schulz, que hablaba en nombre del Partido Socialdemócrata (SPD), declaró: “Al proteger a Israel, nos protegemos de los demonios del pasado” (1). A su vez, el portavoz del partido ecologista, de centroizquierda, capturó en una frase la quintaesencia del debate: “El derecho a la existencia de Israel no es ni más ni menos que el nuestro”.

Cuando la clase política alemana habla de Israel, habla sobre todo de sí misma. Debido a que sus vínculos con este Estado constituyen la base sobre la cual la Alemania post-nazi edifica su identidad progresista, la actitud de los alemanes al respecto nos enseña mucho más sobre su propio estado de ánimo que sobre estas relaciones bilaterales, su historia y su verdadero contenido.

Política de reparaciones

La República Federal de Alemania y el Estado de Israel son dos países que nacen como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y del genocidio judío. Su acercamiento se produce con el acuerdo de reparaciones, firmado entre Israel y Alemania el 10 de septiembre de 1952. ¿Cómo se explica este movimiento, apenas unos pocos años después de que el Tercer Reich haya casi logrado exterminar al pueblo judío, con el apoyo de una gran parte de su población?



Santiago Cancino, de la serie Fosa, Pieza N° 5 - 1/2, (mármol y hierro), 2017 (Primer lugar Concurso Artespacio Joven)

Es difícil creer en la retórica oficial alemana, que insiste en el fundamento “moral” de sus relaciones con Israel. Como lo han ampliamente demostrado los historiadores, los ex dirigentes nazis seguían ocupando altos cargos en la Alemania vencida, mientras que la sociedad en general estaba sumida en la negación de la barbarie que había provocado poco tiempo antes.

Quizás Konrad Adenauer, primer canciller de la posguerra y símbolo del “renacimiento” de su país, pueda arrojar más luz sobre el tema. En 1966, dos años después de retirarse del poder, fue entrevistado en la televisión alemana, en horario central. Allí explicaba a propósito de su política de reparaciones que “expiar o reparar [los crímenes alemanes contra los judíos] era la condición *sine qua non* para recuperar nuestro estatus internacional”. Antes de añadir: “Aun hoy, el poder judío no debe subestimarse, sobre todo en Estados Unidos”.

Según Adenauer, las reparaciones no se debían tanto a una cuestión moral como a la necesidad de limpiar la imagen de Alemania. Su segunda justificación sorprende aun más. Al evocar el “poder judío”, al que le añadía un revelador “aun hoy”, Adenauer retomaba en efecto uno de los temas del repertorio antisemita. Su política con respecto a Israel se basaba en estos dos pilares: la voluntad de rehabilitar Alemania y una evaluación exagerada de la influencia judía en la opinión occidental.

Necesidades materiales

Eso en cuanto a las motivaciones alemanas. ¿Pero por qué el Estado dirigido por David Ben Gurion, Estado fundado tras los horrores de la solución final, aceptaba la mano ensangrentada que le ofrecía

una Alemania occidental apenas desnazificada? Los sobrevivientes del exterminio constituían un tercio de la población de Israel en el momento de su creación. Pocos eran los israelíes que no contaban con ningún muerto en sus familias o en su entorno. El país había sido literalmente construido por refugiados europeos traumatizados. Solo una razón podía explicar su acercamiento a Alemania: satisfacer sus necesidades materiales. Después de su guerra de independencia, marcada por el éxodo forzado de la mayor parte de la población palestina, el joven Estado se encontraba en una posición frágil en Medio Oriente. Además, se encontraba exangüe, económica y militarmente.

El acuerdo de 1952 fue el primer gran tratado que organizó el pago de las reparaciones alemanas. Aunque se habían sentado las bases para una indemnización individual, que se establecería más adelante, el acuerdo se refería más concretamente a las reparaciones que debían pagarse al Estado de Israel. La República Federal de Alemania se comprometió a abonar 3.450 millones de marcos alemanes, lo que equivale en la actualidad a aproximadamente 7.000 millones de euros. Dos tercios de esa suma se asignaron en forma de mercancías (materias primas, maquinaria, embarcaciones, etc.). Una tercera parte del total se utilizó para comprar petróleo crudo a empresas británicas. De esta manera, el acuerdo marcó el inicio de un programa de industrialización que garantizaba el abastecimiento de combustible.

Nahum Goldmann, entonces presidente del Congreso Judío Mundial y principal negociador de la parte israelí, calificó este acuerdo de “rescate en regla”. A Alemania no le significó un gran

costo, ya que los gastos anuales previstos en el tratado no superaron jamás el 0,2% de su Producto Nacional Bruto. Más aun: la producción de los sectores exportadores se vio impulsada por las reparaciones, alimentando el “milagro económico”.

Cooperación militar

La “normalización”, en primer lugar económica, conquistó rápidamente el terreno militar. Tras la crisis del Canal de Suez, en 1956, y hasta la decisiva guerra de 1967 (la Guerra de los Seis Días), Alemania se convierte, junto con Francia, en el primer apoyo del ejército israelí. Gran arquitecto de la cooperación militar con estos dos países, el dirigente israelí Shimon Peres resumió muy bien la situación: “Estados Unidos nos daba dinero, pero no armas. Francia nos daba armas, pero no dinero. Alemania, por su parte, veía allí una forma de dar vuelta la página del régimen nazi y nos entregaba armas sin pedir nada a cambio”.

Según los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, la ayuda militar a Israel comienza en 1957. En líneas generales, consiste en el suministro de armas de pequeño calibre, patrullas y programas de adiestramiento. El primer gran contrato de armas data de 1962, cuando Alemania suministró artillería pesada, aviones, helicópteros, buques y submarinos. En 1964, Washington ordenó a Bonn que añadiera a la lista 150 tanques Patton de parte de Estados Unidos. A fin de actuar como mediador neutral en el conflicto árabe-israelí y de no despertar la ira de los nacionalistas árabes, Estados Unidos prefería evitar armar directamente a Israel, al menos hasta 1967.

El apoyo alemán resultó crucial. En 1965, a partir de su instalación en la Em-

bajada de Israel en Bonn, Asher Ben-Nathan, primer titular del cargo, le confió al canciller Ludwig Erhard que un conflicto en Medio Oriente “no duraría más que unos días. Por consiguiente, Israel [debía] mantenerse constantemente en alerta máxima. La ayuda de Alemania [había hecho] mucho por el desarrollo del país, y su apoyo militar [era] también determinante para su seguridad”.

Esto fue confirmado dos años más tarde. La guerra árabe-israelí de 1967 duró solo seis días y el apoyo militar alemán tuvo mucho que ver. Cuarenta y ocho horas después del fin del conflicto, el embajador alemán en Israel envió a Bonn un telegrama breve y elocuente: “Según un oficial de Estado Mayor, los tanques modernos con blindaje reforzado que les proporcionamos no habrían podido demostrar mejor sus méritos”.

El propio desarrollo de esta guerra ilustra la importancia que tuvo tanto Francia como Alemania para Israel en ese momento. Mientras los aviones Mirage franceses fueron decisivos en la campaña aérea, los tanques alemanes dominaban los combates terrestres en Egipto. Los representantes de los Estados árabes, ya informados de la contribución de la República Federal de Alemania al esfuerzo de guerra israelí, no cesaron de quejarse al respecto.

Otro elemento esencial de la ayuda alemana consistió en un préstamo de 644,8 millones de marcos alemanes. Identificada como “Operación *Business Friend*”, esta transacción se efectuó bajo secreto, al igual que los envíos de armas. En 1965, una vez establecidas las relaciones diplomáticas entre los dos países, el préstamo se convirtió en asistencia oficial para el desarrollo. Décadas después, en 2015, en las columnas del diario conservador pro-israelí *Die Welt*, Hans Rühle -experto en proliferación nuclear, que había ocupado altos cargos en el Mi-

nisterio de Defensa de Alemania y en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)- afirmó que el dinero se utilizó para financiar el programa nuclear de Israel. Si se tiene en cuenta el papel que desempeñó la República Federal de Alemania en la consolidación del Estado de Israel, la teoría resulta plausible pero difícil de verificar.

Racismo asumido

Ardid de la historia, las relaciones germano-israelíes han evolucionado con mucha más rapidez que el proceso de confrontación de Alemania con su propio pasado. Este desfase provocó una extraña mutación del antisemitismo a la vieja usanza, incrustado en el telón de fondo de las relaciones con Israel. Un solo ejemplo basta para convencerse. En 1961, Gerhard von Preuschen, jefe de la delegación de observadores alemanes en el juicio a Adolf Eichmann, concluyó su informe final con un elogio “de la juventud israelí, que contrasta con las generaciones anteriores de manera muy prometedora. Estos jóvenes, -los hijos de los emigrantes judíos alemanes- no presentan casi ninguna de las características que se asocian habitualmente con los judíos. De gran tamaño, rubios de ojos azules en su mayoría, con rostros de rasgos regulares, autónomos y libres de sus movimientos, encarnan una forma de judeidad desconocida hasta ahora”.

Esta declaración, que sorprende por su racismo asumido y formulado con elocuencia, refleja una percepción algo egocéntrica de Israel: el Estado hebreo se convierte en ario. Este tipo de paradoja se extiende a la historia de las relaciones entre los dos países. Un narcisismo similar emanaba de la cobertura que la prensa alemana hacía de la guerra de 1967, en particular la del grupo Springer. La victoria israelí fue aclamada como una “vic-

toria relámpago”, el general israelí Moshe Dayan aplaudió como digno heredero del general Wehrmacht Erwin Rommel, mientras que los ejércitos árabes vencidos eran objeto de un desprecio que evocaba el feroz triunfalismo alemán de una época pasada.

Última curiosidad en estas singulares relaciones bilaterales: las reflexiones de Rolf Pauls, primer embajador alemán en Israel y ex general de la Wehrmacht condecorado con la Cruz de Hierro. Sus notas personales asociaban generalmente a sus interlocutores israelíes con el dinero y el poder. En 1965, se indignaba de que los israelíes “hablan de moralidad, pero solo piensan en el dinero”. Convencido de que “la influencia de Israel y de los judíos en los grandes centros mundiales donde se forma la opinión pública [era] determinante”, Pauls consideraba que Alemania no estaba en condiciones de cortar los víveres a Tel Aviv, de lo contrario, “los judíos [soltarían] los perros, de Jerusalén a Londres, pasando por Nueva York”.

El viraje

La política israelí de la República Federal de Alemania es hoy objeto de debates que, por su naturaleza, apelan a la moral. Por ello, a sus detractores les gusta recordar que Alemania se muestra mucho más preocupada por la seguridad de Israel que por la suerte de quienes fueron expulsados de sus tierras por la creación de ese Estado. Ahora bien, esta crítica descuida un aspecto fundamental: en realidad, el viraje alemán en favor de Israel nada tuvo que ver con la moral.

En la posguerra, mientras sus reparaciones y armamentos participaban en la construcción del Estado israelí, Alemania era consciente de la existencia de los refugiados palestinos. Sin embargo, en una época en que los desplazamientos de población eran mone-

da corriente en el mundo colonizado, como en Europa, nada incitaba a reconocer la angustia de un pueblo que no podía hacer oír su voz.

En el seno del gobierno alemán, los debates sobre la ayuda humanitaria a los refugiados palestinos insistían en la necesidad de crear un impulso de buena voluntad entre los Estados árabes que sospechaban, con razón, que Alemania proporcionaba a Israel un apoyo mucho más importante de lo que admitía. Sin embargo, los dirigentes alemanes procuraron que esta asistencia humanitaria no los colocara en una posición de “responsabilidad indirecta”. En la actualidad, Alemania promueve la autodeterminación del pueblo palestino, al defender la solución de un Estado que incluya la Cisjordania, Gaza y Jerusalén oriental, pero sus relaciones con Israel siguen siendo prioritarias.

El primer punto de inflexión en las relaciones entre Alemania e Israel se producirá después de la guerra de 1967. Al consolidarse la alianza entre Estados Unidos e Israel, la República Federal pasó a jugar un papel secundario. Luego, estos vínculos bilaterales evolucionaron a merced de los agitados acontecimientos de la Guerra Fría, de la integración europea y del conflicto israelí-palestino, de la caída del Muro y de la reunificación alemana, lo que finalmente generó un cambio más radical. ■

1. Esta cita y las siguientes proceden de la obra del autor *Germany and Israel: Whitewashing and Statebuilding*, a publicarse en Hurst, Londres, 30-4-20.

*Profesor e Investigador de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (Londres) y de la Universidad de Leeds. Autor de *Germany and Israel: Whitewashing and Statebuilding*, a publicarse en Hurst, Londres, 30-4-20.

Traducción: Magalí del Hoyo

Revisión histórica sobre los campos de exterminio de la Alemania nazi

La liberación de Buchenwald

por Sonia Combe*

Toda conmemoración es un acto político. Se pronuncian discursos domingueros cuya fraseología, a menudo convencional y repetitiva, disimula ciertas intenciones. Este año, el 75° aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz aportó una nueva prueba de ello. El pasado 27 de enero, cada Estado, persiguiendo sus propios objetivos, enunció su (re)visión de la historia. En Israel, el historiador Zeev Sternhell habló sin pelos en la lengua. Este año, la conmemoración del genocidio sirvió de “pretexto para la anexión” de los territorios palestinos (1) (*Haaretz*, 31 de enero). Los sobrevivientes, tomados como rehenes, se vieron relegados a un segundo plano, pese a que la memoria de su sufrimiento y de su combate sirva de justificación oficial para el evento.

La reescritura del combate antifascista

Es en Buchenwald, primer campo de concentración de Alemania en haber sido liberado, donde, en abril, tendrá lugar la próxima conmemoración. Una cere-

monia que se desarrollará bajo máxima seguridad. El Memorial se encuentra en el Estado Libre de Turingia, donde, con el 23,4% de los votos en las elecciones legislativas de octubre último, la extrema derecha representada por Alternativa para Alemania (AfD) ocupa el segundo lugar en el Parlamento regional, después de la izquierda (Die Linke), que obtuvo el 31%. En Buchenwald, más aun que en Dachau, Sachsenhausen o en Ravensbrück, integrantes de la AfD irrumpen con declaraciones negacionistas. Para el director del Memorial, Volkhard Knigge, “es un indicio cada vez más serio de un debilitamiento de la conciencia histórica” (*Der Spiegel*, 23-1-20). Sin duda. No obstante, queda por ver en qué medida la reescritura del combate antifascista tras la caída del Muro, de la cual el Memorial de Buchenwald fue uno de los vectores, no habría, *volens volens*, contribuido a dicho debilitamiento.

Efectivamente, del inicio de la Guerra Fría a nuestros días, la historia de Buchenwald ha sido incesantemente retocada según las circunstancias del momento. Inaugurado en julio de 1937, fue uno de los

primeros campos de concentración contruidos por el régimen nazi. Funcionó hasta el 11 de abril de 1945, fecha en la que el ejército estadounidense lo descubrió en camino a Weimar. Buchenwald, destinado a confinar a los opositores del régimen nazi, principalmente a los comunistas y a los socialdemócratas, a fin de apartarlos de la sociedad, recibió a cerca de 10.000 judíos detenidos durante la Noche de los Cristales Rotos, el 9 de noviembre de 1938, así como a gitanos, testigos de Jehová y homosexuales –sin contar a los que el régimen consideraba como “asociales”–.

Fue a estos prisioneros de derecho común que la Schutzstaffel (“escuadrón de protección”, SS) delegó inicialmente la administración del campo, hasta que, en 1942, los prisioneros políticos los eliminaron al término de una lucha caracterizada como feroz, pero beneficiosa, según la opinión general. Tras la decisión de hacer que la población concentracionaria contribuyese al esfuerzo de guerra, las SS comprendieron que los “triángulos rojos” (2) eran más aptos para ocupar funciones de supervisión. Los prisioneros políticos, ubicados en cargos estratégicos, tales como los de distribuir a los

prisioneros en los comandos de trabajo, o componer convoyes hacia campos como Dora, donde la supervivencia era en promedio de dos semanas (3), o Auschwitz, para aquellos –judíos y gitanos– condenados al exterminio, gozaban de un poder de decisión, limitado pero real, sobre la suerte de los detenidos.

Tras la entrada en la guerra, en Buchenwald se encontraban resistentes de todos los países, en particular, cerca de 26.000 franceses, soldados soviéticos, de los cuales 8.483 fueron ejecutados por las SS de una bala en la nuca. Concebido inicialmente para albergar a 8.000 prisioneros, hacia el final de la guerra, el campo conoció una sobrepoblación dramática. A partir del otoño de 1944, debido al avance del Ejército Rojo, los campos de exterminio situados en el Este fueron evacuados, provocando la afluencia de miles de sobrevivientes de las “marchas de la muerte”. En enero de 1945, en Buchenwald había 100.000 prisioneros. Cuando los estadounidenses tomaron el control, encontraron allí a 21.000 sobrevivientes. La resistencia clandestina, que había reunido armas con miras a una insurrección, les

entregó a los últimos SS capturados. A la cabeza de esta resistencia se encontraban los detenidos políticos alemanes, mayoritariamente comunistas.

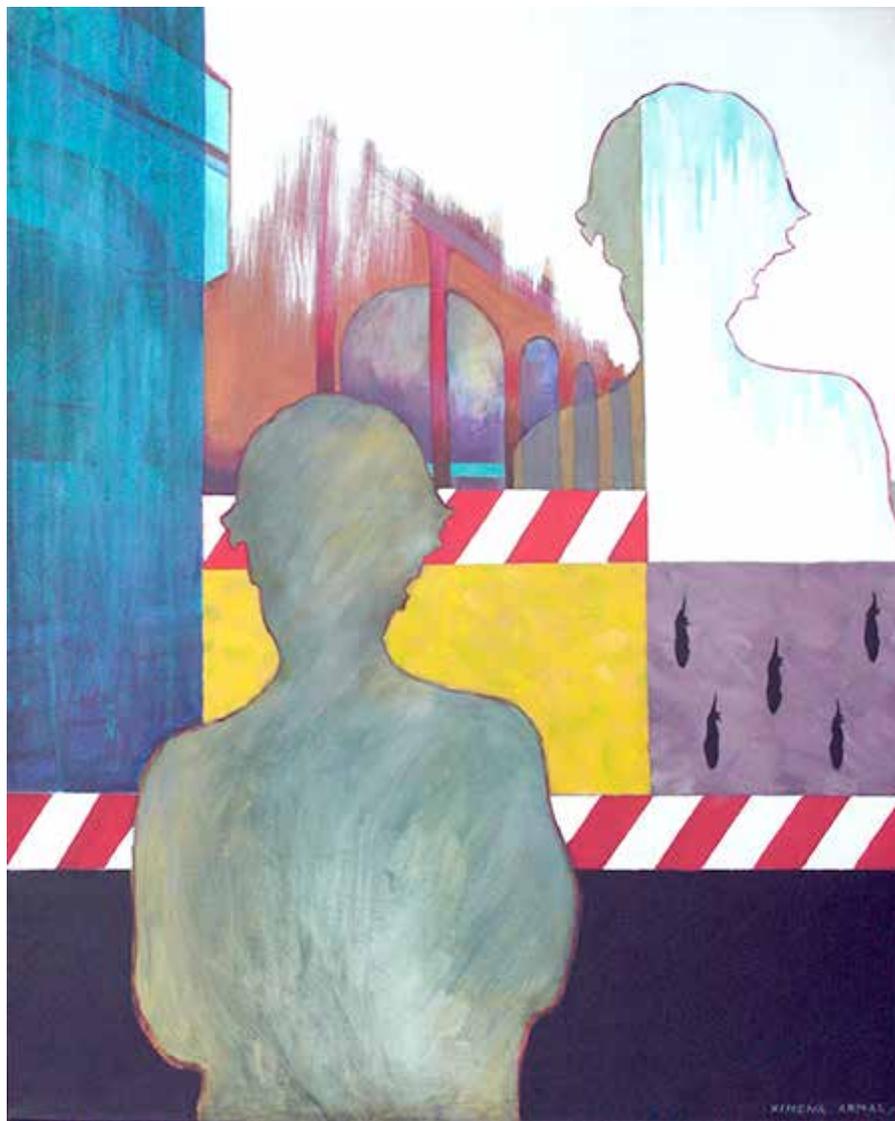
El viento cambió, la perspectiva también

“De Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, una cortina de hierro se ha abatido sobre el continente”: ni bien declarada la Guerra Fría con esta frase de Winston Churchill, pronunciada el 5 de marzo de 1946, apareció el informe de un historiador del ejército estadounidense, Donald Robinson, titulado “Las atrocidades comunistas cometidas en Buchenwald”. En el nuevo equilibrio de fuerzas que se estaba instaurando en Europa, ese informe nutriría el discurso antisoviético. Sin embargo, será el libro *El Estado de la SS*, publicado en 1946, del sociólogo Eugen Kogon (no comunista) detenido en Buchenwald, el que prevalecerá (4). El autor, sin ignorar las relaciones conflictivas entre los detenidos ni las correlaciones de fuerzas, se esfuerza allí de echar luz sobre la manera en la que los prisioneros políticos alemanes lograban mantener un orden aparente e impedir la generalización del “sálvese quien pueda”.

En Alemania Oriental, país creado en octubre de 1949, el nuevo régimen basó su legitimidad en el combate de los militantes antifascistas. Una vez regresados de la Unión Soviética, donde estuvieron exiliados, quienes tomaron las riendas de la parte oriental de Alemania promovieron una historia heroica de la resistencia al nazismo, de la que se declararon herederos. La convertirán en una religión de Estado y el campo-museo de Buchenwald, inaugurado en 1958, se volverá una suerte de templo. Cada año, allí se conmemorará con solemnidad el “juramento de Buchenwald”, pronunciado el 19 de abril de 1945 por los prisioneros comprometidos en la lucha por la paz y la libertad. Pero, si bien los sobrevivientes de los campos recibirán el trato de héroes oficiales, se los apartará de los lugares de poder, siempre y cuando no hayan sido víctimas de las purgas estalinistas de principios de los años 1950 (los cuadros comunistas agueridos por trece años de prisión y de campo de concentración resultaban ser menos dóciles que los que regresaban de Moscú, cuya obediencia a la URSS se había vuelto un hábitus).

En 1958, se publicó en la República Democrática Alemana (RDA) la novela de Bruno Apitz *Desnudo entre lobos*, que traducido en unas treinta lenguas, conoció un éxito mundial (5). El autor, él mismo ex detenido de Buchenwald, cuenta la historia de un niño judío polaco de 3 años salvado por detenidos políticos que se encariñan con él. La novela fue adaptada en una película epónima del cineasta de Alemania Oriental Frank Beyer que, en 1963, recibió el premio a la mejor puesta en escena en el festival de Moscú, donde compitió con *Ocho y medio* de Federico Fellini (6). El papel principal en la película lo interpreta el actor fetiche de Rainer Werner Fassbinder, Armin Mueller-Stahl. Entre los actores y los extras, varios otros eran también sobrevivientes de los campos de concentración nazis. La película fue incluso rodada allí donde ocurrieron los hechos. En Moscú, un espectador llegó a reconocer la historia de su sobrino, hasta entonces conocido como “el niño de Buchenwald”: se trataba de Stefan Jerzy Zweig.

Inspirado de un hecho real, aunque novelado, el relato de Bruno Apitz cumplió en la RDA una función de novela nacional, en la que el rescate de un niño se



Ximena Armas, Sombra (<http://ximena.armas.free.fr>)

convirtió en el símbolo del humanismo de los comunistas en los campos. Como sucede a menudo, la ficción superará la historia real, y es de este relato que se inspirará la escenografía del campo-museo, que, hasta el final del régimen, enaltecerá la acción de los comunistas. Una religión, por más secular que sea, no cuadra con las contradicciones. La cuestión de las relaciones entre los prisioneros políticos y las SS, y entre los mismos prisioneros, está excluida de la narrativa de Alemania Oriental. Esta “zona gris”, que, según Primo Levi, autor de *Si esto es un hombre*, no dependía de la competencia de ningún tribunal humano, se encontraría sin embargo con sus jueces en la Alemania reunificada.

La renovación del sitio memorial de Buchenwald apareció como una urgencia entre las prioridades de la Alemania post-Guerra Fría. Una de sus primeras iniciativas fue el redescubrimiento de Speziallager, campo en el que los soviéticos, en 1945, encerraron, en una redada sin duda bastante amplia, a cuadros del Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes (NSDAP), el partido de Adolf Hitler, de los cuales, las tres cuartas partes murieron de hambre. En 1999, las autoridades inauguraron un memorial enteramente “revisado y corregido”. El viento había cambiado, la perspectiva también, y Volkhard Knigge, el nuevo director del lugar –un historiador designado por Alemania Occidental–, elaboró un relato contrapuesto al anterior. La mirada se desplazó de los héroes hacia las víctimas y apuntó a una personalización de los actores. Si bien los comunistas no quedaron totalmente excluidos, desaparecieron como grupo social. También desapareció la placa que conmemoraba el rescate de Stefan Jerzy Zweig, a pesar de las protestas del interesado, en ese momento septuagenario. Se desoyó también la indignación de la novelista Elfriede Jelinek y primó

la falta de tacto y la obstinación del director del Memorial. Figura emblemática del relato de Alemania Oriental, al igual que Ana Frank, convertida en una figura de las víctimas de la Shoah, “el niño de Buchenwald” fue tirado con el agua sucia. De hecho, fueron 904 los niños rescatados en Buchenwald, un hecho que debe atribuirse a la resistencia clandestina.

Mediante una deconstrucción metódica de lo que hoy en día sólo se conoce como el “mito del antifascismo” de la RDA, un colectivo de historiadores produjo inmediatamente después de la reunificación una obra aún vigente. En *El Antifascismo depurado* (7), enuncian la tesis según la cual aquellos que denominan los “capos rojos” sobrevivieron en detrimento de los demás. La solidaridad solamente habría funcionado entre ellos. Tanto la prensa amarilla como los medios de referencia se apropiaron de la historia del “niño de Buchenwald” y de la de los “capos rojos”, presentándolos como colaboradores de las SS. La equivalencia “comunistas = nazis” se fue desarrollando y suscitó en algunos la sensación de haber sido engañados por el discurso de Alemania Oriental. La tesis del historiador Ernst Nolte, según la cual los campos de exterminio nazis constituyeron una reacción defensiva frente al bolchevismo (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6-6-1986), ganó terreno, mientras que la asimilación entre rojos y marrones entraba en el sentido común.

¿Cómo contrarrestar el discurso negacionista?

Sin embargo, en *Les Jours de notre mort* (Éditions du Pavois, 1947) [*Los días de nuestra muerte*], el ex deportado francés David Rousset describía las situaciones a las que cotidianamente se confrontaban los prisioneros políticos, y donde debían tomar decisiones en situaciones extremas. Stéphane Hessel –el au-

tor de *Indignense!* (8)–, Imre Kertész –Premio Nobel de literatura en 2002–, y también el escritor Jorge Semprún, en *Viviré con su nombre, morirá con el mío* (Tusquets, 2001), no ocultaron haber sido salvados por los “capos rojos”, de la misma forma que Stefan Jerzy Zweig, cuyo nombre había sido tachado de una lista de deportación de niños. El libro de Rousset nunca se tradujo al alemán. Escribir sobre la vida cotidiana en los campos nazis sin haberlo leído es como si los historiadores que trabajan sobre los campos de trabajo forzado soviéticos ignorarán *Archipiélago Gulag* de Alexandre Soljenitsyne. En Buchenwald, una exposición titulada *Leitmotive der DDR* (“Las leyendas de la RDA”) estuvo completamente dedicada a la deconstrucción del “mito”. Allí se exhibieron los “crímenes” de los prisioneros políticos. ¿Qué queda pues de los padres fundadores de aquel Estado que había reivindicado la herencia antinazi?

Basándose en el concepto de totalitarismo, la interpretación dominante de la historia de la RDA induce la equivalencia entre el régimen comunista y el régimen nazi (9). La política de memoria que aliena, financia y propaga, en particular, la Fundación para la reevaluación de la dictadura del Partido Socialista Unificado de Alemania (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur), confirma que, si el antifascismo fue la religión de Estado de la RDA, el anticomunismo fue la de la República Federal de Alemania (RFA, Oeste).

Dicho enfoque llevó agua al molino de la AfD, que lo utiliza sin matices. Este partido, producto de la extrema derecha procedente del oeste de Alemania, que se construyó sobre las ruinas de la RDA, se apoya sobre una representación unívoca y demonizante de la experiencia de Alemania Oriental, vehiculada tanto por los medios como por las obras científicas. La AfD aprovecha el resentimiento de una parte de la población de Alemania Oriental, y la reduce al rol de víctima del régimen comunista o de colaboradora de una dictadura.

En Buchenwald, restablecer los hechos y los méritos se impone como una de las primeras medidas a tomar para contrarrestar el discurso negacionista. Es hora de pensar en ello. ■

1. El “plan de paz” presentado el 28 de enero por Donald Trump refuerza las amenazas de anexión de las colonias situadas en los territorios de Cisjordania conquistados por Israel desde la Guerra de los Seis Días, en 1967.

2. Cada categoría de detenidos llevaba un triángulo de distinto color abrochado al pecho. El de los políticos era rojo, y los de derecho común llevaban uno verde.

3. Campo donde, en fábricas subterráneas, se fabricaban los misiles V2.

4. Eugen Kogon, *El Estado de la SS: el sistema de los campos de concentración alemanes*, Alba Editorial, Barcelona, 2005.

5. Bruno Apitz, *Desnudo entre lobos*, Editora Tecniciencia, Montevideo, 1966.

6. Véase Bill Niven, *The Buchenwald Child: Truth, Fiction and Propaganda*, Camden House, Rochester, 2007.

7. Lutz Niethammer (bajo la dir. de), *Der gesäuberte Antifascismus*, Akademie Verlag GmbH, Berlín, 1994.

8. Stéphane Hessel, *Indignose!*, Ediciones Destino, Barcelona, 2011.

9. Véase Carola Haehnel-Mesnard, “La RDA dans le (rétro)viser. Plaidoyer pour une autre perception”, Symposium Culture@Kultur, Vol. 2, Berlín-Toulouse, 2020.

*Historiadora. Autora de *Une vie contre une autre. Échange de victime et stratégies de survie dans le camp de Buchenwald*, Fayard, París, 2014, y, más recientemente, de *La Loyauté à tout prix: Les floués du “socialisme réel”*, Le Bord de l'eau, Lormont, 2019. Traducción: Victoria Cozzo

El porqué de la rosa

Rojo profundo

por Zulma Ramirez y Geoffrey Valadon*

Símbolo romántico por excelencia, la rosa oculta una cadena de producción dañina para el medio ambiente y la salud de quienes trabajan –por poco y nada– en sus plantaciones. Países como Etiopía, Kenia y Colombia sufren San Valentín y el fervor publicitario que trae aparejado esa fecha.

¿Qué es una rosa? ¿Una estrategia vegetal para incitar a los insectos a transportar el polen? ¿Una flor perfumada? ¿Un objeto de goce visual, fragmento de la naturaleza en medio del artificio urbano? Es en principio un producto que compramos para regalar; un símbolo de amor y de respeto que la industria publicitaria se dedica a fomentar en eventos como el Día de la Madre o San Valentín. Regalo listo para consumir y que no exige casi ningún cuidado por parte del destinatario, la rosa, una vez marchita, termina en la basura. Es ahí mismo donde hay que ponerla, y no en el compost, dada la carga química de sus tejidos y de su agua.

El ciclo de vida de una rosa empieza ocho años antes que un contenedor de basura la lleve al incinerador. En una rosaleda alemana, holandesa o francesa, los hibridadores cruzan pólenes y pistilos de diferentes plantas para unir sus características de resistencia, de forma y de productividad. Esta última se mide en cantidad de tallos por metro cuadrado, indicador crucial que, para una flor de supermercado cultivada a baja altitud, asciende a 240. La elección de las formas y de los colores depende mucho de la moda floral del momento, que se suma a la moda de la indumentaria. Así el sector renueva regularmente sus variedades. Como el gusto en los tomates industriales (1), el perfume de las rosas solo ocupa el último lugar en la lista de los criterios de calidad. “En la selección, la emoción está en segundo plano”, reconoce Matthias Meiland, importante hibridador francés. Este proceso desemboca en el ingreso de una patente, y luego la colocación en el mercado de la nueva variedad.

Un agricultor compra una variedad al precio de 1 dólar la planta, después paga 0,15 centavos de dólar de regalías por año. Le alcanza con algunas semanas al hibridador para llenar un invernadero: sobre la planta modelo, se corta un fragmento que se reconstituye sin reproducción sexual, luego se repite esta reproducción por esquejes para obtener miles de clones. Cada cual está injertado en raíces que facilitan la adaptación al clima ecuatorial y lo vuelven menos sensible a las enfermedades.

Aunque la cultura de la rosa se remonta a la Antigüedad, fue en el siglo XIX cuando las técnicas de hibridación modelaron la rosa moderna, con sus flores carnosas y sus tallos rectos. Después de la guerra, siguió la industrialización agrícola, la mecanización, la revolución fitosanitaria. El sector se ponía a calentar sus invernaderos en invierno para producir variedades que, de otra manera, no crecerían bien en los climas europeos. Con el shock petrolero de los años 1970, este método se volvió menos rentable, de manera tal que nace una competencia en otros continentes. Los industriales apuestan entonces a los climas ecuatoriales, con mano de obra y tierras baratas, como en los Andes de Colombia y de Ecuador (alrededor de 15 dólares por día de trabajo en 2018). Unos diez años más tarde, los productores europeos invierten en las montañas de Kenia (3 ó 4 dólares por día) y de Etiopía (alrededor de 1 dólar por día), geográficamente más próximas a sus mercados consumidores.

Estos países cuentan con tres recursos esenciales: el clima, el agua y la mano de obra. Ubicadas cerca del Ecuador y en altura, las flores captan el máximo de radiaciones solares y se benefician de un clima regular a lo largo de todo el año, sin heladas ni canículas. Para maximizar estas radiaciones y controlar la atmósfera, los cultivos se realizan bajo invernaderos en los que la temperatura asciende a 35°C. Al principio, las explotaciones ocupaban tierras muy fértiles, pero, dado que estos monocultivos son propensos a muchas enfermedades, contraídas principalmente a través de las raíces, desde los años 2000 los rosales ya no crecen en el suelo, sino sobre un sustrato vegetal o sintético inerte.

A costa de todo

Las rosas beben mucho: de 7 a 13 litros de agua por pimpollo según los sistemas de cultivo. Y los millones de plantas drenan sedientas los recursos hídricos locales, e incluso nacionales. En especial porque, a menudo, los productores usan de manera gratuita el agua de los lagos o de las napas freáticas. Tanto la región de la sabana de Bogotá como los lagos de Kenia y de Etiopía (2) sufrieron así una doble crisis de agua: escasez para las poblaciones autóctonas y contaminación de las fuentes que afecta la salud humana y los ecosistemas. Movilizaciones locales y sus apoyos internacionales presionaron a las empresas para que cambiaran sus prácticas. Las compañías más importantes aseguran que la recuperación de las aguas de lluvia y la reutilización del agua usada dividen por dos el consumo. El riego y la alimentación se realizan ahora por goteo, y el agua acarrea los fertilizantes y otros productos fitosanitarios en el sustrato fuera del suelo.

En esas latitudes, las rosas florecen todo el año. Sin embargo, satisfacer la demanda relacionada con las fiestas del calendario como San Valentín implica una planificación rigurosa. Los roscultores controlan el día de eclosión del pimpollo mediante una talla específica cuya fecha, calculada en función de la altura y de la exposición al sol, se hace en Colombia en promedio noventa y cinco días antes del envío de las cajas. Es un gesto preciso, efectuado en gran parte por mujeres, consideradas más minuciosas y disciplinadas. Desde los años 90, las cadencias aumentan, y muchos trabajadores colombianos sufren múltiples tendinitis. “Entre mis colegas, uno de cada dos sufre del túnel carpiano –cuenta Rocío-. No nos quejamos para no pasar por sindicalistas”. Como informa Inés Maroquin, de la Organización Nacional de Obreros Trabajadores de la Floricultura Colombiana, los encargados repiten incansablemente “que a la empresa no le va bien y que los sindicatos traen la quiebra” para callar a las trabajadoras.

La rosa requiere de muchos cuidados. Una flor cortada no puede tener ninguna mancha en un pétalo o una hoja: tiene que ser una “reina”, un “esplendor”, una criatura de “elite”, como sugieren los nombres de grandes empresas colombianas (3). Para no correr ningún riesgo, se rocía a las plantas con pesticidas, funguicidas y bactericidas. Los productores no comunican ningún tipo de cifras, pero Khaoula Toumi, doctora en Agronomía de la Universidad de Lieja, observó que

las flores contenían “de cien a mil veces más de lo que se autoriza en la alimentación” (4). En los pueblos de la sabana de Bogotá, muchas trabajadoras están preocupadas por los abortos espontáneos, malformaciones en los niños o cánceres. El sindicato Untraflores lamenta que no haya estudios exhaustivos acerca del impacto sanitario de la roscultura, aunque algunos estudios establecen una conexión (5). “Es difícil hacer un seguimiento independiente de la salud de los trabajadores en granjas que son como feudos”, declara Tomás Enrique León Sicard, del Instituto de Estudios Ambientales de Bogotá.

Muchos gerentes de explotaciones, por su parte, juran que eso es algo del pasado y sostienen que mejoraron sus prácticas. Sin embargo, las mujeres siguen estando exentas de las tareas que implican los productos fitosanitarios, y de la prima que las acompaña. “Es porque preparamos la comida, porque amantamos, y porque eso nos puede impedir tener hijos”, explica Daisy, una trabajadora colombiana que ama su trabajo. Su marido, por su parte, cambió de oficio y le pide en vano a su compañera que “no cambie su salud por dinero”. Las fumigaciones de funguicidas e insecticidas se dan durante todo el proceso de crecimiento de los tallos. Después de cada fumigación, el acceso a los invernaderos está prohibido durante el tiempo que las sustancias tardan en caer al suelo. La cuarentena dura algunos días o algunas horas, según los productos... y según las granjas.

Quince días antes de San Valentín, llegan en autobuses para la cosecha trabajadores de las regiones pobres del país, así como inmigrantes venezolanos. De repente, las jornadas de trabajo pasan de diez horas a dieciséis horas, en promedio. La cosecha implica gestos repetitivos, a un ritmo de 350 flores cortadas y cargadas por hora. Apenas concluida la operación, los vegetales son transportados a galpones refrigerados a 4°C para interrumpir la apertura del pimpollo y el marchitamiento. Ahí, otros equipos de mujeres sacan hojas y espinas, seleccionan, recortan, embalan, aplican funguicidas y arman ramos para los supermercados. Las flores consideradas como no aptas –por una densidad menor de pétalos, un tallo curvado, pequeñas manchas o ligeras variaciones de color– serán destruidas o vendidas a bajo precio en el mercado nacional.

Un largo camino

La cosecha continúa, y ya comienza el ida y vuelta de los camiones refrigerados hacia el aeropuerto –la proximidad de esta infraestructura se cuenta entre los criterios de elección de las zonas de producción–. El transporte se efectúa bajo protección, para evitar robos o la introducción de estupefacientes, y bajo el ojo discreto de investigadores que persiguen los convoyes que no pagaron las regalías a los hibridadores occidentales. El mantenimiento de la cadena de frío hasta los depósitos del cliente aumenta considerablemente los costos de transporte. Mientras que las flores producidas en Colombia y en Ecuador están mayormente destinadas al mercado estadounidense (0,85 centavos de dólar por kilo transportado), las cultivadas en Kenia o Etiopía viajan hacia Europa. El transporte representa el 90% de la emisión de carbono de las flores de Kenia. Pero los cultivos holandeses en invernaderos iluminados y calentados tendrían un impacto seis veces mayor (6).

Dos días después del corte, los cargamentos de rosas llegan a Aalsmeer, la Bolsa Mundial de las Flores que está en Holanda, o a Miami, el núcleo del sector en Estados Unidos. Ahí se subastan entre los mayoristas y los supermercados, luego se las lleva en camiones a los centros de distribución de las grandes ciudades. Llegan a los floristas cinco días después de haber sido cortadas.

La venta de exportación se realiza en dólares: alrededor de 20 a 30 centavos la rosa al salir de la granja, 80 centavos a los comer-

ciantes y 1,5 dólares para el consumidor. Una tarifa que se duplica o triplica en San Valentín. Los mayores productores pertenecen a grandes grupos estadounidenses o europeos, que impulsan la firma de los tratados de libre comercio cuya puesta en práctica quebró a los productores de Estados Unidos. Pero, en contrapartida, el lobby agrícola estadounidense consiguió que se sacaran los impuestos a la exportación de soja, de trigo, de maíz y de aceite a Colombia (7). “Una tragedia –se lamenta Ricardo Zamudio, de Corporación Cactus, una asociación medioambiental colombiana–. En tierras fértiles, la producción floral de exportación reemplaza a los cultivos locales destinados a la alimentación, y estos acuerdos comerciales terminan de destruir nuestra soberanía alimentaria”.

Las flores llegan al florista unos días antes de la fiesta en cuestión, en el momento en que las campañas publicitarias exaltan la belleza de las rosas. Entonces empieza una nueva serie de manipulaciones: “Las botas y las manos en la humedad. En realidad, un trabajo sucio”, comenta un florista francés. Contrariamente a lo que es la norma para las frutas y verduras, la reglamentación no exige ningún tipo de etiqueta acerca de la proveniencia de las flores. Así, pocos clientes saben que casi la totalidad de las rosas provienen de países ecuatoriales (8). Los floristas conocen la carga química que se utiliza en la producción, pero no perciben peligro para sí mismos. Khaoula Toumi sin embargo identificó residuos de más de cien sustancias tóxicas en las manos de los floristas belgas, y setenta en su orina –de las cuales algunas están prohibidas en Europa–. Con la excusa de que no comemos (o ya no comemos) las flores, la industria hortícola queda parcialmente fuera de los debates y de las normas sanitarias; la ola de lo bio no la toca. El sector colocó etiquetas “verdes”, pero se trata de autocertificaciones o de organismos privados que dependen de los industriales. “Los trabajadores son apartados de la evaluación de las prácticas”, señala Zamudio.

En los países consumidores, algunos cultivadores de flores cortadas parecen decididos a salir del productivismo: con pequeñas empresas, producen variedades locales o viejas, adaptadas a la estación, minimizan el uso de insumos químicos, apuntan a la clientela de las proximidades y a veces proponen ellos mismos los arreglos florales. Todavía marginal, su enfoque, menos dependiente en cuestión de capitales, pero más exigente tanto en mano de obra como en conocimientos específicos, resuena con el de las Asociaciones para el Mantenimiento de una Agricultura Campesina. No es casualidad que algunos de estos floristas ofrezcan sus flores al lado de las verduras del horticultor vecino. En sus locales, solo se encuentran rosas en los días lindos. Son más pequeñas, tienen más aroma. Y se las puede meter en el compost. ■

1. Véase Rick Fantasia, “El jugo de tomate lubrica las máquinas”, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, junio de 2017.

2. Véase Christelle Gérard, “El revés del milagro económico etíope”, *Le Monde diplomatique*, edición chilena, abril de 2019.

3. Queens Flowers, Splendor Flowers, Elite Flowers.

4. Khaoula Toumi, “Exposition des travailleurs aux résidus de pesticides sur les fleurs coupées et sur les produits horticoles”, Universidad de Lieja, 2018.

5. Mauricio Restrepo *et al.*, “Prevalence of adverse reproductive outcomes in a population occupationally exposed to pesticides in Colombia”, *Scandinavian Journal of Work, Environment and Health*, Helsinki, Vol. 16, N° 4, agosto de 1990; Marcela Varona *et al.*, “Alteraciones citogenéticas en trabajadoras con riesgo ocupacional de exposición a plaguicidas en cultivos de flores en Bogotá”, *Biomedica*, Vol. 23, N° 2, Bogotá, 2003.

6. Adrian Williams, “Comparative study of cutroses for the British market produced in Kenya and the Netherlands”, Cranfield University, 2007.

7. Damian Paletta, “In rose beds, money blooms”, *The Washington Post*, 10-2-18.

8. En Francia, el 99% de las rosas cortadas son importadas. “Bilan annuel - Commerce extérieur français des produits de l'horticulture”, FranceAgriMer, Paris, 2016.



Una historia natural de la moralidad humana

Michael Tomasello.
Ediciones Universidad Católica de Chile, 2019, 257 páginas

Este libro es la continuación del esfuerzo de la Universidad Católica para traducir y coeditar el trabajo de Tomasello. El autor parte de la premisa “de que la moralidad humana es una forma de cooperación, específicamente, la forma que fue surgiendo a medida que los humanos se fueron adaptando a formas de interacción y organización social nuevas y exclusivas de la especie”. Primero, los retos ecológicos obligaron a los humanos primigenios a recolectar en grupo o morir. Para coordinar estas actividades colaborativas desarrollaron habilidades cognitivas de intencionalidad conjunta, que aseguraban que los socios reconocieran los estándares normativos de cada rol y los comprometían a repartirse lo recolectado, según un sentido compartido de confianza, respeto y responsabilidad. Después, y en la medida en que la población humana creció y la división del trabajo se hizo más compleja, habrían surgido distintos grupos que van exigiendo lealtades, acuerdos e identidad cultural.

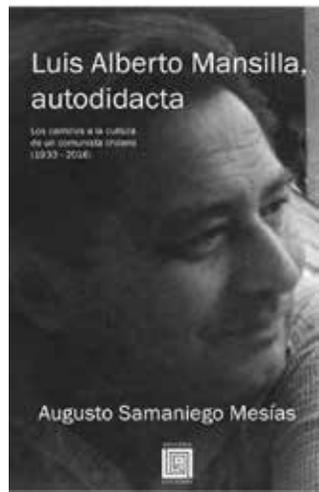
Esto que llama identidad cultural habría sido posible por “la naturaleza perspectivista de los símbolos lingüísticos, y el uso de estos símbolos en interacciones discursivas en las que se comparan y comparten explícitamente diferentes perspectivas, proporcionan la materia prima a partir de la cual los niños de todas las culturas construyen las representaciones cognitivas flexibles y multiperspectivistas -y tal vez incluso dialógicas- que otorgan a la cognición humana gran parte de su formidable poder” moral.

Sobre la base de datos experimentales, al igual que en su anterior libro, nos propone un “imaginario eslabón perdido”, creado en base a nuestros conocimientos alcanzados de los procesos cognitivos de los grandes simios y “aspectos escogidos del pensamiento de los niños pequeños”. Con esta base nos muestra la manera en que los humanos primigenios se convirtieron gradualmente en una especie ultracooperativa y, eventualmente, moral.

Nuevamente, el resultado es prometedor. Sin embargo, no me parecen claras algunas de sus referencias, como aquella de que “los mercados capitalistas son instituciones culturales cooperativas”; ¿a qué se refiere? Nuevamente, me parece que hay generalizaciones innecesarias. Pero, se trata de una poderosa “bomba intuitiva”, que sin duda ayudará a muchas otras reflexiones de diversas áreas de las ciencias sociales.

Me quedo con su importante aporte a la actualización de nuestros conocimientos experimentales en ciencias sociales. Un libro de fácil y provechosa lectura. ♦

Gonzalo Rovira



Luis Alberto Mansilla, autodidacta Los caminos a la cultura de un comunista chileno (1933-2016)

Augusto Samaniego Mesías
Ediciones Ariadna, diciembre 2019, 190 páginas.

Las narrativas testimoniales pueden adquirir distintas formas: memorias, autobiografías, diarios de vida, entrevistas. En algunos casos estas adoptan modalidades híbridas, como ha ocurrido con entrevistas que, por la intervención de un tercero, se transforman en memorias o relatos novelados.

En Chile, podemos encontrar múltiples ejemplos para el caso de militantes de izquierda, lo que ha enriquecido notablemente el acervo documental, transformándose en material ineludible en conocer distintos aspectos de la vida social, política y cultural, desde la óptica particular de un testigo. Desde las clásicas memorias de Elías Lafertte (1957) y Juan Chacón Corona (1968), hasta los más recientes relatos de Víctor Contreras (1981), Orlando Millas (1993 y 1996), Luis Corvalán (1997), Carlos Toro (2007), Iván Ljubetic (2009), Francisco Torrejón (2010) y José Visiani (2015), los recuerdos de viejos militantes comunistas se han sumado a la documentación confidencial del Comintern, el FBI y la CIA, generando nuevas perspectivas de análisis.

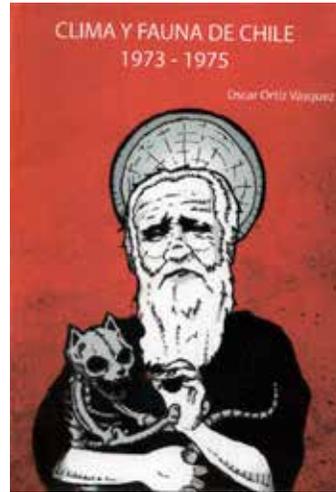
El presente libro preparado por Augusto Samaniego, sobre la vida de Luis Alberto Mansilla, está construido sobre base de varias entrevistas, que se desarrollaron entre 1996 y 2015. A diferencia de otros textos similares, en este Samaniego no pretende ocultar su participación como interlocutor, lo que se traduce en un relato a dos voces.

Toda entrevista busca desentrañar uno o varios aspectos peculiares en la vida del entrevistado. En este caso, Samaniego se enfoca en la amplia formación intelectual de Mansilla, reconocido por su inagotable conocimiento en temas de literatura, teatro y cine. Lo que obsesiona a Samaniego es el recorrido vital de este autodidacta, que, nacido en un mundo de pobreza, logró alzarse como un destacado comentarista en varios diarios y revistas.

Las situaciones fluyen con agilidad a lo largo de la narración. Unas pocas ya habían sido relatadas en algunas entrevistas previas, pero la mayoría son inéditas y permiten dar cuenta del ambiente del conventillo, donde se crio, las escuelas donde estudió o sus diversos trabajos.

Aunque, al final de su lectura, tiende a quedar la sensación de que muchos otros temas pudieron haber sido abordados, es innegable que nuestra aproximación a esta época se ve enriquecida. Quizás algún juicio, aquí o allá, pueda no ser compartido, pero justamente esa dimensión subjetiva del relato, que a veces puede generar polémica, es una de sus mayores fortalezas. ♦

Jorge Rojas F.



Clima y fauna de Chile (1973 - 1975)

Oscar Ortiz Vásquez
Ediciones Liz, Chile, 2017, 126 páginas.

La obra de Ortiz constituye un testimonio inédito de lo ocurrido en Chile en los primeros dos años de la dictadura. Ese testimonio tiene el enorme valor de ser el de alguien quien acompañó, desde los comienzos de ese periodo, a Clotario Blest Riffo, fundador de la CUT e incansable luchador social.

Aun cuando en lo esencial se trata de un testimonio, el autor expresa algunos juicios y análisis que más que revelar las opiniones del viejo líder, manifiestan su propia percepción de aquella realidad. Es el punto de vista de un actor social que se declara anarquista, aun cuando se sabe que Clotario más que ácrata era esencialmente un cristiano comprometido.

Ortiz relata como, desde el mismo 11 de septiembre, Blest, con la ayuda de otros militantes de los derechos humanos venidos de diversos horizontes, puso en marcha el embrión de una organización para ayudar a las víctimas de la represión y de la violencia cívico-militar, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos (CODEH). Entre otros en él estuvieron el padre Ignacio Vergara, el recién fallecido cura obrero Mariano Puga, el abogado sindicalista Eduardo Long Alessandri, el zapatero anarco-sindicalista Ernesto Miranda y varias religiosas y cristianos comprometidos. Participó también en ese comité, hasta su detención y desaparición, el dirigente clandestino del PS, Exequiel Ponce. A título personal y no representando a su partido, que en ese entonces aún estaba embarcado en la conspiración golpista, estuvo Santiago Pereira, líder sindical y ex diputado de la DC.

Es interesante descubrir en los recuerdos de Ortiz algunos aspectos que la historia ha olvidado como el rol del sindicalista Tucapel Jiménez quien justificó frente a la OIT la disolución de la CUT y la prohibición de toda vida sindical decretada por la Junta militar. Del mismo modo descubrimos en este relato, que mientras el cardenal Silva Henríquez daba todo su apoyo al Comité pro-Paz y luego a la Vicaría de la Solidaridad para denunciar las violaciones de los derechos humanos, González Contesse, Serenísimo gran maestro de la masonería chilena se negaba a toda acción de su organismo en defensa de las víctimas de la dictadura.

Para todo lector curioso de nuestra historia, pero en particular para los menores de 50 años que no conocieron ese lúgubre periodo, la lectura de esta obra es especialmente aconsejada. ♦

Ricardo Parvex



Estallido social y una Nueva Constitución para Chile

Mario Garcés,
LOM Ediciones, 2020, 88 páginas

“¡Despertó, despertó, Chile despertó! ha sido la consigna que miles de manifestantes corean por las calles y por “las grandes alamedas” luego del 18 de octubre de 2019”. Así empieza el relato de Mario Garcés sobre los acontecimientos que transformaron para siempre la visión de los chilenos sobre su propio país. Pocos son los autores que aún se atreven a explicar un estallido social que sigue siendo difícil de entender, incluso para los que lo originaron. Mario Garcés, historiador especialista en el estudio de los movimientos populares y profesor en la Universidad de Santiago, intentó resumir en pocas páginas el golpe en la cara que fue para el gobierno el movimiento social iniciado el 18 de octubre. El relato, presentado bajo la forma de diario de vida, comenta, a medida que pasan las semanas, la evolución de la revuelta social más grande de Chile desde el “retorno a la democracia” y analiza sus raíces.

El autor logra relacionar los numerosos temas que llevaron a quebrar el laboratorio del neoliberalismo que ha sido Chile desde el 11 de septiembre de 1973 hasta hoy en día. Violencia simbólica y económica, desigualdad, malestar social profundo; al parecer todo tendía a la fractura del modelo, aunque nadie lo previó. Muestra cómo el estallido social chileno se convirtió en una forma de expresión popular en un país donde los vínculos entre la clase política y los ciudadanos son muy débiles, por no decir casi inexistentes. Comenta el papel preponderante de los jóvenes de casi todas las clases sociales. “Nos quitaron todo, hasta el miedo” es el eslogan que plasman en sus carteles, muestra de que los jóvenes ya no sienten el miedo que conocieron sus padres, porque ellos no vivieron la dictadura.

Garcés pone tanto una mirada optimista como pesimista sobre la evolución de los acontecimientos. Habla de una posible “revolución democrática” en Chile, pero no olvida comentar los pocos cambios en la forma de reaccionar del gobierno. Acceso a las demandas, pero todavía sin instaurar un diálogo con los movimientos sociales y sindicatos, omitiendo totalmente la meta de un cambio constitucional. Así, “Asamblea Constituyente” se transformó en “Convención Constitucional”. Al parecer, todo se ha hecho para que el pueblo que se está manifestando no pueda expresarse por los canales oficiales. Es más, critica una represión política y armada cada vez más fuerte, que se convierte en un verdadero “terrorismo de Estado”.

Nos deja, en fin, el año 2019 con un “epílogo abierto”, lo cual refleja de buena forma la incertidumbre de un movimiento que, aunque parezca fuerte, siempre parece chocar y rebotar contra los carros blindados de los cuestionados Carabineros de Chile. ♦

Caroline Chambon



Elena Caffarena
Una mujer pública. Antología

Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, Cátedra Amanda Labarca, Universidad de Chile Editorial Universitaria, Santiago, 2020, 458 páginas.

Un siglo de vida, 1903-2003, una mujer imprescindible en la conquista de derechos y contra la discriminación de las mujeres chilenas. Desde temprana edad, siendo estudiante de la carrera de Derecho, se incorporó a la Federación de Estudiantes Universitarios de Chile, para desde allí luchar por los derechos de las mujeres y recordar el deber de los hombres en momentos de combates, como en 1925, para luego formar parte de la primera Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales, formada por trabajadores, educadores, profesionales y feministas.

Fundadora, junto a otras mujeres, del Movimiento de Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH), en 1935, que

luchaba por la igualdad de salario, interrupción de embarazos no deseados, derecho al sufragio, salarios justos para las empleadas domésticas, entre otras reivindicaciones de las mujeres de principio del siglo XX.

Como abogada, dedicó sus trabajos a la igualdad de las mujeres en el matrimonio y a la abolición del trabajo de mujeres a domicilio a principio del siglo XX. En 1957 publicó *El recurso de amparo frente a los regímenes de emergencia*, para combatir el atropello a los derechos humanos en los gobiernos de Gabriel González Videla y Carlos Ibáñez del Campo. Artículo precursor en el campo de la defensa contra el atropello a los derechos humanos en Chile. Texto jurídico señero, aporte invaluable en los tiempos de la dictadura entre 1973 y 1990, pieza fundamental en complementar la labor de las abogadas y abogados de derechos humanos que hicieron frente a la dictadura para salvar vidas. Revisitada por diferentes autoras en el siglo XXI, destacan la vigencia de sus escritos y propuestas, especialmente en el campo de los derechos de las mujeres y los derechos humanos, tanto desde lo social, como lo político y lo jurídico. La historia del siglo XX desde la lucha de las mujeres, nos abre nuevas perspectivas en la situación de rebelión social, y en los tiempos del coronavirus que nos obliga al confinamiento en las casas; tiempo para leer, entre otras múltiples actividades, y hurgar en la historia de Chile, a través de la historia de una mujer ejemplar. *Más que las leyes son los prejuicios los que impiden en mayor grado la intervención de la mujer en los negocios públicos.* ♦

Margarita Iglesias Saldaña

Adquiéralo en las mejores librerías del país y en nuestra sala de ventas en Concha y Toro 29, metro República, Santiago.

www.lom.cl

LOMEditiones @LomEdiciones

Ediciones Espartaco en digital



Libros digitales en PDF en venta a \$2.500 en: www.editorialauncreemos.cl

Virialidad y confinamiento

por Denis Duclos*

Es extraño ser un participante desarmado ante el ascenso de un cataclismo, y de lamentarse por ser un observador. Nos atraviesan pasiones contrarias. La indiferencia forzada y el miedo sin control: la primera llama a seguir como si no pasara nada, el segundo a vigilar y castigar todo movimiento prohibido.

Dejemos al valeroso personal sanitario (y a los especialistas en infectología, epidemiología y virología) determinar la medida de una y otra actitud. Siguiendo a Plinio el Viejo (23-79 a.C.) observando a la gente alejarse tranquilamente de la lluvia de cenizas sobre Pompeya bajo almohadones –las mascarillas de la época–, trabajemos más bien en señalar algunos aspectos que recorren nuestra “sociedad-mundo” presa de la matemática del contagio.

En un pasado reciente, pandemias con números equivalentes –como la “gripe rusa” de 1889 (que alcanzó a una de cada dos personas)– o peores –como la “gripe española” de 1918, que se cobró varias decenas de millones de muertos, o la “gripe asiática” de 1957– no provocaron ningún pánico ni mundial ni local. Pero, desde hace poco, la humanidad se deja conmover por peligros planetarios asociados a nuestras diversas desmesuras. ¿No hay ninguna relación entre la pesadez de esta angustia y el hecho de que una enfermedad comparable a las que sufrimos desde siempre pueda movilizar los combates hasta este punto?

Habíamos sospechado en 1996 que la enfermedad de la vaca loca transmitida al cerebro del hombre representaba, vía las harinas animales que alimentan el ganado, el canibalismo impuesto a nuestros pobres bovinos (1), y por lo tanto un espectro de *Cuando el destino nos alcance*, esa película de Richard Fleischer (1973) en la que los jóvenes humanos sobreviven devorando la carne de los viejos. Trece años más tarde, la epidemia de la gripe H1N1 creó inquietudes sobre las manipulaciones posibles para una guerra bacteriológica (2).

No hay que ir a buscar lejos para el Covid-19. Todo lo que nos da miedo de este virus preexiste en la mundialización actualizada: incertidumbre y sospecha acerca de las causas, duda acerca de los efectos adversos, virialidad cada vez más rápida (virus informático –extraoficial y oficial como las cookies– o reacciones instantáneas de la bolsa en 2008), dificultad de las contramedidas, peligros incrementados de conflictos, de crisis económicas, de errores políticos, de cambios autoritarios del Estado de derecho, etcétera.

Pero, a diferencia de las mundialidades económica y tecnológica que se abren a tendencias poco reversibles, la rompiente actual evoluciona hacia una cura probable, a pesar de su tributo de muertos. Se cuestiona la elección del mejor recorrido, y no la finalidad del proceso de cura y de sus coerciones, eventualmente discutidas. Existiría así, en el fondo de la dramaturgia del virus, esta vez actuada por todos los humanos, un frágil optimismo que ignora la variante colapsológica del ecologismo. Esto sin hablar de un “beneficio” que sigue siendo tabú evocar: la reducción inmediata y efectiva de las poluciones y de los residuos de recursos energéticos con la que el virus nos recompensa –claro está,



Foto: Sebastian Mejia

Alejandro Urrutia, Gravedad (Acero pulido y piedra volcánica Llaima) 2020 (Exposición en Galería NAC hasta el 30 de mayo) Recorrido virtual en <http://www.galerianac.cl/circular-alejandro-urrutia/>

como contrapartida del desempleo técnico y de su repercusión financiera, cuya factura nos espera...–.

Todavía hay que percibir las paradojas de esta esperanza. Bajo el activismo de la respuesta cuasimilitarizada a la pandemia, subsiste una reticencia a orientarse hacia las maneras de vivir que exigiría un futuro sustentable. La oposición guerrera entre virus y confinamiento de los pueblos señala la dificultad de una victoria: aunque los reagrupamientos de trabajo, de educación, de ocio, las intersecciones gigantes del desplazamiento y del consumo estén en el comienzo de las “grapas”, dándoles inicio a las trayectorias explosivas del virus, eso no nos indica algo que hayamos rechazado ver. La sociedad del futuro vivible tiene que estar organizada por entidades más pequeñas y cordiales, menos dependientes, menos conectadas (incluidas las redes de comunicación utilizadas por sus administradores para vigilar a las multitudes).

Sin criticar a los chinos o a nuestras autoridades sanitarias, ¿la presentación de una batalla librada a golpes de mascarillas y prohibiciones, y que desemboca en hospitales que se construyen tan rápido como se desarman, no participa de una teatralización que es también viral, de la cual un motivo es, detrás de la necesidad legítima de actuar en conjunto, la repugnancia a prevenir de manera me-

nos enrolada las causas de las tragedias planetarias?

Desde luego, el mercado ilegal de animales salvajes de Wuhan era frágil, pero nadie puede decir con certeza de dónde salió el virus, siendo que varios de los primeros contaminados no tenían ninguna relación con dicho mercado. En muchos campos, la ciencia experimentó orientaciones peligrosas y sistemáticas, al punto tal que están quienes imaginan que el virus habría podido escaparse de un laboratorio instalado no lejos del mercado. Una preocupación filantrópica y sanitaria auténtica a menudo pudo estar acompañada de errores o de desviaciones. Cómo no pensar acá en los perturbadores endócrinos diseminados en el medioambiente en nombre de la lucha moderna contra los parásitos o la falta de higiene, o en el implante de “dispositivos médicos” acerca de los cuales a una investigación sería le cuesta calcular a la vez los miles de millones de ganancias y las decenas de miles de víctimas.

Incluso si no hubo salida de los patógenos estudiados en los dos grandes laboratorios de Wuhan, el inconsciente colectivo no puede sino recordar la cultura que favorece la enfermedad-mundo. En la Ciudad Gótica planetaria, la batalla de los superhéroes enfrenta a aquel que, “por el Bien”, agita en guardapolvo inmaculado probetas e inteligencias artificiales, con aquel cuya risa desesperada in-

ciencia la calle. Dos encarnaciones juveniles de la misma dificultad a comprometerse finalmente en un empleo sabio de la universalidad. Practiquemos entonces lo mejor posible los rituales protectores, sin por eso calificar de traidores a los que preguntan qué cosa, para arrancarle vidas a una enfermedad, tendríamos todos que evitar vivir... A riesgo de aumentar otras mortalidades epidémicas ya masivas, como los suicidios y las depresiones.

Hariamos buen uso de este tiempo suspendido reflexionando acerca de tres virialidades poco controladas: la virialidad de los poderes que se alinean unos con otros, tentados por las políticas represivas que aíslan a las naciones, las familias, las personas; la virialidad de las tecnologías que, ocupando lo humano después de haber saqueado la naturaleza, intenta realizar el pensamiento “indudable” mediante la persuasión focalizada de los espíritus que generaliza a la velocidad de la luz (de la cual participan las técnicas de movilización, aunque a veces “necesarias” en una primera instancia); la virialidad finalmente del dinero, acelerado por las dos primeras y acelerándolas a su vez, y que responderá de muy buena voluntad (para fabricar tests, vacuna o mascarillas eficaces que no tengan que tirarse a cada hora, etc.).

Supongamos que cada una de estas virialidades mundiales designa indirectamente un problema que incumbe al 98% de los sobrevivientes del Covid-19. ¿La pareja virus/confinamiento no sintetiza entonces la cuestión de la acción impuesta a los modos de vida comunitarios, familiares, personales? En un futuro cercano habrá que limitar las movilizaciones despilfarradoras, contaminantes y regimentadas. La experiencia del teletrabajo y de la telescolaridad merece ser retenida, con la condición de que evolucione hacia actividades “para uno”, liberando lazos de asistencia que no sean la sumisión a las jerarquías centralizadas del empleo y la instrucción. Es decir, lo contrario del confinamiento. Y que preservarían comunas democratizadas, capaces de compensar nuestras tentaciones eternas de poder vertical, de saber absoluto y de acumulación monetaria de la nada.

Resumiendo, el Virus mundial no es solo un enemigo: es una indicación. ¿De qué? Del hecho de que la mundialidad, jamás vivida con tanta intensidad por el género humano, debe reducir las angustias inmemoriales que lo empujan a las certezas invasivas: control del otro mediante el poder político, control de los objetos y de los cuerpos mediante la tecnociencia, control de la totalidad mediante las finanzas. Lo que nos asusta del Virus –la incertidumbre acerca de su naturaleza y su destino– es la imagen de lo que nos aterra en nuestra vida, y eso tanto más cuanto que una sociedad de gestión de las poblaciones nos lleva a creer que puede decidir todo y regular en lugar de nuestros compromisos mutuos. ■

1. Léase “Raisons et déraison d’une psychose”, *Le Monde diplomatique*, diciembre de 2000.

2. Léase “Psicosis de la gripe, espejo de la sociedad”, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, septiembre de 2009.

*Sociólogo.

Traducción: Aldo Giacometti